

55ª REUNION — Continuación de la 6ª SESION EXTRAORDINARIA — DICIEMBRE 21 DE 1973

Presidencia del doctor JOSE ANTONIO ALLENDE, vicepresidente 1º del Honorable Senado; del doctor AMERICO ALBERTO GARCIA, vicepresidente 2º del Honorable Senado, y del doctor ALBERTO M. FONROUGE, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Administrativos y Municipales

Secretarios: señor ALDO H. N. CANTONI y escribana pública IRMA S. DE CESARETTI

Prosecretarios: señores RAFAEL ARANCIBIA LABORDA y DELFOR W. CARESSI

SENADORES PRESENTES:

ALLENDE, José Antonio  
AVALOS, Pedro Isaac  
BARBORA de NASIF, Yamili  
BARONI, Danilo Luis  
BELENGUER, Emilio  
BRAVO, Leopoldo  
BRIZUELA, Guillermo Ramón  
BRIZUELA, Hugo Genaro  
CAMPORA, Pedro L.  
CANTONI, Apolo  
CARO, J. Armando  
CERRO, Francisco Eduardo  
CORNEJO LINARES, Juan Carlos  
CULASSO MATTEI, Luis  
CHAILE, Juan Carlos  
D'AGOSTINO, Lucio Roque  
DE LA RÚA, Fernando  
DÍAZ BIALET, Alejandro  
ESPERANZA, Joaquín Horacio  
EVANS, Carlos H.  
FONROUGE, Alberto M.  
FRANCO, Carlos A.  
FROIS, Domingo Andrés  
FRUGOLI, Amadeo Ricardo  
GARCÍA, Américo Alberto  
GARCÍA, Justino  
GRUBISICH, Pablo Eliseo  
HERRERA, Dermidio Fernando L.  
HERRERA, José Jorge  
JAUREGUIL, Rafael Zenón  
LEÓN, Luis A.  
LORENZO, Ramón  
LOSADA, Mario  
LUDER, Ítalo A.  
LUNA, Pedro Antonio  
MANCINI, Omar A.

MARTIARENA, José H.  
MARTÍNEZ, Julio César  
MAYA, Héctor Domingo  
MINICHELLI de COSTANZO, Martha S.  
MOREIRA, Miguel Orlando  
MORENO, Ramón Enrique  
MURGUÍA, Edgardo P. V.  
NÁPOLI, Antonio Oscar  
PAZ, Eduardo Alberto  
PENNISI, Afrio  
PERETTE, Carlos H.  
PERONI, Carmelo  
POSE, Jorge Juan  
PUGLIESE, Juan Carlos  
RODRÍGUEZ, Ginés Froilán  
SAADI, Vicente Leónides  
SALAS CORREA, Luis I.  
SALMOIRAGHI, José César  
SAPAG, Elías  
VAI, Buenaventura Justo  
VALLE de GONZÁLEZ, Leni Rosa  
VIVAS, Ángel Juan Gregorio  
ZARRIELLO, Raúl Jorge

AUSENTES, CON LICENCIA:

ANGELOZ, Eduardo César  
BENI, Juan Carlos E.

AUSENTES, CON AVISO:

BLANCO, Rodolfo E.  
BRITOS, Oraldo Norvel  
CÁCERES, Rubén Osvaldo  
CARNEVALE, Luis  
ELÍAS, Florencio  
LORENZO, Jorge Luis  
ROMERO, Humberto Antonio  
SOLARI YRIGOYEN, Hipólito

## SUMARIO

## 1.—Asuntos entrados:

I.—Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados. (Página 2940.)

II.—Comunicación oficial. (Página 2951.)

III.—Dictámenes de comisión. (Página 2951.)

IV.—Proyecto de ley del señor senador Díaz Bialek sobre desgravación impositiva de las entradas de cine para menores de 14 años. (Página 2952.)

2.—Continuación de la consideración del dictamen de la Comisión de Legislación General sobre reformas al Código Penal. Se aprueba con modificaciones. (Página 2953.)

3.—Consideración del dictamen de la Comisión de Legislación General sobre jurisdicción y competencia de tribunales nacionales. Se aprueba. (Página 2953.)

4.—A moción del señor senador Martiarena se resuelve pasar a cuarto intermedio. (Página 2964.)

5.—Consideración de los dictámenes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda sobre reforma tributaria.

I.—Impuesto a las ganancias. Se aprueba. (Página 2964.)

II.—Impuesto al valor agregado. Se aprueba. (Página 2983.)

III.—Impuesto a los premios de juegos y sorteos. Se aprueba. (Página 2989.)

IV.—Impuesto sobre capitales y patrimonios. Se aprueba. (Página 2991.)

V.—Impuesto al enriquecimiento patrimonial a título gratuito. Se aprueba. (Página 3000.)

VI.—Régimen de desgravación impositiva para compra de títulos valores privados. Se aprueba. (Página 3009.)

VII.—Régimen de coparticipación federal de impuestos nacionales. Se aprueba. (Página 3016.)

VIII.—Normas complementarias de la reforma tributaria. Se aprueba. (Página 3017.)

IX.—Emisión de documentos que instrumenten créditos. Se aprueba. (Página 3018.)

X.—Reformas a la ley 11.683, sobre procedimientos en materia impositiva. Se aprueba. (Página 3019.)

## 6.—Apéndice:

I.—Sanciones del Honorable Senado. (Página 3077.)

II.—Inserciones. (Página 3079.)

—En Buenos Aires, a los veintiún días del mes de diciembre de 1973, a la hora 12 y 48, dice el

**Sr. Presidente** (Allende). — Continúa la sesión. Por Secretaría se va a dar cuenta de los asuntos entrados.

**Sr. Secretario** (Cantoni). — (*Leyendo*):

## 1

## ASUNTOS ENTRADOS

## I

Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados

## 1

*Prórroga de la vigencia del impuesto creado por decreto ley 18.231/43 (a las apuestas hípicas). — Proyecto de ley en revisión*

Buenos Aires, 19 de diciembre de 1973.

*Señora presidenta del Honorable Senado:*

Tengo el honor de dirigirme a la señora presidenta, comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado en sesión de la fecha el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado:

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

Artículo 1º — Prorrógase por el término de un año a partir de su vencimiento, o hasta la sanción definitiva de la ley que se dicte como consecuencia de una nueva reestructuración de las entidades hípcas, prevista en el artículo 5º, el impuesto creado por el decreto ley 18.231/43, ratificado por ley 12.922, y sus adicionales establecidos por ley 13.235 y decreto ley 4.073/56, ratificado por ley 14.467, que fuera prorrogada por la ley 14.273 modificados por decreto ley 5.602/63 y modificados y prorrogados por decreto ley 6.778/63, ratificados por la ley 16.478.

Art. 2º — Deróga el decreto ley 2.375/63, ratificado por ley 16.478, y declárase rescindido el convenio celebrado entre la ex Secretaría de Estado de Hacienda y la Asociación Civil Jockey Club de la Capital Federal, que fuera aprobado por dicho decreto ley, determinándose que la administración y explotación de los hipódromos de Palermo y San Isidro estará a cargo de Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos.

Art. 3º — Condónanse las deudas, recargos, intereses, intereses de prórroga, intereses punitivos y cualquier otra sanción fiscal y honorarios relacionados con las deudas a que se refiere el presente artículo, existentes el 30 de noviembre de 1973, que mantengan las entidades administradoras de hipódromos, referidas exclusivamente a la actividad turfística, encuéntrase o no adheridas al régimen legal establecido para el Instituto Nacional de Actividad Hipica, provenientes de las leyes y decretos leyes indicados en el artículo 1º, siempre que no hubiesen sido pagadas o consignadas en pago.

Art. 4º — Exclúyese de los beneficios que otorga el artículo 3º de la presente ley a la Asociación Civil Jockey Club de la Capital Federal.

Art. 5º — Dentro de los ciento ochenta (180) días contados a partir de la promulgación de la presente

Art. 25. — Las entidades de capital, sociedades y empresas o explotaciones unipersonales sujetas a impuesto del título I de esta ley que habían resultado beneficiadas por una vigente exención del impuesto substitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes o un vigente diferimiento del pago de éste, otorgados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente, continuarán en goce de igual beneficio de exención o diferimiento con respecto al impuesto del citado título.

El beneficio resultante de lo dispuesto en este artículo no excederá el período establecido en las leyes promocionales que lo otorgaron o autorizaron su otorgamiento, ni el fijado en su caso por el acto de otorgamiento respectivo, con relación al impuesto substitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes, así como tampoco al saldo de ejercicios aún pendientes del goce del beneficio originalmente acordado.

Art. 26. — El impuesto a los réditos por el año 1973 y el impuesto de emergencia sobre éste creado por el artículo 1º del decreto ley 20.372/73 serán deducibles, para los contribuyentes del título II con relación a sus patrimonios netos al 31 de diciembre de 1973, en las mismas condiciones con que el artículo 12 autoriza la deducibilidad del impuesto a las ganancias.

Art. 27. — Los saldos a favor de los contribuyentes por impuesto substitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes sólo podrán computarse en la determinación del monto a ingresar por el impuesto del título I.

#### *Impuestos al patrimonio neto, substitutivo y de emergencia*

Art. 28. — Deróganse el artículo 5º del decreto ley 20.046/72 para los hechos imponible que prevé y que se produzcan con posterioridad al 1º de enero de 1973, así como la ley 14.060 y sus modificaciones para los capitales gravados por ésta y resultantes de los balances correspondientes a los ejercicios anuales que se cierran con posterioridad al 31 de diciembre de 1973.

Derógase el artículo 3º del decreto ley 20.372 de 1973 en la medida en que establece un impuesto de emergencia sobre el gravamen alcanzado por la derogación del párrafo anterior, así como el artículo 4º del mencionado decreto ley.

#### *Impuesto al parque automotor*

Art. 29. — Deróganse el decreto ley 18.530 y sus modificaciones para los hechos imponible que prevé y que se produzcan desde el 1º de enero de 1975, inclusive, en adelante.

Art. 30. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

SALVADOR F. BUSACCA.  
Alberto L. Rocamora.

### V

#### **Impuesto al enriquecimiento patrimonial a título gratuito**

##### **Dictamen de comisión**

*Honorable Senado:*

Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha considerado el proyecto de ley, venido en revisión de la Honorable Cámara de Diputados,

sobre impuesto al enriquecimiento patrimonial a título gratuito; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación con las siguientes modificaciones:

Artículo 2º — Reemplazar el inciso i) por el siguiente: «Inciso i) La obtención, por causa de muerte, del capital asegurado, cuando el beneficiario no hubiera sido quien contrató el seguro».

Artículo 4º — En la parte final, a partir de «...Se aplicará», corresponde párrafo aparte.

Artículo 5º — Reemplazar el inciso b) por el siguiente: «Inciso b) — El seguro al que se refiere el inciso i) del artículo 2º, de hasta cien mil pesos (\$ 100.000), salvo para los beneficiarios que fueran herederos forzosos del causante, en que corresponderá un monto de hasta trescientos mil pesos (\$ 300.000)».

Artículo 14. — Suprimir en el punto 2º del inciso a) la expresión «, según su condición económica y social».

Artículo 17. — Reemplazar en el tercer párrafo la expresión «el importe de cien mil pesos (\$ 100.000)», por la expresión «los importes del inciso b) del artículo 5º».

Artículo 20 — Agregar al final lo siguiente: «y hasta la concurrencia de su parte en dicho beneficio indiviso».

Artículo 21. — Reemplazar en los incisos c) y d) la expresión «dieciocho (18)» por la expresión «veinticuatro (24)».

Reemplazar en el párrafo final la expresión «del inciso c)» por la expresión «de los incisos c) y d)»; y la expresión «tres (3)» por la expresión «cuatro (4)».

Artículo 24. — Reemplazar en el primer párrafo la expresión «el inciso c)» por la expresión «los incisos c) y d)»; y la expresión «el primer año» por la expresión «los dos primeros años».

De acuerdo al artículo 91 del Reglamento, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de la Comisión, 20 de diciembre de 1973.

Humberto A. Romero. — Florencio Elías. — Luis A. León. — Joaquín Horacio Esperanza.

#### ANTECEDENTE

**Sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación**

(13 de diciembre de 1973)

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

#### **Impuesto al enriquecimiento patrimonial a título gratuito**

Artículo 1º — Todo enriquecimiento patrimonial que se obtuviere a título gratuito como consecuencia de una transmisión o acto que comprendiere o afectare uno o más bienes situados en la Capital Federal queda sujeto al impuesto

que se determinará y hará efectivo de acuerdo con las disposiciones de esta ley.

Son sujetos pasivos del impuesto las personas de existencia visible o ideal beneficiarias del enriquecimiento patrimonial a título gratuito.

Art. 2º — Están gravados con el impuesto de esta ley:

- a) Las herencias;
- b) Los legados;
- c) Las donaciones;
- d) Los anticipos de herencia;
- e) Las renunciaciones de derechos hereditarios, con excepción de las puras y simples efectuadas antes de aceptarse la herencia y siempre que, como consecuencia de ellas, no sucedieren al causante por representación los hijos menores del renunciante;
- f) Las renunciaciones de derechos creditorios, con excepción de las simples quitas desprovistas de la finalidad de beneficiar a otro;
- g) Los cargos impuestos a beneficiarios de enriquecimientos a título gratuito, salvo aquellos en favor del propio transmitente de los bienes;
- h) Las transmisiones de los derechos posesorios que dieren origen a la adquisición del dominio por prescripción ya cumplida en vida del causante, aunque el saneamiento u otorgamiento del título de propiedad se obtuviere por los derechohabientes;
- i) La obtención, por causa de muerte, del capital asegurado, cuando el beneficiario no hubiera sido quien contrató el seguro, y salvo para los beneficiarios que fueran herederos forzosos del causante hasta un monto de trescientos mil pesos (\$ 300.000);
- j) Cualquier otro hecho que implique un enriquecimiento patrimonial a título gratuito.

Los legados, donaciones y anticipos de herencia se encuentran comprendidos en la enumeración precedente cualquiera fuere su forma, modalidad o apariencia, incluidos los compensatorios, retributivos o con cargo.

Art. 3º — Se presume que existe el hecho imponible previsto en esta ley en los siguientes casos:

- a) Las transmisiones a título oneroso de inmuebles a quienes llegaren a ser herederos o legatarios del causante dentro de los tres (3) años de producidas si fuesen directas, o de cinco (5) años si se hicieren en forma indirecta por interpositas personas;
- b) Las transmisiones a título oneroso en favor de herederos forzosos del enajenante o de los cónyuges de aquéllos,

siempre que al tiempo subsistiere la sociedad conyugal o quedaren descendientes;

- c) Las transmisiones a título oneroso a favor de herederos forzosos del cónyuge del enajenante, o de los cónyuges de aquéllos, siempre que al tiempo subsistieren las respectivas sociedades conyugales o quedaren descendientes;
- d) Las transferencias a título oneroso en favor de una sociedad integrada, total o parcialmente, por descendientes (incluidos los hijos adoptivos) del transmitente o de su cónyuge, o por los cónyuges de aquéllos, siempre que con respecto a ellos subsistieren al tiempo las sociedades conyugales o quedaren descendientes;
- e) Las compras efectuadas a nombre de descendientes o hijos adoptivos menores de edad; y
- f) La constitución, ampliación, modificación y disolución de sociedades entre ascendientes y descendientes, incluidos padres e hijos adoptivos, o los cónyuges de los mencionados; si el descendiente o hijo adoptivo, o los cónyuges de éstos fueren al tiempo mayores de edad y la sociedad resultare continuadora de una de hecho anterior, la presunción sólo jugará por la mitad de sus aportes.

Las presunciones de este artículo cederán en la medida en que se probare la onerosidad y realidad económica de las relaciones jurídicas entre las partes.

Art. 4º — Se consideran situados en la Capital Federal:

- a) Los inmuebles ubicados dentro de su territorio;
- b) Los derechos reales constituidos sobre bienes situados en ella;
- c) Las naves y aeronaves de matrícula nacional;
- d) Los automotores patentados o registrados en su jurisdicción;
- e) Los muebles registrados en ella;
- f) Los bienes muebles del hogar o de residencias transitorias, cuando el hogar o la residencia estuvieren ubicados en su jurisdicción;
- g) Los bienes personales del transmitente, cuando éste se hallare en su jurisdicción al tiempo de la transmisión;
- h) Los demás muebles y semovientes que se encontraren en su jurisdicción a la fecha de la transmisión, aunque su situación no revistiere carácter permanente, siempre que por este artículo no correspondiere otra cosa;
- i) El dinero y los depósitos en dinero que se hallaren en su jurisdicción en el momento de la transmisión;



- j) Los títulos y las acciones, cuotas o participaciones sociales y otros valores mobiliarios representativos de su capital, emitidos por entes públicos o privados y por sociedades, cuando éstos estuvieren domiciliados en ella;
- k) Los patrimonios en empresas o explotaciones unipersonales ubicadas en su jurisdicción;
- l) Los títulos, acciones y demás valores mobiliarios que se encuentren en su jurisdicción al tiempo de la transmisión, emitidos por entes privados o sociedades domiciliados en el exterior;
- m) Los títulos, acciones y otros valores mobiliarios representativos de capital social o equivalente que al tiempo de la transmisión se hallaren en el exterior, emitidos por entes o sociedades domiciliados así mismo en el extranjero, en proporción a los bienes de los emisores que se encontraren en su jurisdicción;
- n) Las cuotas o participaciones sociales en sociedades domiciliadas en el exterior, en proporción a los bienes que se encontraren en su jurisdicción;
- o) Los patrimonios en empresas o explotaciones unipersonales o patrimonios de afectación ubicados en el exterior, en proporción a los bienes de éstos que se encontraren en ella;
- p) Los créditos provenientes de la compraventa de inmuebles ubicados en su jurisdicción;
- q) Los demás créditos (incluidos debentures) —con excepción de los que cuenten con garantía real, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el inciso b)— cuando el lugar convenido para el cumplimiento de la obligación o el domicilio real del deudor se hallen en su jurisdicción; y
- r) Los derechos de propiedad científica, literaria o artística, los de marcas de fábrica o de comercio y similares, las patentes, dibujos, modelos y diseños reservados y restantes de la propiedad industrial o inmaterial, así como los derivados de éstos y las licencias respectivas, cuando el titular del derecho o licencia, en su caso, estuvieren domiciliados en su jurisdicción al tiempo de la transmisión.

Los agentes diplomáticos y consulares, el personal técnico y administrativo de las respectivas misiones y demás funcionarios públicos de la Nación que, en ejercicio de sus funciones, se encontraren en el exterior, así como sus familiares que los acompañaren, se considerarán que se encuentran y están domiciliados en la Capital Federal a los fines de este artículo.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, también se considerarán

situados en la Capital Federal los demás bienes de las personas mencionadas en el párrafo anterior que se encontraren en el exterior, en el lugar de desempeño de las funciones de éstos; esta disposición no se aplicará a los inmuebles y derechos reales sobre inmuebles situados en el exterior. Se aplicará lo dispuesto en los dos párrafos precedentes sólo en la medida en que las personas a que se refieren se beneficiaren de una exención en el exterior respecto a imposición análoga a la de esta ley, otorgada en razón de su condición personal.

Art. 5º — Están exentos del impuesto:

- a) Las herencias, anticipo de herencia, donaciones y legados:

- 1º De hasta doscientos mil pesos (pesos 200.000), cuando los beneficiarios fueren el cónyuge, los ascendientes o descendientes en línea directa, incluidos padres e hijos adoptivos, o la nuera que herede de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.576 bis del Código Civil; y
- 2º De hasta cincuenta mil pesos (pesos 50.000) en los demás casos.

Para determinar el importe que goza de la exención de este inciso se computará todo el beneficio recibido en virtud de los distintos conceptos y todos los bienes comprendidos en aquél, tanto en jurisdicción de la Capital Federal como fuera de ella, incluso en el exterior;

- b) El seguro al que se refiere la primera parte del inciso i) del artículo 2º, de hasta cien mil pesos (\$ 100.000);
- c) Las transmisiones de sepulcros y de derechos relativos a éstos, siempre que no se transfieran a título oneroso antes de vencidos cinco (5) años de producido el hecho imponible;
- d) Las transmisiones de libros, diarios, revistas y demás publicaciones periódicas;
- e) Las transmisiones de obras de arte y de objetos de valor histórico, científico o cultural, siempre que por disposición del transmitente debieren destinarse a exhibición pública o a fines de enseñanza en el territorio de la República;
- f) Las transmisiones en favor de la Nación o de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, sus dependencias centralizadas, descentralizadas o autárquicas;
- g) Las transmisiones en favor de las provincias o municipalidades, sus dependencias centralizadas, descentralizadas o autárquicas, con destino a la construcción o sostenimiento de hospitales, asilos o establecimientos de asistencia o bienestar social, o de instrucción pública;
- h) Las transmisiones en favor de las entidades mixtas, en proporción a las inver-

siones que en éstas tuviere el Estado nacional;

- i) Las transmisiones en favor de museos, bibliotecas, universidades, fundaciones, hospicios y de las asociaciones y entidades civiles de asistencia social, siempre que:

1º Se destinaren los bienes respectivos a los fines de su creación y en ningún caso se distribuyeren, directa ni indirectamente, entre los socios o asociados;

2º Dichas entidades no se encontraren organizadas jurídicamente como sociedades anónimas o en otra forma comercial; y

3º No obtuvieren sus recursos, en forma parcial o total, de la explotación de espectáculos públicos, juegos de azar, carreras de caballos y actividades similares;

- j) Las transmisiones para constituir entidades que cumplieren los requisitos establecidos en el inciso precedente;

- k) La transmisión de inmuebles en favor de representaciones de países extranjeros, o de organismos internacionales de los que la Nación sea parte, con el fin de servirles de residencia, en el primer caso siempre que dichos países ofrecieren reciprocidad;

- l) Las transmisiones, por acto entre vivos, en favor de agentes diplomáticos y consulares acreditados ante la Nación, los familiares de éstos, el personal técnico y administrativo de las misiones extranjeras y sus familiares, así como de los integrantes de las representaciones de organismos internacionales de los que la República sea parte, en la medida y condiciones establecidas en los convenios internacionales aplicables;

- m) Las transmisiones, por acto entre vivos, en favor de agentes diplomáticos y consulares acreditados ante la Nación, los familiares de éstos y el personal técnico y administrativo de las misiones extranjeras y sus familiares, a falta de convenio aplicable, en la misma medida y condiciones a que se refiere el inciso anterior, con cargo de reciprocidad;

- n) Las transmisiones de bienes inmuebles, por causa de muerte de los miembros de las misiones extranjeras o de sus familiares, o de los integrantes de representaciones de organismos internacionales en que sea parte la Nación de sus familiares, a los cuales se refieren los incisos precedentes, en la medida y condiciones establecidas en los convenios internacionales aplicables;

- o) Las transmisiones de bienes inmuebles, por causa de muerte de los miembros

de las misiones extranjeras o de sus familiares, a falta de convenio aplicable, en la misma medida y condiciones a que se refiere el inciso precedente, con cargo de reciprocidad;

- p) La transmisión, por causa de muerte del propietario, en favor de herederos incluidos en el artículo 3.545 del Código Civil, de viviendas comprendidas en el régimen especial del decreto 11.157/45, ratificado por ley 12.921;

- q) La transmisión, por causa de muerte, en favor de herederos directos de las propiedades a que se refiere la ley 9.677;

- r) La mitad del valor de la transmisión, por causa de muerte, en favor de colaterales de las propiedades a que se refiere la ley 9.677;

- s) La transmisión, por causa de muerte, del «bien de familia», cuando se produjere en favor de las personas mencionadas en el artículo 36 de la ley 14.394 y siempre que no se lo desafectare antes de cumplidos cinco (5) años contados desde operada la transmisión;

- t) Las demás transmisiones cuya exención esté expresamente establecida en otras leyes de la Nación o en convenios internacionales aplicables.

Art. 6º — Salvo prueba en contrario, se considera que integran la transmisión gravada:

- a) Las cuentas o depósitos a orden del causante que estuvieren a nombre de su cónyuge, del heredero o legatario;

- b) Las cuentas o depósitos a nombre u orden conjunta, recíproca o indistinta del causante o de su cónyuge con herederos forzosos;

- c) Los importes percibidos por el causante o su cónyuge dentro de los sesenta (60) días anteriores al deceso que excedan en total diez mil pesos (\$ 10.000), mientras no se justifique razonablemente el destino que se les hubiera dado;

- d) Las extracciones de dinero efectuadas en el mismo lapso y que excedan igual importe que los mencionados en el inciso anterior, de cuentas del causante o de su cónyuge, o a nombre u orden conjunta, recíproca o indistinta de éstos entre sí o de éstos y de sus herederos forzosos;

- e) Los títulos, acciones o valores al portador que a la fecha del fallecimiento se encuentren en poder de los herederos o legatarios cuando, dentro de los seis (6) meses precedentes al deceso, el causante los hubiera adquirido o realizado operaciones con ellos de cualquier naturaleza, percibido sus intereses o dividendos, o aquéllos hubieran figurado a su nombre en las asambleas de la sociedad o en otras operaciones;

- f) Las enajenaciones a título oneroso efectuadas dentro del año anterior al del deceso del transmitente, en favor de los llamados a heredarse por ley o por voluntad de testador;
- g) Las enajenaciones a título oneroso efectuadas dentro del año anterior al del deceso del transmitente, si dentro de los cinco (5) años de su fallecimiento los bienes se incorporaren al patrimonio de los llamados a heredarse por ley o por voluntad de testador;

Art. 7º — En las transmisiones por causa de muerte se considerará la vocación o derecho hereditario al momento del fallecimiento; así mismo se considerará a dicho momento la situación del legatario de cuota.

No se tomarán en cuenta las particiones, reconocimientos, acuerdos, convenios o las renunciaciones a que se refiere el inciso e) del artículo 2º, entre herederos y legatarios de cuota referentes a su vocación o derechos.

Art. 8º — En las transmisiones entre vivos efectuadas por cónyuges a sus descendientes (incluidos hijos adoptivos y nuera que herede de acuerdo a lo previsto en el artículo 3.576 bis del Código Civil) y en las comprendidas en los incisos a), b), c), d) y f) del artículo 3º, se considerará:

- a) Si la transmisión fuere realizada por ambos cónyuges y se tratare de bienes gananciales, que cada uno de ellos transmite la mitad ideal que le correspondiere en ellos;
- b) Si el transmitente fuere sólo uno de los cónyuges y se tratare de bienes gananciales, que resulta aplicable el criterio indicado en el inciso precedente.

Art. 9º — El valor de los legados libres de impuesto se computará, a todos los efectos de la determinación de este impuesto, tomando en consideración el valor de lo legado con más el impuesto.

Las donaciones y legados bajo condición resolutoria se considerarán como puros y simples, sin perjuicio del eventual reajuste que correspondiere en caso de cumplirse la condición. Los anticipos de herencia y los legados que no fueren de cosas determinadas serán prorrateados entre los bienes de las distintas jurisdicciones, salvo que:

- a) Pudiere acreditarse el origen o situación de los bienes anticipados;
- b) El causante indicare que el legado deberá ser satisfecho con bienes determinados.

Art. 10. — Para la determinación del impuesto se tendrá en cuenta el estado, carácter y valor de los bienes y deudas a la fecha del hecho que produjo el enriquecimiento patrimonial a título gratuito.

Art. 11. — El valor de bienes en jurisdicción de la Capital Federal se determinará del siguiente modo:

- a) Inmuebles: en la forma establecida para determinar su valor para el impuesto al patrimonio de las personas de existencia visible;
- b) Depósitos de dinero, valores, etcétera, en instituciones bancarias: mediante el informe de los saldos correspondientes;
- c) Depósitos de dinero, valores, etcétera, en otras instituciones o negocios: mediante el informe de los saldos, con indicación de las registraciones y constancias correspondientes;
- d) Depósitos en cajas de seguridad: por tasación pericial, previo inventario de sus existencias, con intervención de la Dirección General Impositiva o del señor oficial de justicia en su caso;
- e) Créditos, con garantía real o sin ella: por el valor consignado en las escrituras o documentos respectivos y con deducción, en su caso, de las amortizaciones que se acrediten fehacientemente; a falta de documentación o en caso de manifiesta insolvencia del deudor, se tomará el valor que resultare de la prueba que se produjere;
- f) Créditos por ventas a plazos en los que no se hubiera pactado los intereses por separado: se tomará el monto respectivo y se le practicará la deducción de intereses presuntos que determine la reglamentación;
- g) Títulos, acciones, debentures y demás valores mobiliarios que se cotizaren en bolsas o mercados: por su cotización a la fecha del hecho imponible; si no la tuvieron a esa fecha, se considerará la más próxima, y si hubiere dos equidistantes, éstas se promediarán; si no hubiere cotización bursátil o la hubiere en ocasiones aisladas, el valor se establecerá de acuerdo con lo indicado en los incisos siguientes que resultaren aplicables;
- h) Debentures y otras obligaciones análogas que no se cotizaren en bolsas o mercados: por su valor nominal;
- i) Acciones que no se cotizaren en bolsas o mercados: del modo establecido para el impuesto al patrimonio de las personas de existencia visible;
- j) Títulos y demás valores mobiliarios que no se cotizaren en bolsas o mercados: por tasación pericial;
- k) Moneda extranjera y obligaciones expresadas en ellas: por la cotización oficial en el mercado correspondiente, tipo comprador; en lo demás, se aplicará lo indicado en el inciso g);
- l) Promesas de venta: por el precio convenido o su saldo;

- m) Participaciones en sociedades o en empresas o explotaciones unipersonales: del modo previsto para el caso del impuesto al patrimonio de las personas de existencia visible;
- n) Propiedad o copropiedad: se considerará que el valor es el del bien o su parte, de que se trata, substrayendo el valor del derecho real que lo afectare, salvo que resultare computado al determinar el valor de aquél o disposición en contrario de este artículo; la posesión que diere origen a la adquisición del dominio por prescripción se considerará como propiedad o copropiedad cuando estuviere cumplida, aun si el saneamiento u otorgamiento del título de propiedad todavía no se hubieren obtenido;
- o) Usufructo: sobre la base del siete por ciento (7 %) anual del valor del bien, o de la parte de éste, y el número de años por el que se hubiere constituido hasta un máximo de diez (10) años, considerándose por tal plazo aquel que lo excediere y el vitalicio, sin perjuicio de substraer el valor de los derechos de uso y habitación que afectaren el mismo bien; si el usufructo fuere conjunto, sin derecho de acrecer, y no hubiere determinación de partes, se considerará que cada beneficiario recibe igual parte, y si fuere con derecho de acrecer se procederá de igual modo pero con el reajuste que correspondiere de la liquidación con motivo de cada acrecimiento;
- p) Uso y habitación: sobre la base del cinco por ciento (5 %) anual del valor del bien, o de la parte de éste, y el número de años por el que se hubiere constituido hasta un máximo de diez (10) años, considerándose por tal plazo aquellos que lo excedieren y los vitalicios y con aplicación supletoria de las reglas del usufructo en lo que fuere pertinente;
- q) Renta vitalicia: del mismo modo previsto para el usufructo vitalicio;
- r) Legado o donación de renta: por aplicación de la regla establecida para el usufructo sobre los bienes que constituyeren el capital y, si no pudiere determinarse éste, se estimará sobre la base de una renta equivalente al interés que percibiére el Banco de la Nación Argentina para descuentos comerciales;
- s) Automotores, naves y aeronaves: por tasación pericial de su valor corriente en plaza;
- t) Bienes muebles de uso personal y del hogar o de residencias temporarias: por tasación pericial, que no podrá ser inferior al cinco por ciento (5 %) al activo transmitido en jurisdicción de la Capital Federal; del porcentual indicado se

considerará que, en su caso, el treinta por ciento (30 %) corresponde a los bienes de uso personal y el resto a bienes del hogar y de residencias temporarias; del total correspondiente al hogar y residencias, se considerará que el treinta por ciento (30 %) corresponde a las últimas y, entre éstas, en su caso se prorrateará en partes iguales entre ellas;

- u) Demás bienes no comprendidos en los incisos precedentes: por tasación pericial.

No se admitirá ninguna reducción por cómputo de derechos reales en los siguientes casos:

- a) Derechos reales de garantía, si las deudas garantizadas no fueren deducibles para liquidar el impuesto, salvo que la no deducibilidad se debiere a tener que computarlos para determinar el valor de los bienes;
- b) Derechos de usufructo, uso, habitación y servidumbres personales, si hubieran sido reservados para sí, o constituidas en su favor, por quien transmitió el dominio.

Las tasaciones periciales a que se refiere el presente artículo se efectuarán judicial o extrajudicialmente, del modo que indicare la reglamentación.

La Dirección General Impositiva podrá aceptar, en lugar de dichas tasaciones, las estimaciones de valor que efectuaren los contribuyentes, si las considerare correctas.

Art. 12. — A los fines de la determinación de este impuesto se aplicarán las disposiciones de esta ley con respecto a la naturaleza, carácter y valores de los bienes situados en el resto de la República y en el extranjero. Los derechos reales de garantía sobre dichos bienes no se computarán para reducir su valor, sin perjuicio de la deducción de la deuda respectiva que eventualmente correspondiere.

Art. 13. — La naturaleza, carácter y valores de los bienes situados en el extranjero se acreditarán con la respectiva certificación debidamente legalizada y, en su caso, traducida.

Art. 14. — Del haber transmitido según correspondiere se:

- a) Deducirán:

- 1º Las deudas del causante, excepto las que por esta ley no son deducibles; y
- 2º Los gastos de sepelio del causante, según su condición económica y social, hasta un máximo de ocho mil pesos (\$ 8.000), y



## b) Excluirán:

- 1º Los créditos incobrables, en la medida de su incobrabilidad y sin perjuicio de su posterior cómputo y reliquidación del impuesto en caso de recuperación.
- 2º Los bienes litigiosos, hasta que se liquidare el pleito, dando garantía suficiente por el importe del impuesto correspondiente.
- 3º Las donaciones o legados sujetos a condición suspensiva, hasta que se cumpliera la condición o venciere el plazo para ello, dando garantía suficiente por el importe del impuesto correspondiente.
- 4º Los legados, para los herederos.
- 5º Los cargos, para los beneficiarios a ellos sujetos; y
- 6º El valor del servicio recompensado para las donaciones o legados remuneratorios.

## Art. 15. — No se deducirán las deudas:

- a) Que no hubieren sido dejadas por el causante al día de su deceso;
- b) Cuya vigencia e importe no se justificare; y
- c) Garantizadas con derechos reales sobre bienes situados en la Capital Federal, y cuyo importe se computare para determinar el valor de dichos bienes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, o no debiere computarse a tal fin por prohibición expresa del mencionado artículo.

Se presumen simulados y, salvo prueba en contrario, tampoco serán deducibles las deudas que correspondan a:

- a) Créditos en favor de quienes resultaren herederos o legatarios, con excepción de los del cónyuge sobreviviente por el valor de sus bienes propios; y
- b) Créditos en favor de los ascendientes (incluido el padre adoptivo), descendientes (incluidos los hijos adoptivos y la nuera que eventualmente heredare de acuerdo con el artículo 3.576 bis del Código Civil) o cónyuges de herederos o legatarios.

Art. 16. — Para hacer efectivas las deducciones y exclusiones del artículo 14 se seguirán los criterios que se indican a continuación:

- a) Las deudas correspondientes a ganancias se deducirán de éstos, salvo que se refirieren a bienes legados y que estu-

vieren a cargo del legatario, caso en el cual serán deducibles del respectivo legado;

- b) Sin perjuicio de lo establecido en el inciso precedente, cuando los bienes que integran el enriquecimiento patrimonial a título gratuito se encontraren en distintas jurisdicciones, las deudas se deducirán entre ellos a prorrata;
- c) Los legados de cosa determinada serán descontados antes que las deudas, y los restantes lo serán con posterioridad;
- d) Si los bienes que integran el enriquecimiento patrimonial a título gratuito estuvieren situados en distintas jurisdicciones, la porción de ganancias del cónyuge superviviente se imputará sobre la mitad de los bienes gananciales que existieren en cada jurisdicción.

Art. 17. — Para determinar el impuesto se computará la totalidad del enriquecimiento patrimonial a título gratuito que recibiere cada beneficiario por transmisiones o actos anteriores, sucesivos o simultáneos, comprendiéndose los bienes y deudas respectivos en jurisdicción de la Capital Federal y fuera de ella.

Sobre el importe así obtenido se aplicará la escala anexa, que forma parte integrante de este artículo. Para tal aplicación se considerará:

- a) También como ascendientes o descendientes, según el caso a los padres e hijos adoptivos, y a la nuera que heredare de conformidad con lo previsto en el artículo 3.576 bis del Código Civil;
- b) Que cuando se heredare por representación, se estará al grado de parentesco que corresponda al representante con respecto a aquel de cuya sucesión se tratare.

El impuesto debido será el resultante de prorratear el resultado obtenido en proporción a los bienes situados en jurisdicción de la Capital Federal que no estuvieren exentos. A este fin sólo se computarán los seguros a que se refiere el inciso i) del artículo 2º en la medida en que excedieren el importe de cien mil pesos (\$ 100.000).

Se considerarán aisladamente los enriquecimientos patrimoniales a título gratuito obtenidos por los hechos sucesivos o simultáneos que en cada oportunidad hubieran estado sujetos al impuesto, pero sus importes se sumarán al solo efecto de la aplicación de la escala en cada uno de ellos.

Lo dispuesto en el primero y cuarto párrafo de este artículo con relación al cómputo de enriquecimientos patrimoniales anteriores, simultáneos o sucesivos, será aplicable únicamente cuando se tratare de beneficios obtenidos del mismo beneficiante, en forma directa o a través de interpósitas personas.



Art. 18. — Si dentro de los cinco (5) años, a contar desde el vencimiento de los plazos indicados en los incisos c) y d) del primer párrafo del artículo 21, ocurriere una nueva transmisión en línea recta o entre cónyuges por causa de muerte de los mismos bienes por los que se pagó el impuesto sin que hubieren salido del patrimonio del beneficiario que lo hubiera hecho efectivo, se disminuirá el impuesto en un diez por ciento (10 %) para esos bienes en la nueva transmisión por cada uno de los años completos que faltaren para cumplir los cinco (5) años. A los fines de este artículo se considera transmisión en línea recta también a la efectuada entre padres e hijos adoptivos y en favor de la nuera que heredare de acuerdo con el artículo 3.576 bis del Código Civil.

Art. 19. — Cuando el beneficiario del enriquecimiento patrimonial a título gratuito se domiciliare en el extranjero al tiempo de producirse el hecho imponible, se aplicará un recargo del cincuenta por ciento (50 %) por ausentismo sobre el impuesto determinado de acuerdo con los artículos precedentes. Computado dicho recargo, el impuesto en ningún caso podrá exceder el treinta y tres por ciento (33 %) del valor total de los bienes sujetos a este impuesto, incluidos los exentos.

Se reputarán ausentes domiciliados en el extranjero a los fines del párrafo anterior:

- a) Quienes residieren en el exterior al producirse el hecho imponible desde tres (3) años antes;
- b) Las personas de existencia ideal con directorio principal en el extranjero, aunque tuvieren directorios o administraciones locales en la República, incluida la Capital Federal.

Se exceptúa del recargo de este artículo a quienes desempeñaren comisiones oficiales de la Nación, provincias o municipalidades, y a los funcionarios de carrera del cuerpo diplomático o consular argentino.

Art. 20. — Los contribuyentes adeudarán el impuesto que correspondiere a cada uno de ellos por el enriquecimiento a título gratuito que les hubiere beneficiado. Sin perjuicio de que cada uno podrá satisfacer su deuda propia, cuando y mientras existiere indivisión del beneficio entre contribuyentes, responderán solidaria y mancomunadamente por la imposición total.

Art. 21. — El impuesto deberá pagarse:

- a) En los enriquecimientos producidos por actos entre vivos: hasta vencidos quince (15) días de producido el hecho imponible;
- b) En los enriquecimientos producidos por el seguro a que se refiere el inciso i) del artículo 29: hasta vencidos quince

- días de la percepción del importe, en la parte que no le hubiera sido retenida;
- c) En los enriquecimientos producidos por causa de muerte: hasta vencidos dieciocho (18) meses de producido el hecho imponible;
- d) En los casos de ausencia con presunción de fallecimiento: hasta vencidos dieciocho (18) meses de la declaración; no se considerará que existe nuevo enriquecimiento a título gratuito si el presunto heredero falleciere antes de obtener posesión definitiva.

Gozarán en todos los casos del plazo previsto para actos entre vivos los supuestos de desafectación del bien de familia, acrecimiento de derechos, recuperación de créditos incobrables, liquidación de cuestiones litigiosas y cumplimiento de condiciones suspensivas a que se refieren el inciso s) del artículo 5º, los incisos o) y q) del artículo 11 y los puntos 1º, 2º y 3º del inciso b) del artículo 14, a contar desde que se produjeran los referidos hechos.

En los casos de indivisión hereditaria previstos en la ley 14.394, la Dirección General Impositiva acordará, por resolución general, plazos especiales para el ingreso del impuesto, con fianza o sin ella, dentro de los límites establecidos en dicha ley.

Salvo la prórroga prevista en el artículo 39 de la ley 11.683, texto ordenado en 1968 y sus modificaciones, quedará expedito el cobro compulsivo del impuesto una vez transcurridos los plazos de este artículo, con excepción del supuesto del inciso c), en que ello recién ocurrirá a los tres (3) años del deceso del causante; vencido este último plazo, la Dirección General Impositiva, en su caso, podrá iniciar el juicio sucesorio. Las entidades aseguradoras actuarán como agentes de retención en la medida del importe que abonaren en concepto de seguro de vida, sin perjuicio de la liquidación definitiva que correspondiere al contribuyente.

Art. 22. — El impuesto de esta ley se determinará y percibirá por el sistema de liquidación administrativa a que se refieren el artículo 20 y correlativos de la ley 11.683, texto ordenado en 1968 y sus modificaciones, mediante intervención en su caso en el proceso judicial.

La Dirección General Impositiva deberá evaluar toda consulta pertinente que le formularen los responsables de este impuesto con relación a la aplicación del gravamen.

Los contribuyentes deberán aportar los datos correspondientes con anticipación necesaria al vencimiento de los plazos a que se refiere el artículo anterior para el pago del impuesto. La mencionada liquidación administrativa deberá producirse dentro de los quince (15) días de aportados los datos.

Art. 23. — El pago del impuesto deberá ser previo o simultáneo a todo acto de disposición, por parte del beneficiario, de los bienes que in-

tegraren su enriquecimiento a título gratuito. Los jueces, funcionarios y escribanos públicos deberán exigir la justificación del pago del impuesto o, en su defecto, la conformidad de la Dirección General Impositiva, para la entrega, transferencia, inscripción u otorgamiento de posesión de bienes afectados por este gravamen.

En especial, sin intervención y conformidad de la Dirección General Impositiva no se podrá dar curso a los actos siguientes:

- a) Los actuarios o escribanos no expedirán testimonios de declaratorias de herederos, hijuelos ni de escrituras de donación u otros actos jurídicos que tuvieren por efecto el hecho imponible de este impuesto;
- b) Los registros respectivos no inscribirán declaratorias de herederos, testamentos o transferencias de bienes u otros actos que tuvieren el mismo efecto previsto en el inciso precedente;
- c) El archivo de los tribunales no recibirá expedientes sucesorios para archivar;
- d) Las reparticiones oficiales no autorizarán entregas o extracciones de bienes ni transferencias de derechos comprendidos en el enriquecimiento gravado por este impuesto;
- e) Las instituciones bancarias y demás personas de existencia visible o ideal no podrán entregar o transferir bienes afectados por el impuesto.

No obstante lo dispuesto precedentemente, la Dirección General Impositiva podrá autorizar la disposición de bienes determinados, aceptando pagos provisorios a cuenta del impuesto que en definitiva correspondiere y/o garantías adecuadas que las circunstancias requieran, practicando en su caso al efecto liquidaciones provisorias.

Art. 24. — En los casos en que resultare aplicable para el pago del impuesto lo establecido en el inciso c) del artículo 21, las sumas en concepto de impuesto que no se abonaren devengarán un interés del uno por ciento (1 %) mensual durante el primer año de mora, resultando aplicable en lo sucesivo el interés previsto en el artículo 42 de la ley 11.683, texto ordenado en 1968 y sus modificaciones, que así mismo será de aplicación desde la mora en los restantes supuestos del artículo mencionado.

Los intereses de este artículo no se aplicarán por la parte de impuesto que correspondiere a créditos pendientes contra la Nación, provincias o municipalidades, sus dependencias centralizadas, descentralizadas o autárquicas. Tampoco procederán mientras no quedare firme la determinación tributaria, siempre que los datos necesarios para la liquidación administrativa hubieran sido aportados en término.

Art. 25. — La Dirección General Impositiva podrá actuar como parte legítima, como tercero,

en todas las actuaciones administrativas o judiciales relativas a enriquecimientos patrimoniales a título gratuito gravados por esta ley.

Art. 26. — En las herencias comprendidas en el inciso a) del artículo 5º de esta ley podrá prescindirse, a los fines de este impuesto, del trámite del juicio sucesorio siempre que se cumplieren los siguientes requisitos:

- a) Acreditar el deceso y el vínculo;
- b) Declarar bajo juramento la inexistencia de otros bienes, anticipos o donaciones;
- c) Justificar la valuación o monto de los bienes de acuerdo con esta ley;
- d) Acreditar que el acervo transmitido consiste únicamente en muebles, depósitos de dinero y valores o créditos al portador; y
- e) Ofrecer garantía por el pago del impuesto que eventualmente pudiere corresponder.

Art. 27. — Las acciones y poderes del fisco para determinar el tributo prescriben por el transcurso de cinco (5) años desde el 1º de enero siguiente al día que el hecho imponible hubiere podido ser conocido por la Dirección General Impositiva, por algún hecho que lo exteriorizase en la Capital Federal.

Las acciones y poderes para exigir el tributo determinado prescriben a los cinco (5) años, a contar desde el 1º de enero siguiente a la fecha de notificación de aquella determinación.

Art. 28. — El impuesto de esta ley se regirá, en todo lo que no estuviera expresamente previsto de otro modo en los artículos precedentes, por las disposiciones de la ley 11.683, texto ordenado en 1968 y sus modificaciones.

Estará a cargo de la Dirección General Impositiva la aplicación, percepción y fiscalización del impuesto.

Art. 29. — Estarán gravados con el impuesto de esta ley los enriquecimientos patrimoniales a título gratuito que se verificaren desde el 1º de enero de 1974, inclusive, en adelante.

A los fines de lo establecido en el artículo 18 se considerará también como impuesto cuyo pago oportuno otorga el beneficio al anterior impuesto a la transmisión gratuita de bienes.

Art. 30. — Encomiéndase al Poder Ejecutivo gestionar y proyectar un acuerdo para solucionar los problemas de doble imposición entre las distintas jurisdicciones nacional y provinciales con respecto de los hechos gravados en esta ley.

Art. 31. — El Poder Ejecutivo actualizará anualmente los tramos de los enriquecimientos patrimoniales imposables, las cuotas fijas de las escalas anexas al artículo 17 y los topes fijados en los artículos 5º, 6º, 14 y 17. Para ello deberá tomar en consideración el incremento en el nivel general de precios.

Art. 32. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

## ESCALA ANEXA AL ARTICULO 17

Importe del enriquecimiento patrimonial a título gratuito	Ascendientes, descendientes y cónyuges	
	En pesos	% S/excedente del límite mínimo
De 200.000 hasta 600.000	—	4
De 600.000 hasta 1.000.000	16.000	8
De 1.000.000 hasta 2.000.000	48.000	12
De 2.000.000 hasta 3.000.000	168.000	17
De 3.000.000 hasta 4.000.000	338.000	22
De 4.000.000 hasta 5.000.000	558.000	29,2
De 5.000.000 en adelante	850.000	17

## ESCALA ANEXA AL ARTICULO 17

Importe del enriquecimiento patrimonial a título gratuito En pesos	COLATERALES DE 2º GRADO		COLATERALES DE 3º GRADO		LOS DEMAS	
	Cuota fija	% S/excedente del límite mínimo	Cuota fija	% S/excedente del límite mínimo	Cuota fija	% S/excedente del límite mínimo
De 50.000 hasta 200.000	—	3	—	4	—	4
De 200.000 hasta 600.000	4.500	5	6.000	6	6.000	6
De 600.000 hasta 1.000.000	24.500	9	30.000	10	30.000	12
De 1.000.000 hasta 2.000.000	60.500	14	70.000	15	78.000	18
De 2.000.000 hasta 3.000.000	200.500	20	220.000	22	258.000	25
De 3.000.000 hasta 4.000.000	400.500	26	440.000	29	508.000	32
De 4.000.000 hasta 5.000.000	660.500	33,95	730.000	37	828.000	42,2
De 5.000.000 en adelante	1.000.000	20	1.100.000	22	1.250.000	25

## VI

## Régimen de desgravación impositiva para la compra de títulos valores privados

## Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha considerado el proyecto de ley, venido en revisión de la Honorable Cámara de Diputados, sobre el régimen de desgravación impositiva para la compra de títulos valores privados y nominatividad de los mismos; y por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación con las siguientes modificaciones:

Artículo 1º, apartado b): Intercalar a continuación de la palabra Desarrollo la expresión «, los bancos oficiales de provincias».

Artículo 3º: Agregar al final del apartado a) lo siguiente: «3. Los títulos valores a los que se refiere el apartado b) del artículo 1º».

Suprimir en el apartado b) a continuación de la palabra apartados, la expresión «1 y 2».

Reemplazar en el penúltimo párrafo del apartado b) la expresión «En ningún caso, por la expresión «Sin perjuicio de lo establecido en el apartado b) del artículo 1º, no».

Artículo 23: Reemplazar el primer párrafo por el siguiente: «La transmisión de los títulos valores a los que se refiere el artículo precedente y los derechos reales que recaigan sobre los mismos deben constar en el título, notificarse al emisor e inscribirse en el registro especial que éste llevará, no siendo de aplicación a estos efectos el artículo 1.277 del Código Civil».

Artículo 38: Reemplazar en la parte final la palabra «ésta, por la palabra «estos».

Artículo 57: Agregar al final «, salvo que por razones fundadas el Poder Ejecutivo lo prorrogue por una vez y hasta un plazo igual».

Artículo 64 y artículo 65: Deben figurar dentro del capítulo IV del título III, sin modificaciones.

Artículo 67: Reemplazar la expresión «Quedan derogados, por la expresión «No será de aplicación». Debe figurar este artículo dentro del capítulo IV del título III como queda redactado, pero bajo el número 66.

Artículo 66: Pasa a ser artículo 67 sin modificaciones.

Art. 11. — El Poder Ejecutivo deberá sancionar, dentro de los ciento veinte (120) días de la fecha de promulgación de esta ley, el respectivo texto ordenado.

Art. 12. — Derógase el artículo 89 de la ley 11.683.

Art. 13. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

SALVADOR F. BUSACCA.  
Alberto L. Rocamora.

**Sr. Presidente (Fonrouge).** — En consideración en general.

**Sr. Romero.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Fonrouge).** — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

**Sr. Romero.** — Señor presidente: como la agenda que tenemos en consideración es un conjunto armónico que significa una reforma integral del sistema tributario argentino, voy a hacer un informe general referido a este conjunto de leyes.

Los proyectos que el Poder Ejecutivo ha elevado al Parlamento constituyen un conjunto coherente que tienden a establecer un sistema impositivo que permita coadyuvar a la política económica encarada por el gobierno de la Nación.

Dicho sistema, articulado sobre la base de las coincidencias programáticas de los partidos políticos más representativos, según las dos últimas elecciones celebradas en el país, la Confederación General del Trabajo y de la Confederación General Económica, tiene como una de sus metas la de recompensar la carga tributaria con el objeto de contribuir a la redistribución del ingreso en favor de los sectores menos dotados.

Este propósito no es caprichoso: nace de la necesidad de restablecer la justicia social y la equidad que nunca debieron haberse perdido.

En efecto, el sistema tributario aún vigente es tan injusto que a través de sus mecanismos consagra la elusión legal de los impuestos, originando de tal manera un desplazamiento de la carga impositiva de los contribuyentes de mayores ingresos hacia otros de ingresos menores.

Justicia y equidad son premisas fundamentales para que un sistema tributario tenga consenso popular. La vulneración de estos principios origina la resistencia que se concreta mediante la evasión y la defraudación fiscal.

A partir de estos hechos la conducta tributaria de los contribuyentes en nuestro país durante los últimos años originó un círculo vicioso. Con tal motivo, el Estado, al ver mermar sus recursos, aumentaba la presión individual, cosa que irritaba aún más a los afectados y los inducía a una mayor evasión. Se establecía así un proceso sin fin generando un nudo gordiano imposible de desatar.

La nueva filosofía que anima las leyes tributarias que estamos analizando pretende cortar definitivamente ese nudo. Intenta conseguir, a través de una adhesión voluntaria o forzosa, que

todos los que deben aportar paguen sus impuestos de acuerdo con su capacidad de contribución; sobre todo para aquellos tributos que han disminuido la presión individual. Una reducción de esta presión unida a una más justa y equitativa distribución de la carga impositiva, fundada en la capacidad contributiva de cada persona, son parámetros con los cuales se maneja la nueva filosofía para lograr los recursos que requiere el Estado para cumplir con sus fines. Cuantos más sean los contribuyentes que cumplan, mayor podrá ser la reducción de la presión individual.

A esta altura de la exposición es importante destacar la incidencia del sistema tributario en los aspectos referidos al ahorro y la inversión. Los regímenes de desgravación, que en número superior a cien estaban incluidos en las leyes tributarias —en especial en el impuesto a los réditos—, quebraron un estado de indiferencia que promocionó todo, sin cuantificar ni calificar los beneficios ni fijar las prioridades necesarias para que los regímenes de promoción tuvieran resultados.

El cambio de la filosofía en este sentido es terminante. Salvo muy contadas excepciones —dos en la ley de ganancias— la ley impositiva no establece en sí los regímenes de promoción, sino que el espíritu de los proyectos fija un estatuto general aplicable a todos los contribuyentes. Luego, a través de regímenes de promoción, establecidos por leyes o decretos fundados en el mismo criterio, cuantifica, califica y establece las prioridades a fin de que en los casos en que la determinación política establezca la necesidad, el sacrificio que se solicita a los demás contribuyentes para compensar la disminución en los sectores promocionados de la carga tributaria tenga justificación económica y social.

¿A qué se debe este cambio? En la filosofía es quizá muy claro el panorama si tenemos en cuenta que la Argentina tiene —o ha tenido— capacidad de ahorro y también ha hecho inversión. Por no haberse determinado las pautas correctas en la promoción de ese ahorro y por haber sido indiscriminada la aplicación de esta promoción, los resultados están a la vista: el crecimiento del producto bruto no es satisfactorio. Es importante que tengamos conciencia de que no todo ahorro se convierte en inversión; además, no toda inversión es productiva y, finalmente, no toda inversión productiva lo es para el interés general del país.

En consecuencia, no es por un estatuto general impositivo que debemos realizar promociones, sino por leyes especiales en las cuales el Parlamento determine políticamente —como dijimos— qué, dónde y en cuánto debemos promocionar. De la importancia de lo antedicho deviene la insuficiencia de capitales en el mercado, y resulta primordial canalizarlo hacia aquellas actividades, sectores y regiones prioritarias que coadyuvan a un desarrollo constante y sostenido que tenga un fin último: la Argentina potencia anhelada por todos. Claro es que no es éste el



único fin buscado, ya que el mismo debe cumplimentarse como aquel acto que regule la participación, en los resultados de progreso mencionado, de todos los componentes de la sociedad que han contribuido a lograrlo.

Debe revertirse el proceso que llevó a que una gran masa de contribuyentes se mantuviera al margen en el cumplimiento de las obligaciones impositivas, para lo que también se han cumplimentado medidas tendientes a castigar la mala conducta fiscal como son la cédula fiscal, el proyecto de represión penal al delito de defraudación tributaria, la creación de la Dirección Nacional de Policía Fiscal Federal, que tendrá jurisdicción en todo el territorio y mediante convenios expresos con los fiscos provinciales y municipales podrá actuar coordinadamente y funcionar como suministro de información.

Corroborando lo expuesto, cabe señalar que el gobierno nacional ha declarado que en el curso del próximo año se reunirá con las provincias para depurar, coordinar y simplificar los regímenes impositivos vigentes en las distintas jurisdicciones, implementándose un programa de colaboración y ayuda permanente que permita la implantación de un sistema que evite problemas de superposición de gravámenes que perjudiquen en definitiva los planes de desarrollo sectoriales y regionales, dificultando por un lado la administración y fiscalización tributaria, reduciéndose el costo de recaudación y aliviando por otro la ingente tarea que deben cumplir los contribuyentes para responder a los requerimientos fiscales.

Es bien conocido, por último, que de poco vale un excelente sistema tributario si el mismo no está acompañado por una administración fiscal eficiente, que obligue a aquellos que no están dispuestos a cumplir voluntariamente con las obligaciones que se les han impuesto a que lo hagan, sufriendo, en su caso, las penalidades que el mismo sistema les impone. Va de suyo, entonces, que al par que se perfecciona el sistema se volcarán todos los esfuerzos necesarios para dotar al organismo recaudador de los elementos humanos y materiales que permitan la obtención de las premisas enunciadas.

Como corolario, y antes de referirme en forma específica a cada proyecto de ley, es menester remarcar dos complementos básicos que se han tenido a la vista para concebir la reforma. El primero es el de conseguir la mayor simplificación posible en las normas. Sin embargo, es principio axiomático en materia tributaria que la mayor simplicidad se refleja en una menor equidad. La simplificación se ha buscado de manera tal que no avance sobre el principio de equidad y justicia social que debe presidir en los impuestos. Ello se ha tratado de conseguir mediante la redacción objetiva de las normas para que no se presten a interpretaciones contradictorias.

El segundo concepto básico es el de incentivar el aumento de la producción y castigar la ineficiencia. Ejemplo de ello es la inclusión dentro de la ley del impuesto a las ganancias del régimen de renta normal potencial para las explotaciones agropecuarias ya sancionada.

Componen el conjunto de normas que hacen a la reforma tributaria los siguientes proyectos de leyes que se someten a vuestra consideración y a los que a continuación me referiré.

El impuesto a las ganancias. Su ámbito de imposición se integra con los actuales impuestos a los réditos y a las ganancias eventuales, cuya derogación se propicia a partir del 1º de enero de 1974. Es de suma trascendencia esta modificación, puesto que consiste precisamente en la integración en un solo régimen de todos los beneficios obtenidos, con prescindencia de que los mismos revistan los caracteres propios del rédito o de la ganancia de capital. Esta integración, que procura una más justa apreciación de la capacidad contributiva de los sujetos, es recomendada por la doctrina moderna y ha sido comentada favorablemente por los especialistas de nuestro país. La actual discriminación de los beneficios para sujetarlos a regímenes diferentes da como resultado la determinación de obligaciones fiscales de distinta magnitud frente a iguales montos de beneficios, según sea el origen o composición de las mismas o, en numerosos casos, según sea la forma adoptada para las operaciones. Ello tiene como consecuencia, además, innumerables controversias derivadas de la caracterización de los beneficios para su encuadre en uno u otro gravamen.

Por otra parte, y en consideración al principio de no discriminación de los beneficios generados por la empresa, la ley del impuesto a los réditos había avanzado sobre el régimen de las ganancias eventuales, estableciendo la aplicación de aquél en diversas situaciones, que, estrictamente consideradas, eran utilidades de capital. Esta solución, sin embargo, significó distintos tratamientos fiscales frente a situaciones análogas o, más aún, resultaban con un tratamiento menos riguroso operaciones de verdadera especulación.

En lo que se refiere a la técnica utilizada para la integración, surge de inmediato el problema que supone someter a la imposición progresiva la exteriorización de ganancias que, estrictamente, cabe reconocer como generadas en más de un período fiscal. Al respecto, es frecuente que tanto la legislación comparada como los especialistas ofrezcan sistemas tendientes a solucionarlo mediante la aplicación de tasas o de formas de imputación que corrigen la progresividad.

En el proyecto de ley que se trata, se ha optado por la integración lisa y llana, único modo de integración real que elimina tratamientos diferenciales y que soluciona los difíciles problemas de aplicación, defendiendo así las características de simplicidad y fácil interpretación que se quieren para el sistema. Sin embargo, la presión tributaria resulta moderada por nor-



dencia de la mayor o menor integración del proceso de fabricación o distribución. Esto significará un aporte a la neutralidad, en cuanto su aplicación no provocará distorsiones en las formas de organización empresarial, superando los problemas que justamente acarreaban los tributos substituidos.

Además, la citada estructura minimizará los problemas que actualmente presentan dichos gravámenes en cuanto a su traslación a los precios en mayor medida que lo ingresado al fisco, fenómeno conocido como piramidación.

Es también señalable que el régimen propuesto, al ampliar la base de imposición, provocará una descompresión impositiva de los sectores productivos y la consecuente liberación en éstos de recursos para la inversión.

Pero si existe un argumento contundente en apoyo del reemplazo de los impuestos a las ventas y a las actividades lucrativas por el IVA es el de la simplificación y la certeza que el mismo ha de significar para todos los contribuyentes que en la actualidad deben, por una misma operación, responder ante más de un fisco. La simplificación y certeza que el mismo ha de significar para los que en la actualidad tienen no sólo que conocer la legislación de la jurisdicción central, sino la de cada una de las legislaciones locales y, además, las del convenio multilateral. Para los que en definitiva, señores senadores, deben sobrellevar la incertidumbre que la aplicación de estas últimas les depara, por cuanto en situaciones extremas, no obstante haber satisfecho su obligación total, se encuentran obligados a responder a reclamos de ciertas jurisdicciones sin encontrar el justo reintegro de las otras intervinientes.

Es por estas razones que el IVA ha de representar para el contribuyente la certeza jurídica y la simplicidad que deviene de todo tributo que siendo exigido por un solo fisco, éste luego tiene la obligación de distribuir de acuerdo con las pautas que las jurisdicciones de común acuerdo hubieran fijado.

A nivel macroeconómico, el régimen, al establecer una economía de escala, ha de implicar una mejor aplicación del gasto público, revirtiéndola para las jurisdicciones locales en una real economía, al permitirles obtener iguales o mayores recursos sin costos de recaudación.

El proyecto en su faz técnica viene avalado por los estudios que se realizaron en nuestro país a través de varios años, contando con el inestimable aporte que a los mismos efectuara lo más granado de la doctrina tributaria argentina; ello sin contar el respaldo que le otorga el correcto funcionamiento de sistemas similares no sólo en países del Mercado Común Europeo, sino en países hermanos como Ecuador, Brasil y Uruguay.

El impuesto al valor agregado es un tributo que alcanza a las ventas de comerciantes e industriales, las importaciones definitivas y deter-

minadas locaciones y prestaciones de servicios, en forma tal que, recayendo en última instancia sobre el consumidor final, es ingresado al erario público a través de los intervinientes en el proceso de producción, distribución y comercialización, en proporción con el valor que cada uno de ellos agrega.

El sistema de liquidación propuesto es el de substracción a través del régimen de crédito de impuesto, o sea deduciendo del impuesto correspondiente a las ventas de un ejercicio el facturado por las compras del mismo período. Tratándose de la compra de bienes de capital, la deducción del impuesto que la misma supone se efectúa en tres cuotas anuales y consecutivas. El gravamen ha de liquidarse sobre el precio neto de venta excluido el impuesto, lo que presenta frente al régimen vigente en el impuesto a las ventas un real beneficio, atento a que en éste el tributo se liquida sobre el precio de venta incluido el propio impuesto. Es decir, que a igualdad de tasas, el impuesto al valor agregado implicará frente al impuesto a las ventas un menor pago, porque a diferencia de aquél, su base imponible no contiene al gravamen.

En términos generales podemos decir que el campo de imposición se extiende a la etapa minorista. Sin embargo, con el fin de atenuar los problemas que supone tanto para la administración fiscal como para el contribuyente la inscripción de una numerosa cantidad de pequeños comerciantes cuyas ventas se realizan específicamente a consumidores finales, se establece para los mismos la inscripción optativa. Ello no significa que en caso de no inscribirse dejen de pagar el impuesto, sino que en tales casos el mismo les será retenido por los responsables inscritos que les efectuaren ventas.

Debemos destacar que este impuesto tiende a establecer un autocontrol entre vendedores y compradores, a través de la contraposición de intereses que implica el hecho de sujetar la deducción del impuesto contenido en las compras a la facturación por separado del mismo. La experiencia en otros países indica que este autocontrol ha facilitado la represión de la evasión, no sólo en el propio impuesto al valor agregado sino en todos aquellos gravámenes que permitan con el mismo un control cruzado. Atento el carácter substitutivo del tributo, la tasa que el mismo fije tiene como única finalidad permitir similares recaudaciones a las que se producirían en el caso de regir los impuestos a las ventas y a las actividades lucrativas.

Lo dicho nos anima a afirmar que desde el punto de vista objetivo su implantación no debería producir variaciones sensibles del nivel general de precios, aunque sí de los precios individuales, que podrán registrar alzas o bajas. Por ejemplo, deberían bajar los productos integrantes de consumos populares, que hoy están gravados por actividades lucrativas y estarían

exentos bajo el régimen del impuesto al valor agregado.

Respecto de los productos industriales no se esperan repercusiones objetivas, ya que se entiende que la tasa del 13 por ciento suple la incidencia de los impuestos substituidos. Donde se puede esperar un alza es en el rubro de los servicios que se incorporan, o cuya presión tributaria se acentúa, pero estando exenta la vivienda económica, los restantes servicios finales gravados integran preponderantemente los consumos de los tramos de altos y medios ingresos, por lo que las alzas que pudieran registrarse concuerdan con la política de redistribución de ingresos del gobierno nacional.

Del punto de vista subjetivo se ha diferido en un año la aplicación del gravamen, a fin de efectuar una correcta difusión del régimen que evite cualquier efecto psicológico desfavorable y que permita superar el temor a lo desconocido que todo cambio implica. Además, también se espera actuar a través de la acción concertada de los organismos oficiales y los distintos sectores de la actividad privada para evitar alzas no justificadas en perjuicio de los consumidores. Por otra parte, el proyecto prevé la facultad al Poder Ejecutivo para reducir la base del gravamen hasta en un 50 por ciento cuando estime que la misma no responde a la realidad económica vigente en el país o se han producido alteraciones que justifiquen tal proceder.

La justeza de la tasa propuesta implica, más que la defensa de los ingresos de la Nación, la de los ingresos de las provincias, así como la del derecho de las mismas a la recuperación de la participación que les corresponde en el proceso de reconstrucción nacional, y esto lo decimos en razón de que una baja injustificada de la tasa ha de perjudicar en una proporción mucho mayor a aquellas provincias que más necesitan de estos ingresos para la satisfacción de sus necesidades.

Como anticipáramos, el proyecto contiene exenciones a productos de consumo popular así como a las exportaciones, estableciendo para estas últimas un régimen especial por el cual no sólo se exime la operación sino que además se le reintegra al exportador el total del gravamen que hubiera incidido en los costos de la mercadería exportada, estimulándose de tal forma nuestra participación en los mercados internacionales.

Por último, deseo hacer notar que el proyecto faculta al Poder Ejecutivo para dictar un régimen de transición, que a través de la consideración de los stocks de mercaderías existentes al 31/12/74 permita superar esta etapa sin inconvenientes.

He tratado de esbozar en un rápido panorama las principales características del impuesto al valor agregado venido en revisión a este cuerpo luego de su sanción por la Honorable Cámara de Diputados. Al respecto me resta señalar que

esta comisión sólo le ha introducido modificaciones de forma que han buscado, a través de una mayor precisión en la redacción de sus normas, lograr que el mismo constituya un eficaz instrumento de la política impositiva y el efectivo cumplimiento de los objetivos que fundamentan su sanción.

Como consecuencia de la integración de los impuestos a los réditos y a las ganancias eventuales en el nuevo impuesto a las ganancias, se ha estimado procedente dejar al margen de la imposición con la tasa progresiva a ciertos juegos de sorteos y concursos o apuestas sobre pronósticos deportivos (lotería, Prode y rifas), que hasta hoy están alcanzados por el último de los gravámenes citados. Ello, por cuanto las razones que avalan la integración no son totalmente aplicables a estos casos. En efecto, medir la capacidad contributiva en función de un beneficio totalmente aleatorio y que en la mayoría de los casos se da una sola vez en la vida de los beneficiarios, parece excesivamente riguroso, especialmente en los casos de beneficiarios de recursos modestos, existiendo una total falta de adecuación entre el beneficio obtenido y el capital puesto en juego. Por otra parte, se trata de actos que, por su sistema, ya dejan un margen apreciable de las apuestas al Estado, y, además, permiten la individualización fácil del beneficiario.

Por ello, se ha proyectado un tributo de carácter real y no personal, con lo que se alcanzan las metas de simplicidad, tanto para la administración como para el beneficiario.

Puede afirmarse en general que si el legislador quiere alcanzar a los sujetos pasivos mediante un sistema orgánico que capte en su justa medida sus capacidades contributivas individuales, tal sistema podría visualizarse mediante el cuerpo geométrico de un prisma. En una de sus caras tributan los ingresos mediante el impuesto a las ganancias; en la segunda, tributaría el gasto de los contribuyentes a través de impuestos generales a los consumos y, para captar consumos excedentarios, mediante impuestos específicos con tasas más gravosas. Quedaría por último una tercera cara que gravaría manifestaciones objetivas de riqueza que a la vez servirían de complemento a los tributos antes mencionados, en especial del que grava los ingresos. En este sentido, debe destacarse que dicho carácter complementario se funda en la necesidad de tener en cuenta que la distribución de riqueza e ingresos entre contribuyentes no es totalmente uniforme, que hay bienes que no producen ingresos por su carácter o, por lo menos, que no producen ingresos valorables monetariamente y que el consumo se conoce como variable no sólo al ingreso sino también a la riqueza. Esta imposición creará brechas de evasión recíprocamente con la imposición a las ganancias y produce una discriminación en favor a los ingresos derivados del trabajo.

Cuando el poder de imposición se encuentra, en virtud de disposiciones constitucionales, distribuido entre la Nación y las provincias resulta imprescindible, para una correcta captación de los tributos y en especial del impuesto que en estos momentos nos ocupa, que el mismo se encuentre en manos de la Nación, puesto que para poder aplicar la progresividad que el sistema lleva implícito es necesaria la sumatoria de todos los bienes poseídos, los que, sobre todo tratándose de patrimonios importantes, es dable esperar se encuentren diseminados en distintas jurisdicciones.

Por el contrario, aquellos gravámenes específicos que se imponen por la tenencia de determinados bienes son los más aptos para ser recaudados por las autoridades locales, quienes, por estar más directamente vinculadas con el medio ambiente, son las que mejor conocen de su existencia y pueden ponderar su imposición.

El actual sistema de imposición directa y subjetiva y periódica sobre patrimonios está integrado por el impuesto substitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes y el impuesto al patrimonio neto de personas físicas, y sucesiones indivisas.

Se propone transformar el primer tributo, hoy restringido a sociedades de capital, en su impuesto general al capital en todos los casos de producción de bienes y servicios organizado en forma de empresa, desligándolos de la imposición instantánea a la transmisión gratuita de bienes que aplican las jurisdicciones locales. Con ello se devuelve a la imposición local en materia de transmisión gratuita un importante volumen de materia imponible que le había sido sustraído, en desmedro no sólo de su recaudación sino también de la justicia tributaria, por substraerse a la progresividad. Así, este impuesto por su naturaleza trasladable dejará de producir el injusto efecto de que los consumidores —o sea la gran masa del país— vinieran a cargar con el impuesto de los herederos ricos, desobligando a éstos.

El impuesto al capital de las empresas actuará como complemento del impuesto al patrimonio neto, pues los contribuyentes pueden computar como crédito en este último el pago efectuado por el primero.

En cuanto al patrimonio neto el impuesto mantiene su estructura actual, introduciéndose varias mejoras de carácter técnico.

Se generaliza la imposición a toda forma empresarial, aunque incorporando un mínimo no imponible que contemple la situación de las pequeñas y medianas empresas cuando se trate de capitales que a los efectos de la ley tengan el carácter de nacionales.

En el impuesto al patrimonio neto, un aspecto destacable y que refuerza el carácter redistributivo de todo el paquete de reformas es que se grava mediante escalas progresivas, siendo

muy reducida la tasa en el tramo inicial de la escala, y se incrementa la tasa marginal básica.

Por otra parte, y a efectos de evitar el carácter regresivo del tradicional impuesto substitutivo, se incorporan como materia gravable las acciones y participaciones en otras empresas, dándole al impuesto al capital en este supuesto el carácter de pago a cuenta a efectos de evitar una doble imposición.

A efectos de determinar el monto de la materia gravada en cuanto a la tasa a aplicar, se consideran computables, así mismo, aquellos patrimonios que se encuentran expresamente exentos del tributo, con lo cual se adecua éste a la real capacidad contributiva de los titulares.

Por otro proyecto de ley, se propone reimplantar en el orden local de la Capital Federal la imposición objetiva e instantánea sobre los enriquecimientos gratuitos obtenidos en virtud de transmisiones de bienes, más conocido como impuesto a la herencia o a la transmisión gratuita de bienes.

Esta imposición fue dejada sin efecto a fines de 1972, entendiéndose que los argumentos esgrimidos para ello no son realmente válidos. Sin embargo, se ha procedido a mejorar en varios aspectos su técnica. Fundamentalmente, se fijan mínimos no imponibles y escalas de imposición progresivas, que se ajustan a la realidad económica a la que se dirige el tributo.

Por otra parte, se compatibiliza dentro de la jurisdicción nacional un gravamen que tienen todas las jurisdicciones provinciales, situación que hasta hoy ha producido una ínsula perniciosa en esta Capital Federal.

Una de las críticas más acerbas que se le formularon al anterior gravamen a la transmisión gratuita de bienes era, precisamente, la que se refería a que este impuesto alcanzaba plenamente a los pequeños y medianos patrimonios, situación que se agravaba con la existencia de mínimos no imponibles exigüos y tasas altamente progresivas.

Se daba la paradoja de que los pequeños patrimonios eran incididos substancialmente, mientras que los grandes usufructuaban la ventaja del anonimato en el régimen accionario, ingresando un impuesto substitutivo con tasa proporcional que en definitiva —en mayor o menor medida— se trasladaba a los precios de los bienes negociados.

Queda entonces claro que si se insiste en el tributo deben corregirse las causas que distorsionaban el sistema anterior. Esto se ha logrado. Por un lado desaparece el anonimato, y por otro se aumentan substancialmente los mínimos no imponibles y se atenúa la progresividad de su escala.

Resulta importante señalar la vinculación de las materias imponibles, de los criterios de valuación que existen entre este impuesto con el de capitales y patrimonios, y a su vez de éste

con el de ganancias, de forma tal que la sistematización alcanzada constituye un cerco a la evasión.

En cuanto a la nominatividad de los títulos valores privados, el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo nacional al Congreso contiene, además, disposiciones que tienden a estructurar un nuevo orden jurídico en materia de títulos valores, a través de la adopción de medidas que, por un lado, consisten en la readaptación de un régimen de promoción bursátil y, por otro, en la creación de un sistema que importa un cambio substancial del imperante hasta ahora en nuestro país en materia de títulos privados.

Como venimos desarrollando, el proyecto en consideración contempla globalmente distintos aspectos de la negociación de títulos valores privados, tratando de mejorar las condiciones de operatividad de sus mercados y favoreciendo mediante incentivos su crecimiento.

La parte que ahora analizaremos toca también a estos títulos, pero en otro aspecto: se inserta en la filosofía global que inspira a la nueva estructura impositiva que propicia el gobierno del pueblo.

Ya se ha dicho que la identificación de los titulares de la riqueza y la determinación de su circulación económica son piezas fundamentales, instrumentos sobre la base de los cuales se puede comenzar a edificar la estructura del nuevo sistema. Dijimos que no existe equidad fiscal si todos no tributan de acuerdo con sus posibilidades reales, y para ello es esencial saber cuáles son estas posibilidades.

Para lograr estos fines se ha considerado necesario determinar la nominatividad de los títulos valores privados. La iniciativa, como se sabe, ha sido sostenida reiteradamente en diversos sectores y forma parte de las bases sobre las que asentaron su actuación diversas organizaciones representativas. Sin embargo, sólo la fuerza del gobierno respaldado por el pueblo ha logrado vencer las resistencias que se oponen a esta medida, muchas de ellas solamente fundadas en que el anonimato es el escudo eficiente tras el que burlan cualquier política que tienda a la justicia social y a la equidad económica, cuando no a la verdadera independencia del país.

Claro, está que esta medida no es un fin en sí misma, tiene fundamentalmente a formar parte —esencial en cuanto es un presupuesto— de toda una nueva estructura que se base en la autenticidad y en el juego limpio de las fuerzas de la economía orientadas hacia la felicidad del pueblo.

De allí la importancia de la medida que tratamos, lo que nos lleva a decir que es imprescindible, porque no puede imaginarse realmente operativo el sistema global sin esta herramienta instrumental y previa.

Debemos señalar muy especialmente que el principio de nominatividad no tiende a desco-

nocer ninguno de los caracteres de los títulos valores privados, en especial las acciones. Su aptitud circulatoria, como es conocido, no resulta afectada por la variación del régimen de transmisión. Solamente se modifican las condiciones en las que puede realizarse, compatibilizándolas con las líneas generales que definen la nueva estructura económica del país. Precisamente para evitar una eventual incidencia negativa en la agilidad de los mercados de valores, se ha promovido la adopción de una figura reclamada desde tiempo por sectores vinculados a esta actividad: la caja de valores, a la que me referiré por separado.

Por otra parte, no puede afirmarse que el régimen actual de anonimato y de acciones al portador haya permitido un desarrollo adecuado de los mercados de capital en nuestro país. Por el contrario la realidad muestra su agotamiento progresivo durante muchos años y es, notoria su insuficiencia actual si los comparamos con las necesidades de capitalización de las empresas y las reales potencias de nuestra economía. Pensamos que en un clima de estabilidad política y económica, un gobierno que representa los intereses del pueblo puede instrumentar un programa económico de expansión, confianza y estabilidad, bases éstas sí eficientes para el desarrollo de los mercados de valores, el crecimiento de las empresas y el estímulo al ahorro genuino y la inversión reproductiva.

Tampoco creemos prudente tomar medidas parciales que, en el fondo, no respondan con eficacia a las finalidades que se persiguen. En principio, tanto la mera individualización fiscal de quienes cobran las rentas como otros sistemas ensayados ya sin éxito en nuestro país, sólo producirían la imagen de un aparato renovado, pero con los vicios, defectos e imperfecciones del anterior.

La solución merece ser clara y con vocación de definitiva. Los paliativos o ciertos gradualismos difusos, sólo traerían desconfianza: por un lado, en la efectividad de las intenciones expuestas por el gobierno y por fin, en las futuras medidas que cabría esperar como complemento. El criterio de prudencia, pacificación y participación con que se orientan las soluciones del país, en medida alguna significa mantener concesiones que detengan indebidamente el proceso de liberación y la implantación de nuevas estructuras coherentes y adecuadas a las necesidades imperiosas de justicia social y económica.

El fundamento positivo de estas medidas ha sido destacado en el mensaje de elevación por el Poder Ejecutivo. Debe conocerse concretamente quiénes son titulares de la riqueza mobiliaria y, por otra parte, eliminar la posibilidad de que reductos de anonimato creen fermentos de evasión fiscal que destruyan la equidad del sistema que se implantará.

Con estas premisas, indiscutibles en cuanto a su coherencia, la nominatividad no endosable

proyectada respecto de títulos privados es la solución adecuada y la única que se nos ocurre completa y global.

Tampoco puede pensarse que el anonimato absoluto del accionista y la acción al portador sean principios esenciales para el funcionamiento de la sociedad anónima. Fuera de la tradición de su nombre, es cierto que el sistema en muchas legislaciones avanzadas y de fuerte circulación de capitales e inversión accionaria se asienta en acciones nominativas.

Tenemos plena confianza en la capitalización popular y en la solidez creciente de nuestra economía para sustentar a las unidades de producción. Por eso no creemos que los actores del proceso de reconstrucción económica argentina deban quedar en las sombras ni que sea genuino hablar de capitales que se muevan en el anonimato absoluto como requisito imprescindible para que alguien se atreva a invertir. Todo lo contrario: nuestros empresarios responsables y el pueblo todo saben que los anónimos no son tales cuando se trata de ejercer el poder o imponer condiciones económicas a las empresas; pero saben también que nada hay que temer cuando alguien pone su nombre en empresas lícitas e invierte en ello el producido de sus esfuerzos o de sus capitales honestos. La mayoría procede así, y sabe que en ello no encuentra obstáculos y que el gobierno del pueblo lo apoyará con medidas económicas eficientes.

No creo necesario hacer un análisis exhaustivo del articulado concreto. Sólo señalaré que en la primera parte se establece el régimen de nominatividad, mientras que en la segunda se dispone sobre el proceso de conversión, que, siguiendo los lineamientos de prudencia y coherencia que hemos destacado, se hace gradual y se vincula con el funcionamiento de los mecanismos que aseguren el tránsito de un sistema a otro sin causar perjuicios innecesarios a la fluidez económica.

Párrafo especial merece el agregado que hemos sugerido hacer al artículo 23.

La comisión evaluó profundamente este tema y propicia la solución que allí se lee, convencida de que con ello no se produce agravio al régimen de sociedad conyugal, que fundamentalmente tutela los derechos de la mujer, pero estimando que el agregado es imprescindible para asegurar el éxito del sistema global del que forma parte el proyecto.

En efecto, en la actualidad el régimen de títulos al portador determina que las acciones y otros valores similares no estén regidos por el artículo 1.277 del Código Civil, que indica la necesidad de la conformidad del cónyuge cuando se dispone de bienes registrables.

La variación del sistema de títulos privados está orientada a las finalidades que hemos expuesto: detectar la riqueza mobiliaria, evitar la evasión y posibilitar la equidad impositiva. Estos fines chocarían, en su concreción práctica, con

la traba real que significaría la incidencia refleja del cambio de forma de circulación al exigir la conformidad del cónyuge para la transferencia. Si en lo futuro necesitara conformidad lo que hasta ahora no la necesitó, la negociación y su seguridad resultarían seriamente afectadas, máxime cuando los terceros adquirentes de títulos tendrían sobre sí la amenaza jurídica de la inseguridad de la transmisión del documento y las sociedades emitentes deberían tomar sobre sí la improba y casi imposible tarea de acreditar el estado civil de cada uno de sus sucesivos accionistas —de por sí cambiantes en el tiempo— y legalizar la autenticidad de la firma o conformidad de sus cónyuges en cada transmisión. Esto último es impensable en un mercado ágil como el mobiliario, y de allí la recomendación de la comisión.

Queremos destacar muy especialmente que nuestra comisión apoya firmemente el régimen de justicia que pretende instaurar el artículo 1.277 del Código Civil, sobre todo en cuanto protege a la mujer, en general desatendida en situaciones de crisis familiar. Nuestras ideas y nuestros programas son bien claros en estos puntos y no necesitan de una reafirmación reiterativa, pero tenemos la convicción de que el sistema de títulos nominativos no es adoptado ahora con fines de hacer ingresar esos documentos en la esfera del precepto indicado. Esto se refirma si señalamos que todo aporte societario de bienes registrables ya tiene que llevar conformidad del cónyuge. Por otra parte, los títulos no se inscriben en registros públicos, lo que afectaría la posibilidad de aplicación técnica y material de la norma tuitiva antes indicada. Finalmente, la solución no descarta la aplicación plena del régimen de la sociedad conyugal; por lo contrario, con la nominatividad que ahora implantamos se facilita enormemente la determinación de la riqueza a nombre de cada cónyuge y se simplifican las medidas de seguridad que sean necesarias en tutela de aquel régimen. Es decir, que la mujer tendrá más posibilidades de saber qué acciones están a nombre de su cónyuge, y las medidas precautorias que pueda necesitar podrán materializarse con la simple comunicación judicial a la sociedad emisora.

Respecto a la fundamentación del proyecto de ley relativo a la caja de valores, digamos que el proyecto introduce una reforma substancial en el ordenamiento jurídico relativo al depósito y transmisión de los títulos valores sujetos al régimen de oferta pública, que por esa circunstancia son, precisamente, los que necesitan una mayor agilidad en su transmisión.

La innovación consiste en:

1) Reglamentar un nuevo tipo de depósito colectivo de títulos valores, según el cual se posibilita que el ente depositario —denominado en el proyecto Caja de Valores—, si bien acepta en custodia títulos valores identificados, sólo



tiene obligación de devolver al depositante igual cantidad de títulos de la misma clase y especie, pero no los mismos títulos depositados. Estos pasan a constituir un condominio indiviso forzoso que pertenece en copropiedad a todos los que eran propietarios de los títulos en el momento en que se efectuó el depósito.

2) Implementar un sistema de transmisión relativo a los títulos depositados, según el cual para la transferencia de los mismos no resulta necesaria ni la traslación física de las láminas ni la inscripción del acto en los registros del ente emisor de aquéllos. Estos recaudos se substituyen por simples anotaciones contables que efectúa el ente depositario en sus propios registros, de acuerdo a órdenes escritas que emiten los depositantes. A tal efecto el ente depositario deberá llevar los libros y registros necesarios para asegurar la rapidez y seriedad de las operaciones que se le ordenen.

3) Prever la creación de la mencionada caja de valores a cargo de las bolsas de comercio que se encuentren autorizadas a cotizar títulos valores y de los mercados de valores, organismos éstos a los que se les posibilita participar a fin de que aporten su experiencia y responsabilidad para la eficacia e idoneidad del sistema. Con ello se concreta, una vez más, el amplio sentido de apertura e integración hacia todos los sectores, en procura de la puesta en marcha de las medidas necesarias para la reconstrucción nacional.

En lo que se refiere al régimen de desgravación impositiva para la compra de títulos privados, podemos expresar que la existencia de un mercado firme y vigoroso de títulos valores constituye uno de los presupuestos necesarios para el desenvolvimiento de aquellas entidades que deseen hallar una fuente de capitalización en el ahorro interno para financiar así los proyectos de desarrollo que aseguren el crecimiento de actividades productivas de importancia, a la par que genera fuentes de ocupación destinadas a absorber la demanda de trabajo en el país.

De ahí que la primera parte del proyecto se refiera al régimen de desgravación impositiva para la compra de títulos valores, establecido por primera vez en nuestro medio a través del decreto ley 19.061/71, en el que se introducen importantes modificaciones que tienden a perfeccionar el sistema con la finalidad de que cumpla los fines que se tuvieron en mira con su implantación.

La desgravación impositiva aludida tiene por fundamento la necesidad de afianzar los efectos producidos por la franquicia acordada para la compra de acciones y cuotas partes de fondos comunes de inversión, de manera tal que el esfuerzo fiscal realizado hasta ahora no se vea frustrado. Las nuevas condiciones de estabilidad económica y política inauguradas con el actual gobierno constitucional hacen necesario mante-

ner por un lapso más el sistema de promoción, ya que se estima que, dadas esas distintas bases, aquél ha de rendir los frutos esperados, máxime con las correcciones que se le han introducido.

Además, las normas proyectadas han de impedir que al producirse el vencimiento del régimen de desgravación, la liberación de las acciones mantenidas en depósito e indisponibles produzca un abrupto impacto en las negociaciones de esos papeles, con la consiguiente disminución de los precios al incrementarse la oferta existente.

Precisamente con el objeto de evitar las perjudiciales consecuencias derivadas de esa brusca interrupción del sistema se ha contemplado su prórroga, pero introduciendo la novedad de prever su desaparición gradual a través de la reducción anual de los montos y porcentajes de desgravación, la que se extingue definitivamente al finalizar el tercer año.

Además, las nuevas normas propuestas en esta materia presentan otras particularidades que pueden estimarse como coincidentes con algunas medidas adoptadas por el gobierno, tendientes a obtener un real y efectivo desenvolvimiento económico en todas las áreas de la producción. En este sentido puede señalarse como relevante innovación la que prevé que las sumas provenientes de la desgravación podrán utilizarse en la adquisición de debentures o bonos emitidos o garantizados por la Corporación de la Mediana y Pequeña Empresa, el Banco Nacional de Desarrollo, bancos de inversión y bancos oficiales de provincia, destinados a financiar inversiones que tengan por objeto la descentralización económica y la promoción regional. Es importante destacar esta novedad, ya que ella permitirá que las entidades mencionadas puedan, para cumplir con sus fines de apoyo a la empresa nacional de mediana y pequeña envergadura, tener acceso al dinero proveniente de la desgravación. Al mismo tiempo ello facilitará la finalidad, también perseguida por el gobierno del pueblo, de equilibrar y desarrollar las distintas regiones del país satisfaciendo a todos los sectores populares comprometidos por la inadecuada estructura actual de concentración económica.

Debo destacar que la Comisión de Presupuesto y Hacienda aconseja introducir en este inciso a los bancos oficiales de las provincias, pues estima que esta inclusión responde perfectamente a las finalidades del proyecto del Poder Ejecutivo y facilita su mejor aplicación. Los representantes de las provincias sabemos del gran papel que desarrollan los bancos oficiales de los estados en la promoción de la actividad económica de nuestras regiones y cómo a veces son los únicos medios realmente eficaces para resolver agudos problemas crediticios de las empresas y los pobladores allí afincados. En el fondo, pues, operan como verdaderos bancos locales de desarrollo y promoción, y por su conocimiento

de la zona y la confianza que despiertan en los habitantes son los más aptos para canalizar los fondos depositados por los contribuyentes de la región hacia actividades allí radicadas. En el fondo, se cumple la meta de emplear el ahorro regional en la inversión destinada al desarrollo de la misma zona, creando así posibilidades para la solución de los problemas sociales particulares de cada provincia.

También el proyecto presentado ajusta algunos resortes técnicos que se ha entendido como necesarios para propender al mejor desarrollo de nuestro mercado de títulos valores, pudiendo citarse al respecto:

1) La posibilidad de que los contribuyentes dispongan la enajenación total o parcial de los valores depositados, con la condición de ordenar simultáneamente la inversión de su producido en la adquisición o subscripción de otros incluidos en el régimen, manteniéndose, sin embargo, el término de indisponibilidad originario. Esta facultad permitirá establecer condiciones para que se cree un activo mercado a través de las negociaciones de los títulos adquiridos con fondos de la desgravación, los que hasta ahora debían quedar depositados sin que sus titulares pudiesen disponer negociaciones sobre ellos, lo que quizá ha impedido acrecentar el volumen de operaciones en los respectivos mercados.

2) La condición impuesta de que las nuevas emisiones que han de poder subscribirse con fondos de la desgravación tengan por destino inversiones en activos fijos, y en capital de trabajo vinculado con esa inversión, de empresas de capital nacional, en los términos de la ley de inversiones extranjeras. Ello contribuirá al mejor aprovechamiento social del sacrificio fiscal, al implementarse las inversiones reales y efectivas de nuestras empresas, que, como las mencionadas, constituyen factor de desenvolvimiento y ocupación.

3) La previsión de que el 90 % del monto de los depósitos correspondientes a la franquicia no utilizados en término por los contribuyentes ingresará al Banco Central a fin de que éste los destine al financiamiento mediante adelantos a los bancos de inversión y a las compañías financieras, y de éstas a la Corporación de la Mediana y Pequeña Empresa para la prefinanciación y colocación de emisiones de acciones, debentures o bonos.

4) La limitación impuesta a las sociedades de absorber fondos del régimen sobre la base de porcentajes fijados con relación a su capital, a efectos de impedir que unas pocas empresas se beneficien con los fondos aludidos en detrimento de otras que se ven excluidas de hecho por la preponderancia económica de aquéllas.

5) La obligación de emitir por debajo de la par, para el aprovechamiento de los fondos provenientes de esta desgravación, cuando la cotización de las acciones de la sociedad se encuentre en un diez por ciento más por debajo de la

par, y de emitir con prima cuando dicha cotización se encuentre en un veinte por ciento o más por encima de la par.

Con respecto a la emisión por debajo de la par, el proyecto también prevé la reforma del régimen establecido por el decreto ley 19.060/61, a fin de adecuar sus disposiciones al nuevo régimen societario y, sobre todo, para eliminar trabas que se han opuesto, hasta ahora, a la plena utilización del instituto por parte de las empresas con cotización por debajo del valor nominal.

6) La obligación impuesta a las sociedades incluidas en el régimen de la ley de ofrecer en subscripción nuevas emisiones de acciones por un valor equivalente a por lo menos el cinco por ciento de su capital integrado, por año calendario. Con ello se pretende propender a la apertura de las sociedades al público y dar posibilidades de acceso al capital de la sociedad elegida como destinataria de la desgravación.

En el título final se propicia la eliminación del impuesto a la venta de valores mobiliarios. Ello se fundamenta en que, por el proyecto de impuesto a las ganancias, las diferencias de valor de estos títulos son gravadas con este último tributo, mientras que con anterioridad estaban exentas. En consecuencia, corresponde derogar el impuesto tasado para evitar superposiciones indebidas.

Me referiré ahora al proyecto de ley relativo al régimen para la emisión de documentos que instrumenten créditos.

La profunda reforma al régimen fiscal debe ser más propiamente identificada como una reformulación de toda su estructura, su sistemática y sus soluciones desde el ángulo de la soberanía política, la justicia social y la libertad económica. Por ello exige que se corrijan también piezas de todo el aparato jurídico del Estado que antes estaban orientadas al servicio de otros intereses.

En este sentido hemos señalado ya anteriormente cómo se pretende establecer un sistema fundado en la equidad fiscal, que parte de la base de que más paga quien más tiene. Para ello es absolutamente imprescindible saber con exactitud dónde se encuentra la riqueza del país. Sin este conocimiento previo la reforma sería ilusoria, y también ineficaz e injusta, pues no resultaría posible gravar con equidad si algunos pudieran disimular su verdadero patrimonio y cayera sobre los de menos recursos —generalmente los que no pueden ocultar nada— todo el peso del sostenimiento de la estructura del Estado.

De tal forma, es evidente que, así como debe saberse quién es el titular de la riqueza mobiliaria representada por títulos valores como las acciones, debentures, etcétera, resulta imprescindible conocer también la parte que se moviliza y documenta a través de otros títulos —generalmente de corto plazo— que se utilizan para la aplicación del crédito y el ahorro nacional.

Así, sencillamente, queda expresada la finalidad del proyecto que consideramos: herramienta imprescindible para la aplicación de la política tributaria de equidad que propugnamos; medio para la determinación de la riqueza, su aplicación y circulación en el país; correlato necesario de otras medidas tendientes a iguales fines, como la nominatividad de los títulos valores privados.

Además de estas pautas fundamentales, otras reflexiones son importantes respecto de la novedad que se introduce.

De entre ellas merece señalarse que el mantenimiento del régimen de absoluto desconocimiento del Estado sobre la titularidad de estos documentos llevaría a crear un anónimo refugio proclive a la clandestinidad. Esto comportaría, por un lado, la permisión, no acorde con los principios de justicia antes señalados, de un privilegio respecto de cierto sector o cierta clase de instrumentos; por otro lado toleraría la subsistencia de elementos aptos para la evasión del régimen tributario, lo que se desea eliminar de todas formas. Cuanto mayor es la cuota de justicia de todo el sistema, mayor es su aceptación por el pueblo, que debe cumplirlo y a cuya felicidad se destina.

También es preciso destacar que si este sector quedara indeterminado acudirían a él capitales y ahorro desplazados de otros sectores buscando substraerse al sistema general, lo que descompensaría indirectamente las fuerzas de la economía y, en lugar de producir el efecto de equidad, mantendría el injusto sistema actual, sólo que reubicado en otros sectores indebidamente legisados.

Por fin, y sin que ello sea exhaustivo, el relevamiento de este enorme mercado financiero y comercial que se mueve a través de esta clase de documentos permitirá conocerlo más profundamente, y a partir de allí valorar sus modalidades y dimensión reales y dictar las pautas económicas adecuadas para que todas las fuerzas de la economía se orienten eficazmente hacia el cumplimiento de los planes nacionales de grandeza y justicia social.

No se nos oculta que toda reforma substancial produce algunas reacciones y algunos temores. Descontando la oposición de quienes quieren seguir medrando con la usura y la evasión, otros quizá tengan esa actitud por el temor a lo desconocido.

Los legisladores tenemos confianza en la prudencia del gobierno del pueblo, y sabemos que en la implantación de las medidas necesarias para el acceso de las clases trabajadoras al disfrute de la felicidad y de los bienes a que tienen derecho se ha de proceder de forma de no perturbar el desarrollo económico del país. Sabemos que ambas cosas no son en absoluto antagónicas sino coincidentes, y en ese aspecto la modulación de los tiempos exactos para la aplicación de las medidas corresponde sea resuelta

sobre la marcha, pues es precisamente una de las facultades y de los deberes del ejecutor. Corresponde, por ende, que este Congreso otorgue al país y encomiende al Poder Ejecutivo las armas necesarias para que las finalidades puedan cumplirse en tiempo propio y con los instrumentos necesarios para conseguirlo, y por ello proponemos la aprobación del proyecto en estudio, que confía al Poder Ejecutivo la determinación del momento en que comenzará su aplicación efectiva, acorde con las circunstancias complementación de todas las fuerzas de la economía.

El sistema sobre el que se basa el proyecto —del que pueden encontrarse algunos antecedentes en otros países— se fundamenta en un procedimiento que asegure los fines que se persiguen. Por ello se edifica sobre dos líneas principales: por un lado, la emisión de los documentos debe hacerse en formularios oficiales cuya fecha de expendio se identifica, y, dentro de un lapso prudencial, debe registrarse; por otro lado, se priva de fuerza ejecutiva a los documentos que no cumplan estos requisitos, los que, sin perjuicio de otras sanciones que pudieran corresponder, tampoco pueden servir para acreditar pagos a los efectos fiscales.

La implementación del sistema de expedición y registro de documentos se establece sobre bases simples, de forma que el Poder Ejecutivo pueda adecuarla ágilmente a la ya expuesta finalidad de no perturbar en absoluto el buen uso de estos documentos y la atención de las necesidades económicas.

En cuanto al régimen de coparticipación general de impuestos nacionales, merece un profundo examen en materia de sistema de distribución, para ajustarlo a la equidad. Por ello se encuentra a estudio en la etapa de las consultas recíprocas entre las distintas jurisdicciones.

No obstante, ciertos aspectos que hacen a su funcionamiento requieren ajustes estructurales urgentes para salvar errores de importancia que afectarán a las jurisdicciones locales gravemente, y la reforma impositiva misma requiere su adecuación a ella. Este tipo de ajustes, por su naturaleza, no puede esperar las soluciones de fondo.

La reforma del régimen tiene por objeto, en esta primera instancia, solucionar estos aspectos. Para ello se ajusta el régimen en tres etapas, según lo requieran dichas necesidades.

Una parte de la reforma es de efecto retroactivo y persigue solucionar grandes problemas en curso.

Uno de ellos es la fecha límite de adhesión hoy vigente, y en virtud de la cual quienes hubieran adherido han perdido el derecho a la coparticipación y deberán devolver lo que han recibido a cuenta de ella. Actualmente todas las provincias se encuentran adheridas, por lo cual, en rigor de verdad, dicha cláusula no tiene objeto, pues el sistema funciona integralmente.

Pero una provincia, Catamarca, lo hizo fuera de término, lo cual, de no removerse dicha disposición retroactivamente, le produciría un ingente perjuicio, sin justificativos ni beneficio alguno de las demás ni de la Nación. Por ello, dicha cláusula debe eliminarse.

Como en el régimen actual de coparticipación se refundieron en uno solo los dos que le pre-existían (el de impuestos internos unificados y el de los restantes impuestos nacionales), el gobierno anterior incurrió en un serio error técnico al efectuar la refundición.

El régimen de unificación de impuestos internos establecía la prohibición a las jurisdicciones locales de gravar en forma desproporcionada —o sea con alícuotas diferentes— a las actividades análogas a los expendios alcanzados por dichos impuestos internos y actividades conexas. La razón de la medida era que el impuesto interno en sí mismo era un gravamen a los consumos específicos y selectivos, por lo que no admitía grados adicionales de selectividad en la imposición.

Al producirse la fusión de los regímenes, se extendió también al impuesto a las ventas, por error, la incompatibilidad antedicha, probablemente por creer que ella reposaba en el carácter indirecto de la imposición, lo cual es inexacto, pues se fundaba, en cambio, en su carácter específico y selectivo.

Como el impuesto a las ventas es el impuesto general a los consumos, la resultante no perseguida fue, en los hechos, establecer la incompatibilidad de las alícuotas diferenciales para todos los productos y no sólo para algunos. Esto implicará que las provincias deberán devolver a sus contribuyentes de alícuotas diferenciales todo lo recaudado en el año, lo cual provocará una crisis institucional de enorme magnitud por causa de un error. Por esto se modifica retroactivamente la norma correspondiente, suprimiendo la inadecuada mención del impuesto a las ventas, con lo cual la cláusula de incompatibilidad sólo juega dentro de sus justos límites, tal como lo vino haciendo siempre.

La segunda parte del proyecto viene principalmente a recoger la modificación del sistema impositivo, que tendrá efectos el año que viene. Consecuentemente, se substituyen en el régimen de coparticipación los impuestos nacionales substituidos para ese año (réditos, ganancias eventuales, substitutivo, patrimonio neto) por los que los reemplazan (ganancias, premios, capital y patrimonio), y se dan de baja los que se eliminan, como el impuesto a la venta de valores mobiliarios.

La tercera parte del proyecto se hace cargo de los efectos de la reforma a partir de 1975 con el mismo criterio. Así, se reemplaza en el régimen de coparticipación el impuesto a las ventas por el impuesto al valor agregado y se da de baja al impuesto al parque automotor.

La implantación del impuesto al valor agregado crea problemas propios cuya solución se en-

cara. Este impuesto, en primer lugar, viene a substituir un impuesto nacional (ventas) y otro local (lucrativas). Por ello las incompatibilidades destinadas a evitar una imposición múltiple deben alcanzar ahora al impuesto a las actividades lucrativas en su forma actual. Ello requiere por su parte la aclaración de que un impuesto local del tipo patentes, de posibilidades más reducidas y selectivas, que antes existió en el país, no es incompatible.

En segundo lugar, la aplicación lisa y llana del sistema de coparticipación sobre el total de valor agregado haría que la Nación viniera a percibir para sí una parte substancial de la llamada herencia del impuesto a las actividades lucrativas, que nunca fue suyo, y ello constituiría un abuso injustificado.

Así, pues, en lo referente al impuesto al valor agregado se toma debidamente en cuenta, para la distribución de su producido, su origen y diversidad de fuentes, a fin de que la implantación del impuesto no resulte en el avance de alguna jurisdicción en detrimento de otra. El criterio aplicado ha sido el más justo y fuera de toda posible impugnación: el proporcional. En la parte proporcional en que, medido en recaudaciones reales, el impuesto al valor agregado venga a reemplazar exclusivamente al impuesto a las ventas, se distribuirá entre la Nación y las provincias tal cual se distribuye ventas. En la parte en que el impuesto al valor agregado, medido sobre las mismas bases, reemplace al impuesto a las actividades lucrativas, se distribuirá exclusivamente entre las jurisdicciones a las que pertenece este impuesto reemplazado —lo que excluye a la Nación—, y entre ellas, a su vez, también en proporción directa a su recaudación de lucrativas con respecto a lo que recaudan todas las jurisdicciones locales en conjunto por dicho impuesto.

La Nación es la que promueve el impuesto al valor agregado, y es sabido que todo nuevo impuesto que reemplace a anteriores presenta ciertas posibilidades de un riesgo que se asume sobre la base de cálculos serios; pero ello no lo elimina como posibilidad, sino que sólo lo minimiza como tal. Las jurisdicciones locales no tienen por qué compartir financieramente este riesgo, pues no lo han creado.

Por esto, para el primer año de recaudación, que carece de antecedentes —todo ajuste en caso de error sólo podrá hacerse para el futuro, con lo cual no se solucionarán los efectos ya ocurridos— la Nación, además de admitir un régimen de coparticipación especial, debe ofrecer una garantía en el sentido de que sus decisiones sólo puedan perjudicarla a ella sola, y que las jurisdicciones locales por lo menos estén aseguradas de un ingreso equivalente al que se habría producido de mantenerse el impuesto a las ventas y el de actividades lucrativas.

A este fin responde la última cláusula.

Señor presidente: con esta última parte de mi exposición dejo hecho un informe global sobre

las leyes que en este momento tenemos en consideración. Por ello pido su aprobación en general.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º del Honorable Senado, senador doctor José Antonio Allende.

**Sr. León.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Allende).** — Tiene la palabra el señor senador por el Chaco.

**Sr. León.** — Señor presidente: el Poder Ejecutivo nacional ha promovido numerosas leyes orientadas a crear las condiciones de una profunda reforma impositiva. Estas reformas, con matices modificatorios, fueron votadas por la Cámara de Diputados y han sido evaluadas por la Comisión de Presupuesto de este Senado.

Todos sabemos que dentro de cualquier engranaje económico, el régimen impositivo puede ser una herramienta imponderable para determinar una orientación a la política económica. En efecto, puede la tributación ser una llave esencial que sirva para abrir las puertas del rumbo que en la política económica nosotros pretendemos recrear.

Alguien dijo que un país crece a veces como el espejo de su propia política económica. Puede ser también que la imposición sea un arma que, aun con muy buenas intenciones, se use mal y nos lleve a un error en la legislación, con resultados negativos para los intereses del conjunto de la comunidad. Porque esto es así y ese peligro se corre; quienes integramos el Senado de la Nación debemos actuar con toda responsabilidad para no equivocarnos. No vamos a votar esta tarde una declaración; vamos a votar leyes que hacen al valor del salario, a la jerarquía del hombre, a la importancia de la tierra, a la posibilidad del trabajo, a la vocación federalista, afirmando esta coparticipación que informó con brillo el señor miembro informante de la comisión.

Vamos a votar aquí un proceso de transformación tributaria que encaja con acierto en el panorama de nuestra economía. Puede ser un motor que empuje la transformación o bien un freno que vuelva a la frustración de los últimos tiempos.

De nuestro acierto, entonces, depende que podamos crear las condiciones de capitalización que nos libere. De nuestra responsabilidad depende la expansión o el desempleo, la inflación o la estabilidad. Y porque esto puede ser, aun con escaso tiempo hemos dado despacho a estas leyes con una alta intención: la de que no sirva sólo a un sector, porque marginaríamos todos los intereses de sectores que pasaron por nuestra comisión, para intentar una política que integre al conjunto y le ponga una vocación de solidaridad definitiva a nuestro pueblo.

Yo sé que vivimos tiempos de interrogantes difíciles de resolver; pero quiero esta tarde, al votar estas leyes importantes que bien utili-

zadas pueden ser palanca del cambio o herramienta de nuestra liberación dejar un poco en el camino la angustia tradicional de nuestros últimos tiempos y colocarnos definitivamente —al menos yo pretendo esto— en el camino de una esperanza argentina.

No quiero mencionar ya quiénes son los culpables del fracaso de ayer, quiénes desnacionalizaron nuestra economía, quiénes crearon la frustración de nuestros trabajadores, quiénes empobrecieron nuestra clase media. Estamos viviendo las etapas iniciales de un proceso de estabilidad institucional que no sólo debemos defender sino que tiene que generar, engendrar y concretar el cambio que exige la estructura del país y que alimentan con entusiasmo las nuevas generaciones argentinas.

Los responsables, cualquiera sea la ubicación institucional en que estemos colocados —el Ejecutivo por un lado o nosotros, legisladores, por otro—, recibimos el mundo argentino con su producción destruida, caída su industria, descompuesto el agro, disminuido el salario, agrandado el centralismo que casi siempre es como una paralela cuando está en violación la soberanía del pueblo de nuestras regiones.

Es pues necesario revertir esta marcha, y las coincidencias políticas y económicas engendradas por sectores políticos, empresarios y trabajadores muestran una disposición para dejar un poco la política del sector y realizar la integración en función de las grandes necesidades del país como conjunto.

Creo que todos estamos apurados. Tenemos que dinamizar una Argentina paralizada, desarrollarnos apresuradamente. Votamos la promoción industrial, nacionalizamos los depósitos, dijimos cómo queremos que debe ser la inversión. Pero también es cierto que todavía para nosotros, legisladores institucionalizados de la oposición en la República, en algunos campos aparece en mora el Poder Ejecutivo nacional. Los planes energéticos son lentos, los de viviendas se publicitan, pero la construcción insiste en su crisis. No está claro qué pasará con nuestro petróleo, y no sabemos qué indica el nuevo presupuesto cuando declara la facultad de traspasar empresas nacionales a esferas privadas. No se concretó un crecimiento económico sostenido. En el primer semestre hubo una disminución en la inversión de 1,3 %, y en el segundo semestre de un 2,7 %. Ha disminuido la producción de petróleo, de carbón mineral, del arrabio, del acero, de laminados. También sé de algún otro parámetro que marca alguna etapa positiva, como es el contralor del proceso inflacionario. Tal vez convenga decir aquí que frente a este contralor no habrá que marcar los límites duros de una rigidez que lesione el abastecimiento y golpee sobre todo a la pequeña y mediana industria. Pero esto pertenece a otras áreas que, si bien son trascendentales y son tocadas por la legislación que estamos considerando, tal vez



sean motivos de un gran debate de la política económica —al menos es ésta nuestra aspiración— cuando a la brevedad debamos considerar el nuevo presupuesto de la República.

Nosotros integramos un partido político que viene a votar estas leyes no por capricho, no por una circunstancia bondadosa, sino porque queremos ser leales con firmes coincidencias extrapartidarias, orientadas fundamentalmente a erradicar la evasión. Permítaseme leer las coincidencias firmadas por nuestro partido con otros sectores políticos para comprender por qué nosotros esta tarde con una gran tranquilidad vamos a votar con disidencias parciales estas leyes, que yo creo pueden ser perfectibles y que pienso pueden ser un ladrillo de mejoramiento en el organigrama de la política integral del gobierno argentino.

En estas coincidencias decíamos que había que erradicar la evasión, simplificar el sistema total, tanto para los contribuyentes como para el Estado; reestructurar el impuesto a los réditos sobre la base de suprimir privilegios, restableciendo el principio de la universalidad esencial a este tributo y ampliando el concepto de renta gravada de acuerdo con la capacidad contributiva; terminar con el abuso de las deducciones por inversiones, derogando las injustificadas franquicias existentes; personalizar el impuesto a los réditos de las sociedades anónimas volcando los dividendos a la declaración conjunta de rentas; institucionalizar el concepto de renta como incremento neto de patrimonio más consumo; derogar el impuesto a las ganancias eventuales, incorporándolo al impuesto a las utilidades; modernizar el sistema de imposición a los consumos sobre la base de derogar los impuestos que producen distorsión de los precios en perjuicio de los consumidores; ampliar la materia gravada en el impuesto al patrimonio de manera que incluya el de las sociedades anónimas y los valores mobiliarios; incorporar el principio de la renta potencial de la tierra en lugar del de la renta real del impuesto a los réditos de las explotaciones agropecuarias; sujetar a la imposición los enriquecimientos por transmisión gratuita con tasas que tengan en cuenta la capacidad contributiva del beneficiario y con mínimos no imponibles que preserven el patrimonio familiar; corregir la distorsión de la escala progresiva en los impuestos directos; crear mecanismos automáticos para ajustar a la realidad los patrimonios y los resultados sujetos a imposición.

Nuestro partido sostiene estas consignas y está comprometido en esta actitud con otros sectores de la vida argentina.

Por si esto fuera poco, en el programa sostenido por la Unión Cívica Radical en el último proceso electoral se establece claramente que es necesaria la reestructuración del sistema fiscal de manera que el mismo sirva como principal instrumento de la justa redistribución de

los ingresos, asegurando los recursos necesarios para el desarrollo nacional y la equidad cierta en la distribución de la carga impositiva. A estos efectos deberá aliviarse la posición del contribuyente por trabajo personal, gravarse el patrimonio neto individual, simplificar las declaraciones, afirmar el impuesto sucesorio en reemplazo del substitutivo, incorporar las rentas accionarias a la declaración individual, reducir las tasas de impuestos que gravan los consumos, y la eliminación de impuestos al bien de familia. Es decir que casi en un largo trecho y al margen de la implementación con que se ha articulado la legislación que consideramos en esta sesión, la Unión Cívica Radical tiene el compromiso público de alentar este proceso de cambio, que —reitero— puede ser que nos coloque realmente en divergencias parciales, pero que a criterio del radicalismo son útiles para ir engendrando una política económica que cree las condiciones de equilibrio social y ponga definitivamente alas de despegue a la recuperación económica, cultural, política y social de los argentinos.

Nosotros dijimos en debates anteriores, cuando tratamos el reajuste del presupuesto de 1973, que hubiera sido útil estudiar el nuevo presupuesto con estas reformas para saber cómo se va integrando esta planificación recuperadora que a mi criterio, no señala una línea coherente que permita asegurar una continuidad.

Con respecto a esto, y sobre la base de que es indispensable el ajuste entre la política tributaria y el cálculo de recursos para el presupuesto de 1974, y sin haber hecho un estudio exhaustivo de éste por que no ha tenido entrada oficial en este Senado, es evidente que surgen interrogantes sin respuesta para el trazado de este ajuste. Por ejemplo, el artículo 20 del nuevo proyecto de presupuesto dispone prorrogar por un año el gravamen del 5 por ciento establecido en 1971 sobre las ventas de ganado vacuno a todo destino.

Yo no estoy en la posición de defender o avalar esta posibilidad; la marco como ejemplo. Este gravamen había sido establecido como factor coyuntural en la política de carnes, en circunstancias no similares a las actuales.

Esto tal vez merezca una respuesta, y también cabe la pregunta de por qué viene este artículo en la ley de presupuesto y no se incluyó dentro de la reforma tributaria.

Nosotros, el radicalismo argentino, integramos un pensamiento político que pretende colocarse en la cresta de la ola de una revolución nacional signada por el símbolo de la justicia, y podemos votar hoy leyes impositivas que sirvan básicamente para la mejor distribución del ingreso, y para concretar esa justicia. Yo puedo votar recursos para que el Estado disponga, por ejemplo, una mejor atención de la salud, rubro que nos muestra una mortalidad infantil en crecimiento. El presupuesto de 1974 señala para la salud el 8 por ciento; para educación, 16 por

ciento, y para vivienda, el 3,6 por ciento. Todo esto se puede discutir, pero yo tengo tranquilidad de argentino propiciando una tasa si ella sirve para la educación, la salud y la vivienda.

Por eso me preocupa el nuevo artículo 59 del presupuesto, que autoriza la flexibilidad en la distribución del gasto ya que solicita se permita modificar la finalidad, la función y la jurisdicción dentro del volumen. Y esto no me gusta porque no me asegura que la tasa que mi voto pueda imponer esta tarde no sea usada para el rumbo social y sí para inversiones no multiplicadoras.

Sería odioso, y yo sé que esto no está en el ánimo de los señores legisladores, autorizar en función de este artículo que las partidas creadas para educación se destinen a difusos gastos de seguridad, o que se argumente en alguna circunstancia que no se cumple con el Estatuto del Docente porque, en uso de las facultades que pretende el Ejecutivo, se destinan fondos de educación para gastos de menor aliento que sembrar abecedarios. El proyecto de 1974 parece orientarse a la contracción de la estructura no retributiva, y ello serenaría mi preocupación. Pero aquí está este bloque para controlar; y no dejaremos de cumplir ni de prodigar nuestras mayores preocupaciones para que del conjunto de nuestras discusiones surjan las condiciones de seguridad que todos buscamos.

La estructura no retributiva se aumenta en un 16 por ciento, y en grado mayor la retributiva o de inversión y dentro de ella, por ejemplo, la de los combustibles, que espero se cumpla; sin embargo, los gastos de personal acrecen en un 31,70 por ciento, lo que no es poco si pensamos en una inflación del 15 por ciento.

Tal vez hubiera sido más oportuno, y por eso hago esta incursión en el proyecto de presupuesto, esperar la planificación presupuestaria para una mejor estimación, ya con la reforma impositiva votada, a los efectos de cálculos más ajustados a nuestra realidad.

Observo que los cálculos de recursos están realizados sobre la base de los impuestos vigentes en 1973, es decir, que no se tiene en cuenta esta reforma impositiva. El cálculo para 1974 estima el aumento de los recursos corrientes, impuestos y tasas, en un 41,8 por ciento y en un 45,3 por ciento, respectivamente. Los tributos que produjeron en 1973 aproximadamente 1,9 billones, deben producir en 1974 unos 2,7 billones, o sea 900 mil millones de pesos más. Si a esto le agregamos el blanqueo, estaríamos en una necesidad adicional de sólo 400 mil millones de pesos, lo que muestra el ponderado optimismo a que nos lleva al aumento de más del 18 por ciento en la recaudación. En este aspecto, creo que el Poder Ejecutivo está entonces frente a una estrategia, o a una poca fe, frente a esta reforma impositiva que nosotros estamos alentando.

Yo no sé si la evasión crecerá; creo que hay que crear las condiciones de una conciencia nacional que trate de que esto no pase. De todas maneras, y sin el control riguroso de la matemática, creo que la recaudación crecerá más que ese 18 por ciento que calcula el proyecto de presupuesto enviado, y permite deducir esto la corriente actual y la nueva legislación que estamos votando esta tarde. Espero acertar, y pienso que el cambio tributario que hoy auspiciamos sea utilizado definitiva y limpiamente como palanca esencial para la promoción de un espectro social equilibrado en nuestra República.

Sobre estas leyes que nosotros consideramos esta tarde, se habló mucho hace un tiempo en el país, y todos los sectores de la Nación dieron su opinión. Pareciera que cada uno miraba la República con su propia imagen, con su propio espejo, y pareciera que en vez de mirar a lo largo y a lo ancho cómo estructurar un país para el conjunto, cada uno vino a esta Cámara a defender su propio egoísmo, su propia cuenta bancaria, su propia especulación.

Por eso nosotros esta tarde estamos votando con alto sentido nacional estas leyes que tienen, como lo saben los señores senadores, nuestras discrepancias parciales. Estas leyes poseen —a nuestro criterio— algunos defectos. Por supuesto, hubiéramos preferido tal vez crear las condiciones de un revalúo paralelo a la pequeña y mediana empresa, y que no se permita sólo a las grandes empresas hacer el revalúo de los activos fijos, porque éstas, que poseen el capital, con estas medidas crean condiciones de inferioridad para aquellas que tienen otro proceso en su producción y en su comercialización.

Esto no lo digo yo, ni es caprichoso, sino que puede leerse —aunque para ahorrar tiempo no lo hago— en las propias declaraciones del presidente de la Confederación General Económica, ingeniero Broner, que está totalmente integrado a la política económica de este gobierno y que se expresó con idénticas aspiraciones que las mías con respecto a esta etapa que yo entro a considerar en estas circunstancias.

Decía recién que distintos sectores de la República, algunos interesados, con lealtad, y otros sin tanta generosidad, estuvieron en nuestra comisión y propusieron modificaciones. La comisión del Senado trabajó con una alta responsabilidad, porque estaba decidida a considerar todos estos aportes como integrantes del conjunto de la República.

Nadie puso en la consideración de estas leyes su ideología ni su pasión ni su egoísmo. La comisión, pese al escaso tiempo que tuvo para considerar los temas, trabajó con un sistema de crear las mejores condiciones. Este paquete está integrado por diez proyectos de ley. Citemos, por ejemplo, uno de ellos: la nominatividad de las acciones, que crea también la desgravación impositiva para la compra de títulos, valores privados y su nominatividad.

Sobre esta ley la representación del radicalismo tenía sus dudas porque venía a mantenerse la continuidad de una ley, la 19.061, que databa de antes y estaba orientada a la deducción del diez por ciento para la compra de títulos de valores privados que se cotizaban.

Esta ley fija porcentajes decrecientes. Como este ahorro y capitalización iban orientados a grandes empresas, resultaba más útil dejar en manos de los contribuyentes menores este dinero, si es que el Estado no lo iba a utilizar. Así lo interpretábamos nosotros.

El señor miembro informante de la comisión, con alto sentido federalista, postuló que se agregara al articulado, que establece la posibilidad de compra de las acciones, a los bancos oficiales de provincias, lo que iba a permitir que este diez por ciento que puede deducirse tenga el sentido de alentar la producción, el desarrollo y el optimismo de los hombres de las zonas más desposeídas del país.

Sobre esto se ha explayado con certeza el señor miembro informante, y no lo voy a hacer yo ahora.

Hemos puesto nuestro voto en favor de este despacho porque estamos convencidos, primero, de que la nominatividad sirve para la individualización; crea las condiciones de un agrandamiento de la base impositiva y, además, considero que podía no ser justa la declinación que tiene a los tres años, ya que los porcentajes que van quedando me dan la impresión de que no tienen ya una incidencia trascendente en el proceso económico.

Otra de las leyes es la que corresponde al proyecto en revisión sobre impuesto al enriquecimiento patrimonial a título gratuito. Sobre esto podría decir que el sistema vigente hasta 1972 era la ley nacional 11.287, que reglaba el impuesto a la transmisión gratuita de bienes y que a mi criterio era anticuado, de escueto articulado y que en parte se completaba a través del decreto reglamentario. Las provincias, siguiendo el esquema de la de Buenos Aires, fueron incorporando a sus cuerpos legales las mejoras de la doctrina y la jurisprudencia.

Algunos países de habla inglesa utilizaban las dos formas posibles de aplicación de este impuesto: una, sobre el monto total del patrimonio sucesorio, y otra como la aplicaban entre nosotros, que grava la parte de cada beneficiaria. Este impuesto fue dejado sin efecto en el orden nacional a partir del 1º de enero de 1973 y reemplazado por el impuesto al patrimonio.

Ahora estaríamos frente a la reimplantación del impuesto. Este proyecto puede ser considerado como aceptable, y exterioriza y se integran en él todos aquellos aspectos que las provincias ya habían recogido, que hacen del impuesto un cuerpo —a mi criterio— definitivamente actualizado.

Sobre este proyecto, en el artículo 21 y por modificación de la Comisión de Presupuesto y

Hacienda del Senado, se amplía el plazo de 18 a 24 meses para el pago del impuesto en los enriquecimientos producidos por causa de muerte, lo mismo que en los casos de ausencia con presunción de fallecimiento.

En cuanto al cobro compulsivo del impuesto, se lleva de tres a cuatro años.

En el artículo 24 del proyecto se amplía de un año a dos el tiempo durante el cual se pagará sólo el uno por ciento de interés mensual sobre el total de la deuda.

Tal vez podríamos decir que en este impuesto, que es complementario del gravamen a las ganancias y al patrimonio neto, hubiera sido útil también que se aumentaran los montos exentos de impuesto, establecidos en el artículo 5º, cuando los beneficiarios fueren el cónyuge, ascendientes y descendientes en línea directa, y de esa manera aliviar la carga.

En el artículo 11, inciso t), en cuanto a la forma de fijar el valor de los muebles de uso personal o del hogar, o de residencia temporaria, tal vez hubiera sido útil bajar el 5 por ciento del activo al 2 por ciento, como ya se hiciera en el impuesto al capital y al patrimonio.

En el artículo 22, se podría haber implantado la liquidación del gravamen mediante declaración certificada por contador público, cuando el fisco no lo hiciera dentro de los quince días desde que el contribuyente le hubiera aportado los datos solicitados.

Este es, a grandes rasgos, el esqueleto de este proyecto de ley que lleva la firma del sector que represento, por creer también que conduce a una moralización y sirve a una más justa distribución en la medida que se creen las posibilidades que tuvo en cuenta la Comisión de Presupuesto y Hacienda de este Senado.

Otro proyecto que consideramos es el venido en revisión, sobre tributo a los premios de juegos de sorteos y concursos o apuestas deportivas. Sobre esto no creo que haya mucho que hablar. En la Comisión de Presupuesto y Hacienda se hicieron modificaciones que constan en el dictamen impreso en el orden del día 132, que está en las bancas de los señores senadores. Entre ellas, por ejemplo, señalo la del artículo 2º, en el que se resolvió reemplazar la cantidad de diez mil pesos por cincuenta mil. También se ha elevado a cinco mil pesos la cantidad de tres mil que establecía la redacción anterior.

Conviene aclarar que en este proyecto se establece que los premios cuyo derecho a la percepción se hubiera producido antes del 1º de enero de 1974 estarán alcanzados por el impuesto a las ganancias eventuales, con arreglo a las normas de aplicación en esas circunstancias.

Otro de los proyectos que consideramos, señor presidente, está en el orden del día número 129, dividido en dos dictámenes producidos por la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El pri-

mero, en el proyecto de ley en revisión sobre normas complementarias de la reforma tributaria, y el segundo en el proyecto de ley en revisión sobre régimen para la emisión de documentos que instrumenten créditos. Este último dictamen está orientado a perseguir la evasión y castigar al capital negro y especulativo.

En lo que respecta al primer dictamen sobre normas complementarias, hasta ahora el sistema vigente es el de la primera ley de sellos, la número 44, del 13 de septiembre de 1855. Se vincula este gravamen con la existencia de un instrumento en el que se asienta la operación económica que las partes han concretado. Su propio origen histórico ha motivado que muchos especialistas la hayan calificado de arcaica y reñida con la técnica financiera moderna. Yo podría hacer extensos comentarios sobre este proyecto pero, en tren de ahorrar tiempo, sólo diré a los señores senadores que por pedido de nuestro sector se dejó sin efecto, en la comisión del Senado, una disposición que establecía que de acuerdo con el artículo 49 del proyecto debería entrar en vigencia el 1º de enero de 1974 un acuerdo sobre los problemas de la doble imposición, porque esta misma ley crea la necesidad de gestiones entre la Nación y las provincias para celebrar tratados, y evidentemente al 21 de diciembre no podemos pretender que en pocos días más se creen las condiciones de ese entendimiento.

Los artículos 29 y 39 del proyecto están vinculados a la implantación del impuesto al valor agregado y a normas de delegación de la Capital Federal y el territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, adecuando desde ya las normas a efectos de la supresión en esas jurisdicciones del impuesto a las actividades lucrativas, acorde con la suspensión que los Estados provinciales deberán sancionar.

Otra de las leyes que consideramos se refiere al régimen de coparticipación federal de impuestos. Tenemos un sistema vigente a partir del 1º de enero de 1973 que rige el instituido por el decreto 20.221, cuyos aspectos más importantes son: establecer un sistema único para distribuir todos los impuestos nacionales coparticipados, substituyendo a los de las leyes 14.188, 14.390 y 14.060, asignando por partes iguales un 48,5 por ciento a la Nación y al conjunto de todas las provincias, respectivamente.

Las provincias participaron durante los años 1968 a 1972, en el 35,46 por ciento; desde 1964 al 67, en el 40 por ciento, habiendo llegado antes de 1964 al 36 por ciento, como consecuencia del aumento progresivo del 2 por ciento anual iniciado en 1960 con el 30 por ciento. En años anteriores la participación provincial había sido menor del 30 por ciento.

De lo dicho, se desprende que ha dado comienzo algo que pretende ser más justo, más orgánico y más simple.

El resultado que el mismo arroje indicará las modificaciones futuras para introducirlas en los criterios en que se sustenta, fijados por: población, brecha de desarrollo y dispersión de población en los coeficientes de 65, 25 y 10 por ciento respectivamente, a través del Fondo de Desarrollo Regional fijado en el 3 por ciento. Todo ello, para dar lugar, en última instancia, a una mejor redistribución en favor de las zonas menos dotadas.

En este proyecto de ley la modificación que solicitaba el Poder Ejecutivo no altera fundamentalmente el sistema vigente, sino que persigue lógicas adecuaciones formales como consecuencia de las nuevas denominaciones de los tributos. La media sanción de Diputados introduce, con el artículo 39, un artículo nuevo que no coincide con el proyecto de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de esa Cámara. Como ello provocaría el rompimiento del equilibrio buscado, se trata de garantizar a las provincias que para 1975 no pierdan su participación con motivo de la eliminación del impuesto a las ventas y a las actividades lucrativas. La Comisión de Presupuesto del Senado lo modifica, adoptando la redacción con que se expidió la similar comisión de Diputados.

Al no proceder de esta forma, el Poder Ejecutivo podría dar su propia interpretación y hacer coparticipar a las provincias de las recaudaciones que se operen en 1975, correspondientes a ejercicios fiscales de años anteriores.

Interpretamos que esto sirve a un mejor ordenamiento, como lo he dejado expresado. Nosotros hemos dado nuestro voto apoyando esta legislación que creo sirve a esta mejor distribución por sectores del interior de la República.

Otra de las leyes que está en consideración es la referida al capital y al patrimonio. Sobre esto ha hablado con amplio conocimiento el señor miembro informante. Quisiera repetir, porque me parece que me veo obligado a ello, algunas de las modificaciones que como se ha expresado, han sido elaboradas con la colaboración del conjunto de la comisión. Por ejemplo, se redujo a dos años la transitoriedad de diez, del impuesto a los capitales de las sociedades, establecimientos estables y empresas o explotaciones unipersonales del título I de la ley. Se redujo la tasa de los responsables del punto anterior al uno por ciento, en lugar del 1,3 por ciento, y no sería deducible el impuesto a las ganancias como lo establecen los artículos 49 y 79, respectivamente, de esta legislación. También los contribuyentes del mismo título estarán alcanzados por el gravamen cuando el capital exceda los 200 millones de pesos moneda nacional, en lugar de los 50 millones. Creo que esta mejora es un alivio para el contribuyente; además se alientan y crean mejores condiciones en el artículo 69 para

la pequeña y la mediana empresa. El no imponible del punto anterior alcanza a todos los responsables del título y no sólo a los del inciso d) del artículo 29 del proyecto, que son los socios comanditarios y las explotaciones unipersonales. Otra modificación es la de haber reducido del 5 al 2 por ciento del valor total del activo el monto a consignar en concepto de objetos personales y del hogar.

También vale la pena expresar que aquí se ha establecido un agregado al artículo 20 del título III de las disposiciones comunes, que está significando la posibilidad de otorgar reducciones de hasta el 50 por ciento cuando se trata de actividades que por su naturaleza requieren un capital intensivo en forma permanente, es decir que se caracterizan por establecer una renta eventual con relación al impuesto en condiciones de explotación económica eficiente inferior a la normalmente tenida en cuenta en la generalidad de la actividad. Esto se refiere fundamentalmente a la posible evaluación de estas tierras en la producción agropecuaria.

Con respecto a las ganancias, señor presidente, el proyecto de ley en consideración integra en un solo régimen el actual sistema de impuesto a los réditos y al impuesto a las ganancias eventuales. Esta modificación propuesta es producto de la aceptación de una corriente doctrinaria tendiente a unificar y simplificar el sistema de tributación y contralor fiscal. Sin embargo, la simplificación trae aparejadas algunas dificultades que hace necesario tomar precauciones que las minimicen. El proyecto original del Poder Ejecutivo mereció nuestra aprobación en cuanto a su filosofía y a sus aciertos de tipo técnico haciendo del sistema una actitud más ágil. No obstante, consideramos que resultaron imprescindibles las modificaciones que fueron introducidas en nuestra Comisión de Presupuesto. A pesar de ellas, creemos que por falta de tiempo, porque evidentemente la comisión ha puesto su mejor voluntad pero ha trabajado con calendarios un tanto restringidos en cuanto a la labor de analizar todo el paquete de leyes impositivas, lo que no es fácil para hacerlo con absoluta responsabilidad, hemos creído necesario proponer algunas modificaciones. En el artículo 23, por ejemplo, se debería restablecer la eliminada deducción adicional por familia numerosa. Esto lo manifiesto como una expresión de deseos, y por eso he apoyado el dictamen. Tal criterio es alentador, particularmente para aquellos sectores de menores ingresos, con más de dos o tres hijos.

Tampoco nos parece ideal que se haya eliminado la deducción con comprobantes por gastos médicos. Y en el artículo 87 no se considera ese aspecto. Entendemos, por los motivos de orden social ya mencionados, que la atención de la salud familiar es un factor importantísimo para el contribuyente y que, sobre todo en especialidades medicinales de alto costo, no tienen compen-

sación del gasto por parte de las obras sociales y de las mutuales correspondientes.

Pero, fundamentalmente, deseo destacar que la modificación introducida por la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la escala de las tasas constituye el mejor aporte para el éxito de estos proyectos de leyes impositivas que, en conjunto, han sido elevados a nuestra consideración. La interrelación entre todos estos proyectos hacía imprescindibles estas modificaciones para posibilitar su viabilidad y para lograr los objetivos de redistribución del ingreso nacional, premisa indispensable para la paz social.

La política tributaria que atendía solamente el problema aislado del déficit fiscal, además de atentar contra un plan orgánico económico-social, tampoco lograría el objetivo buscado, ya que la presión tributaria excesiva haría imposible su cumplimiento.

Esta es una ley con articulado bastante frondoso, reitero, en la que hemos conseguido también equilibrar un poco las tasas, sobre todo a nivel medio de los contribuyentes. Interpretamos que lo que había votado la Cámara de Diputados marcaba la posibilidad de que por arriba del tope de 17 millones se aplicara la tasa máxima, y a nuestro criterio esto lesionaba posibilidades de un amplio sector de nuestra clase media, que, evidentemente, hace a nuestra responsabilidad legislativa preservar y alentar porque es, junto con los sectores de trabajo, la producción, los empresarios y los profesionales, un motor importante de nuestro proceso de integración argentina.

Por todo ello, y en razón de la responsabilidad que le cabe al Congreso de la Nación en la vida socioeconómica del país, particularmente en el aspecto tributario, la Comisión de Presupuesto y Hacienda ha propuesto estas modificaciones, que crean mayores condiciones de equilibrio.

Otra modificación importante que no llegó a concretarse por razones de tiempo en el seno de la comisión es la correspondiente al artículo 48. Nuestra bancada propuso la aplicación de una medida que posibilita la atenuación de la tasa, para las personas físicas o para las sucesiones indivisas, en el caso de enajenación de un inmueble por no ser ganancia y no constituir una actividad habitual.

Tengo sobre mi banca la escala modificada, que a mi criterio crea condiciones de mayor justicia y equidad, sobre todo en los niveles medios de tributación de las ganancias.

Este proyecto también cuenta con el apoyo de nuestro sector.

En esta sintética exposición sólo me resta referirme al valor agregado, asunto en el que yo he votado en disidencia parcial, no por disentir con la filosofía de la ley sino por entender que las tasas que se establecen pueden crear una peligrosa actitud inflacionaria.

No comparto el optimismo del miembro informante de la comisión, y de un planteo matemá-



tico muy simple surge que este 13 por ciento que hoy va a votar el sector mayoritario puede significar un alto porcentaje de incidencia en algunos consumos importantes. Justamente, como el sistema del valor agregado implica un impuesto a los consumos, debemos tener presentes su alcance y sus efectos.

Este impuesto substituye al impuesto a las ventas, que desde 1949 fue del 8 por ciento y en 1961 pasó al 10 por ciento como tasa general, que alcanzaba a las industrias y a las importaciones. Se gravaban las ventas, con deducción de las materias primas que ya habían pagado el impuesto, a efectos de que incidiera en una sola etapa.

En los últimos años se fueron agregando algunos servicios con una tasa del 3 por ciento, y otros con tasas del 15 y del 20 por ciento. La tasa básica del 10 por ciento rigió hasta mayo de 1972, y pasó a ser del 9 por ciento hasta el 31 de diciembre de ese año, del 8 por ciento para el corriente año, y que por la acción del impuesto de emergencia pasa nuevamente al 12 por ciento. Los asesores del Ministerio de Hacienda en la comisión han hablado de un posible 14 por ciento para 1974, en razón de quedar sin efecto la rebaja de 1972 y por la aplicación del impuesto de emergencia.

También la reforma pretende substituir al impuesto a las actividades lucrativas, que grava los ingresos de todas las etapas del ciclo económico con tasas básicas del 1,2 por ciento en la mayor parte de las provincias y del 1,1 por ciento en la Capital Federal, y con tasas recargadas o rebajadas según se trate de productos que exterioricen una mayor o menor capacidad de absorción.

Todo lo que se pueda decir a favor o en contra de este proyecto relativo al impuesto al valor agregado es válido desde el punto de vista de la doctrina y de la técnica tributaria, pero erraríamos el camino si ignoramos la repercusión que el impuesto va a tener en la economía familiar del mayor número de ciudadanos. Para ello debemos medir lo que se va a gravar, es decir que se imponen las ventas de mercaderías, servicios, obras o importaciones, deduciendo en cada etapa las compras ya gravadas. Todo esto está dicho en forma muy simple y precisa para facilitar nuestro propio entendimiento.

En cuanto a la tasa del 13 por ciento, como dije al comienzo, me parece excesiva. Al respecto valdría la pena recordar que la recaudación del impuesto a las ventas resulta económica y manejable por recaer en pocos contribuyentes, y si se extiende a las actividades mayoristas y minoristas y de servicios y obras, el crecimiento del número de contribuyentes hará que su administración resulte costosa y traiga dificultades tremendas a un propósito fiscalista.

No deberíamos olvidar que el impuesto al valor agregado ganó el terreno desde el punto de vista práctico. Ofrece la posibilidad de solucionar el principal inconveniente que tenía el im-

puesto a las ventas y que era la carga financiera que soportaba el contribuyente industrial. Al distribuirlo en las distintas etapas del ciclo económico resulta que se crearían todos estos nuevos contribuyentes sin lograr aquello que hizo que se buscara el cambio. Si bien se nos ha dicho que este impuesto substituye al impuesto a las actividades lucrativas, las necesidades lógicas y crecientes de las provincias pueden hacer que éstas establezcan nuevos gravámenes al consumo, con otro nombre, como patentes o uno semejante.

Tampoco sabemos qué pasará con otros impuestos municipales que con distinto nombre también recaen sobre las ventas. Si lo manifestado en el párrafo anterior sucediera, estaríamos simplemente agravando el problema que se quiere evitar: suprimir la incidencia simultánea de impuestos nacionales, provinciales y municipales.

Para que ello fuera posible y cierto debería, mos postergar la aprobación de este impuesto al valor agregado hasta haber convenido integralmente la solución buscada.

Si el impuesto fuera aprobado, como parece ser la voluntad de la mayoría, esa aprobación nos merece algunas observaciones. En primer lugar, se repite el problema del actual impuesto a las ventas; o sea, el de no poder deducir la compra de un producto exento. Por lo tanto, el responsable tendría que tributar sobre un impuesto superior a su valor agregado.

En segundo término, como se proyecta la existencia de responsables inscritos y no inscritos, y como estos últimos no pueden facturar el impuesto, eso podría provocar la imposibilidad de deducir dicho impuesto por parte del adquirente.

Como tercera observación, no deberían gravarse los intereses del financiamiento de la compra, como actualmente se hace en el impuesto a las ventas. Eso provocaría que las grandes empresas se beneficiaran a costa de las pequeñas, ya que haría posible que el financiamiento apareciera realizado por terceros, y de esta manera disminuir el imponible. Pienso que tampoco deberá limitar el monto del crédito a computar y que lo hubieren facturado cuando las tasas que gravan las ventas del responsable sean menores que las que gravan al proveedor.

Si bien lleva implícito el autocontrol por parte del contribuyente, todo esto también es cierto que crea serias dificultades con la liquidación y fiscalización del impuesto, ya que lo hace a través de cada una de las facturas de compra y de venta, en lugar del análisis simple tendiente a determinar si se trata de productos gravados o no.

Yo pienso que podríamos postergar la aprobación de esta legislación en consideración a los efectos de la perfección de esta ley, cuya filosofía comparto pero que pienso viene implementada con el peligro de crear repercusiones no útiles a nuestra imaginación en construcción.

Así, muy sintéticamente, dejo expresada esta disidencia parcial con esta ley cuya filosofía comparto —repito— y que, como expresé antes, está incluso en el pensamiento del partido que represento. Sin embargo, considero que a veces deberían crearse las condiciones de implementación para que la ley cumpla fundamental y efectivamente con la idea que queremos ver realizada.

Este es el sentido de las leyes que consideramos, muy sintéticamente expresado. Yo no les voy a tomar más tiempo a los señores senadores expresando más ampliamente nuestro pensamiento. Sólo quiero señalar que vamos a votar con algunas disidencias parciales leyes que yo creo pueden ser herramientas útiles para el proceso de reconstrucción, de cambio y mejoramiento de la economía argentina. No me olvido de que vivimos con empresas nacionales empobrecidas, que debemos vencer la dependencia exterior, que debemos aliviar a la agobiada clase media argentina, que debemos comprender que nuestros trabajadores viven esforzadamente.

Sé que es difícil para los argentinos de hoy financiar idealmente al Estado y financiar condiciones que permitan crear una inversión de buena retribución al servicio del desarrollo argentino.

Yo pienso que nadie podrá afectar su estándar existencial mínimo para pagar un impuesto. Esto hace a la filosofía y a esta vocación de justicia que pretendemos lograr nosotros para el conjunto nacional. Pero también es cierto que llegó la hora en que los que viven con holgura deben pretarse al cinturón.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de este Senado ha producido modificaciones a la media sanción de la Cámara de Diputados con el objeto de perfeccionar el equilibrio social argentino. Estoy seguro de que estas leyes son perfectibles. La experiencia de su aplicación nos puede enseñar a modificarlas. Estoy seguro también de que todos los señores senadores estaremos siempre listos y responsablemente ubicados en estas bancas para crear las condiciones que permitan introducir las modificaciones tendientes a la perfección de esta legislación que le vamos a dar a la República.

La Unión Cívica Radical busca y pretende realizar una mayor justicia entre los argentinos, es un partido que interpreta al país como conjunto. Servimos a todos los sectores, pero queremos que éstos integren la Nación. El radicalismo nació como una requisitoria contra el régimen de la oligarquía dueña de la tierra, del dinero, del poder, que frustró en alguna etapa histórica a las nuevas generaciones incorporadas a la estructura social de la República. El radicalismo creció en esa lucha, ganó y perdió muchas veces pero siempre estuvo contra el privilegio.

Considero que esta tarde, por encima de los defectos de forma, estamos intentando una le-

gislación que lleve un poco más de tranquilidad a los sectores que hasta ahora no la tuvieron. Para nosotros el hombre no puede ser una mercancía sino la idealización de una humanidad argentina que tiene que hacerse y realizarse mediante la salud, la vivienda, la educación, integrando un mundo de libertad para hacer que este país nunca vuelva a atarse al carro de ninguna actitud imperialista de la Tierra. No sacrificaremos el valor de nuestro hombre a la dura ley económica que dictan los almacenes nucleares de las grandes potencias. Por eso votamos esta ley que tiene rumbos de transformación.

La Unión Cívica Radical no dejará que nuestro hombre caiga en la jungla de una sociedad de consumo donde muchas veces lo que aparece como objetivo social es el reflejo de los fines de grandes empresas y de la tecnocracia.

Quiero para mis compatriotas no el conformismo consumidor sino la rebeldía que hace de cada hombre un espíritu argentino actor de una revolución criolla, capaz de fecundar para siempre la paz, la tranquilidad y la vida entre los argentinos.

Esta es la filosofía de nuestro voto. Deben pagar más los que acumularon más. Entre el llanto de muchos y las risas de unos pocos, yo voto esta tarde para que termine el llanto de muchos y se cree el equilibrio substancial que reclama la revolución contemporánea.

Puede ser que mucho debamos corregir todavía. La realidad nacional nos encontrará siempre en estas bancas. Espero que estas leyes, señores senadores, producto de la imaginación patriótica de los legisladores, aunque las tengamos que corregir porque no son perfectas, sirvan para recrear la fraternidad entre los argentinos, reconstruir la igualdad y, definitivamente, mejorar las libertades de todos los argentinos. (Aplausos.)

**Sr. Frugoli.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Allende).** — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

**Sr. Frugoli.** — Señor presidente: esta tarde el Senado de la Nación ha iniciado el tratamiento de un conjunto de proyectos de ley referidos a la materia impositiva que constituye, sin duda, una profunda reforma al sistema tributario. Y unida al llamado impropriamente, a mi juicio, paquete de leyes económicas conforma, diríamos, la política económica del gobierno de la Nación que persigue, sin duda, el logro de determinados objetivos. En la situación histórica actual, los sistemas económicos, cualesquiera sean, persiguen el logro de metas, sobre cuya justicia y necesidad no creo que exista divergencia. Me refiero, por ejemplo, al logro de un crecimiento sostenido de la producción de bienes y servicios, a una redistribución del ingreso que favorezca a los sectores menos do-

tados y también a una absoluta independencia en la toma de decisiones por el país.

El logro de estos objetivos se opera mediante la política fiscal, la política monetaria y, podríamos agregar —aunque la teoría no lo dice—, la política de ingresos. No lo dice la teoría por la razón de que la política de ingresos depende en cierto modo de cómo se instrumente la política monetaria y la política fiscal. Dentro de esta última juegan el sistema tributario, el presupuesto, los tipos de cambio, los precios máximos y otros instrumentos.

Considero que de acuerdo con lo que acabamos de señalar el sistema tributario es uno y nada más que uno, de los instrumentos aptos para el logro de esos altos fines de política económica que he indicado.

De allí que tenga que repetir lo que expresé en ocasión de tratarse el proyecto de aumento general de sueldos de 200 pesos, en el sentido de que todos estos proyectos de ley de carácter económico e impositivo tienen que insertarse en una estrategia económica global, que es una suerte de telón de fondo sobre el cual deben recortarse.

Debemos incorporar un elemento fundamental al análisis, que es el presupuesto. Los mecanismos monetarios y fiscales en una estrategia global juegan un papel más equilibrado en la eficiente asignación de los recursos, lo que implica una mejor captación de los problemas y una adecuada solución a los mismos. De esta manera se logrará una mejor implementación de la política económica.

Es necesario que exista, indudablemente, un equilibrio entre la presión tributaria y el financiamiento del Banco Central, con el mínimo de presiones inflacionarias y, fundamentalmente, que el aumento de la recaudación sea consecuencia de un aumento substancial del producto bruto. Yo deploro que ese análisis integral no lo hayamos podido realizar.

Esta tarde el señor presidente de la Nación, en un discurso dirigido a todo el pueblo del país, ha anunciado el lanzamiento de un plan trienal que, según sus propias manifestaciones, va más allá del aspecto puramente económico para encarar directamente todos los problemas que el gobierno debe enfrentar, y para lograr, de este modo, un desarrollo pleno de todas las posibilidades espirituales y materiales del país, y al decir «del país» me refiero a su destinatario, que es el hombre argentino.

El análisis de los proyectos de leyes impositivas también exige un enfoque global, para determinar si los objetivos que se persiguen con la reforma tributaria se logran o no en la realidad de los hechos.

En esta materia hay consideraciones de carácter técnico y jurídico que formular. Yo voy a omitir las técnicas, en primer lugar porque no soy un especialista en el tema y, por otra parte, porque se ha hecho aquí, por parte de los señores

senadores que me han precedido en el uso de la palabra, un minucioso examen de este aspecto. Igualmente, voy a soslayar el análisis detallado de los proyectos desde el punto de vista jurídico, e incluso desde el de su instrumentación legislativa, para ir directamente a la consideración de lo que yo estimo fundamental, esencial, y determinar sobre la base de esa consideración si los objetivos que se pretende alcanzar con la reforma tributaria realmente se logran y, además, si a través de esta reforma tributaria servimos a la obtención de aquellos objetivos fundamentales de la política económica del gobierno.

De acuerdo con declaraciones públicas formuladas por el señor secretario de Hacienda, la reforma impositiva busca primordialmente tres objetivos que, según consta en un informe de prensa dado a publicidad por el Ministerio de Economía, son los siguientes: primero, la redistribución del ingreso nacional en beneficio de las clases menos dotadas; segundo, dotar al régimen de la mayor simplicidad posible en sus normas, y tercero —se ha aludido en varias partes de los mensajes del Poder Ejecutivo—, combatir la evasión fiscal.

En lo que se refiere al primero de los objetivos señalados, que sería el de la simplicidad, aunque parezca quizá superfluo, creo que es muy conveniente ponerse un poco de acuerdo sobre el valor de las palabras. Simplificar significa hacer las cosas más sencillas, más fáciles, menos complicadas. Y considero que, desde cierto punto de vista, la simplificación que se ha logrado es óptima, en cuanto se han suprimido directamente algunos impuestos.

Pero, evidentemente, desde otro punto de vista la simplificación no es tal, porque indudablemente nadie podrá decir que el impuesto al valor agregado simplifica un sistema tributario, sin entrar a analizar la filosofía de la que el mismo está imbuido, con el agregado, por otra parte, de que en el país se viene hablando desde hace muchos años de establecer el impuesto al valor agregado. Así mismo, se restablece el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, es decir, el impuesto a la herencia, y se crea un registro de documentos de crédito que permita conocer con exactitud a las personas intervinientes en la relación contractual. Además se mantiene la complicación que significa el impuesto al patrimonio neto, que es absorbido por el proyecto de ley de capitales y de patrimonio, y que configura el título II del mismo.

Es decir, señor presidente, que esta idea de la simplicidad hay que tomarla un poco con pinzas, lo que yo comprendo, porque aquí de alguna manera entrarían en conflicto dos objetivos: el de la simplicidad y el de la evasión fiscal. Porque todos estos mecanismos que se crean, o por lo menos una gran parte de ellos, tienden a combatir la evasión fiscal. De allí que

con respecto a este tema adopte una actitud de prudencia y diga que así como el movimiento se demuestra andando, la simplicidad del sistema habrá que demostrarla a medida que empieza a funcionar esta reforma.

Pero aún hay que analizar este tema de la simplicidad desde otro punto de vista, que es el del contribuyente. Y en esta materia considero que no hay absolutamente ninguna simplificación. La determinación del impuesto sigue siendo muy difícil para el contribuyente, que deberá recurrir necesariamente al asesoramiento técnico para poderlo liquidar, dejando subsistente en esta forma el problema tan debatido en congresos de derecho financiero y en mesas redondas, en las que participan expertos en sistemas impositivos, del alto costo que tiene la liquidación del impuesto, lo que de alguna manera vendría a gravitar aún más sobre la presión fiscal o tributaria.

Y en este sentido —y abreviando al máximo, porque éste es un terreno difícil y en cierta forma árido— no puedo resistir la tentación de leer una página de Luigi Einaudi, que como todo el mundo sabe, es uno de los autores de mayor prestigio en la materia, y que junto con Due y Jarach son prácticamente de lectura obligada en las facultades de ciencias económicas en materia tributaria.

Einaudi une a sus calidades intelectuales el éxito en la función de gobierno, de modo que sus palabras tienen el doble valor de la jerarquía intelectual y además el del sentido práctico en cuanto a la aplicación de medidas de gobierno.

Dice Einaudi —hago esto pensando en el contribuyente—: «Un impuesto no es moderno, no siente los tiempos nuevos de la moda universal, si no está ideado de manera que haga llenar al contribuyente formularios extensos, que le haga correr en todo momento el riesgo de tener que pagar alguna multa, que le haga desgraciada la vida con pequeñas molestias y con la privación de las comodidades que él se ha buscado tras larga experiencia y que no perjudican a nadie. Entre exigir 15 sin molestias, por medio de una simple retención, no entrando en los secretos de la vida de nadie, y exigir cinco, y acaso menos, a cambio de molestias indecibles, la elección no es dudosa. El justiciero doctrinario prefiere los 5. El objeto del impuesto no es —en este caso— procurar fondos al erario, sino causar molestias al contribuyente. Si éste ofrece 15 con tal de que lo dejen en paz, hay gato encerrado. ¿Por qué no quiere que le conozcamos sus asuntos, todos sus asuntos?».

Al hablar de la simplificación del sistema creo que hay que hacerlo no sólo con respecto a las cinco grandes leyes que significan la mayor tributación, sino sobre todo el sistema impositivo argentino y en las tres jurisdicciones: la nacional, la provincial y la municipal, donde

—y los señores senadores lo saben— existen evidentes casos de superposición, particularmente con respecto al impuesto a las ventas.

El otro objetivo, muy importante por cierto, y que ha sido motivo de honda preocupación en esta Cámara y es permanente motivo de preocupación de todos los gobiernos, es el de la evasión fiscal. Hace pocos días en este recinto se ha discutido un proyecto de ley que fija penas serias y severas para quienes cayeren en la evasión fiscal. En un debate caracterizado por su jerarquía, en el que se mencionó desde la definición de justicia de Aristóteles, perfeccionada por Santo Tomás, hasta la opinión de tratadistas como Giuliani Fonrouge, Dino Jarach, Soler y otros, y donde se consideró si debía ser incluida la nueva figura penal en el código o si, por el contrario, ser objeto de tratamiento especial, se habló del problema de la represión fiscal en relación con penas.

Pues bien, considero que más que con el Código Penal el problema de la evasión está vinculado con algunos principios básicos que se refieren a la administración tributaria y que tienen relación directa con la estructura legal del sistema y de la administración de los impuestos.

Indudablemente, no necesito decir a los señores senadores lo que todos conocen: que los principios consagrados por la doctrina en cuanto a la certeza, justicia y economicidad de los impuestos siguen teniendo plena vigencia. Es necesario que las leyes definan con claridad el hecho imponible, determinen cuáles son los sujetos de la relación tributaria, establezcan una posibilidad sencilla de liquidación. Todo esto sí es una contribución importante para evitar la evasión fiscal.

Por otra parte, no podemos olvidar de ninguna manera que en el país ya ha habido experiencia en esta materia. La ley que regula el procedimiento tributario sancionada, si mal no recuerdo, en el año 1932, establecía en el artículo 45 que: «Incurrirán en defraudación fiscal y serán pasibles de multas de uno hasta diez veces el impuesto en que se defraudó al fisco o se haya pretendido defraudarlo, sin perjuicio de la responsabilidad criminal por delitos comunes, los contribuyentes, responsables y terceros que realicen cualquier hecho, aserción, omisión, simulación, ocultación o maniobra que tenga por objeto producir o facilitar la evasión total o parcial de los tributos. Serán reprimidos con igual multa y, además, con prisión de un mes a seis años, los agentes de retención, etcétera».

Esto se venía diciendo desde el año 1932 y, sin embargo, la evasión no logró ser disminuida; evasión que según cifras que dio en el debate uno de los señores senadores, ha llegado en el último año para el impuesto a los réditos a más del 63 %.

Creo que en esta materia se puede aplicar un criterio similar al que rige en materia penal con respecto a determinados delitos. Está pro-

bado que la magnitud de las penas, concretamente, que la pena de muerte no es útil para evitar la comisión de determinados delitos. Lo que sí es útil, es la seguridad de la pena y la rapidez de la administración de justicia. Por eso yo creo que en el ánimo de un contribuyente más que esta legislación represiva pesa la convicción de que una computadora puede detectarlo y citarlo, porque esto sí es concreto y lo va a afectar directamente y con rapidez en lo que más le duele, que es su patrimonio.

Las causas de la evasión fiscal, en síntesis, son múltiples. Están, indudablemente, vinculadas —como he dicho— con la complejidad del sistema, con la magnitud de la tasa, con el proceso inflacionario y, también —y esto es muy importante señalarlo—, con el destino que el Estado le dé al impuesto. Cuando el contribuyente piensa que el impuesto va para gastos de administración central, para afrontar el déficit de empresas estatales que no funcionan convenientemente, o para la atención de los ingentes gastos que demandan aparatos burocráticos enormes, elefantiásicos, indudablemente la tentación de la evasión es muy grande. Y cuando la presión tributaria va más allá de ciertos límites la evasión fiscal es una alternativa de hierro, porque como dicen muchos comerciantes: «si pago los impuestos tengo que bajar la cortina. En consecuencia, no los pago y que suceda lo que Dios quiera».

Quiero decir esto, porque me parece interesante puntualizarlo, por cuanto advierto quizá un exceso de optimismo en algunas expresiones del Poder Ejecutivo, en el sentido de que se va a resolver con cierta facilidad la evasión fiscal.

El Poder Ejecutivo en uno de los mensajes —en este momento no lo tengo en mi banca— señala que las medidas que se han tomado y que fueron expuestas por el señor miembro informante, más las rebajas en las tasas, van a ser decisivas con respecto a la evasión fiscal. Reitero que yo tengo mis dudas porque —repito— acá el problema de las tasas, lo vamos a ver en seguida, no está muy claro y, además pienso, como he dicho, que está vinculado con otros problemas que quizá no los contemple de manera integral la reforma que estamos considerando.

Tenemos que analizar ahora el tercer objetivo, que es el de la redistribución del ingreso en beneficio de las clases menos dotadas. Este es un objetivo fundamentalísimo, como que es uno de los que persigue, como he dicho al principio, toda política económica con sensibilidad social, sentido y conciencia histórica.

A los efectos de poder analizar con criterio práctico si esto realmente se logra o no, yo he hecho unas cuentas muy sencillas, en base a la sanción de Diputados, las que, desgraciadamente, a raíz del mínimo tiempo de que hemos dispuesto para el análisis de los dictámenes de comisión, que han llegado a mi poder hace

prácticamente unos minutos, no he podido actualizar, porque, repito, me he enterado prácticamente hace instantes de algunas reformas introducidas por la comisión, como, por ejemplo, la reducción de la tasa del impuesto al patrimonio del 1,3 al 1 por ciento, y del aumento de los escalones del ingreso en las escalas progresivas. Pero de todas formas creo que los cálculos que he hecho tienen alguna validez.

He confeccionado una planilla para determinar la presión tributaria, en la que se menciona la tasa del impuesto resultante sobre la utilidad bruta y el porcentaje de rendimiento del capital después del impuesto. He calculado distintos capitales con tasas de ganancia bruta variable, que en alguna medida he elevado un poco.

Dado que la comisión ha modificado los escalones —reforma que yo aplaudo— para un capital de dos millones de pesos, yo referiré el porcentaje de mi planilla correspondiente a la utilidad líquida de la escala anterior, es decir, a un capital de un millón de pesos. Y así ocurre que un capital de dos millones de pesos que obtenga una ganancia del diez por ciento, es decir, de doscientos mil pesos, para un patrimonio con dos hijos, resulta un impuesto a las ganancias que, agregado al de emergencia, significa un porcentaje sobre la utilidad bruta del 23,5 por ciento. Evidentemente es alto, y esto va aumentando, como saben los señores senadores, a medida que crecen las ganancias. Y en cuanto al rendimiento sobre el capital después de pagado el impuesto equivale a un 7,7 por ciento. Supongamos, dadas las reformas que recién conocemos, que haya una pequeña variación: que en lugar del siete sea el ocho o el nueve por ciento. Indudablemente no es un rendimiento satisfactorio, no porque se tenga un desmedido afán de ganancias sino porque están jugando factores reales que no podemos desconocer.

Si los títulos públicos exentos de gravámenes dan una renta mucho más alta, si incluso el depósito en la Caja de Ahorro significa una tasa más alta, yo pienso que indudablemente esos porcentajes representan una importante carga tributaria sobre el contribuyente, que lo lleva a deprimir las inversiones.

En el impuesto al patrimonio tengo que celebrar que la comisión haya reducido la tasa del 1,3 por ciento al 1 por ciento. Aparentemente la tasa del 1 por ciento es más baja, pero lo es en relación con el capital. Pero no ocurre lo mismo en relación con las utilidades, porque para un capital, por ejemplo, de dos millones de pesos, que obtiene 200.000 pesos de utilidad, significa el 10 por ciento de la ganancia; si tiene el 15, significa el 6 por ciento, y si tiene el 20, significa el 5 por ciento. Considero que esto es alto, y significa mayor presión tributaria. Además, tengo que señalar que la reforma introducida en cuanto al aumento



de los escalones del ingreso es positiva, pero esa ventaja desaparece cuando se establece que el impuesto al patrimonio no es deducible como gasto para el cálculo del impuesto a las ganancias que, entiendo, es una de las modificaciones que ha introducido la comisión. Sin duda, la modificación de los escalones hubiera sido más beneficiosa si no se hubiera hecho este agregado al artículo 69 de la ley.

En cuanto se refiere al problema del impuesto al valor agregado, yo debo decir que desde el punto de vista técnico tiene sus ventajas, que fueran expuestas reiteradamente por la doctrina y por especialistas en la materia. Fundamentalmente elimina el efecto de piramidación que existe, y es evidente en el impuesto a las ventas que actualmente rige y alivia la carga financiera a la etapa industrial.

Yo también he confeccionado, con respecto al impuesto al valor agregado, una planilla para hacer algunas comparaciones. La que me parece más importante es la del impuesto a las ventas con una tasa del 14 por ciento —que es la que va a regir en 1974—, con la tasa del 13 por ciento que será la del impuesto al valor agregado cuando la ley entre en vigencia, en 1975.

En ese sentido quiero manifestar que no estoy de acuerdo con la sanción de este impuesto. No porque me oponga al impuesto en sí, sino porque no encuentro razón suficiente para sancionar ahora un impuesto que se va a aplicar en 1975, con el agravante de que se fija una tasa del 13 por ciento para el impuesto que va a regir en aquel año.

Si se quería urgir la implementación de este impuesto, por lo menos no se hubiera fijado la tasa. Porque, indudablemente, habrá que seguir todo el proceso de la economía argentina a lo largo del año 1974 —en el que todos tenemos el ferviente deseo y la esperanza de que las cosas sigan con el buen rumbo que llevan, por ejemplo con respecto a la estabilidad de precios—, pero habrá que saber qué significa la aplicación de una tasa del 14 por ciento del impuesto a las ventas durante el año 1974.

Si el justificativo para la sanción de esta ley es que la Dirección General Impositiva, o el organismo administrativo encargado de la aplicación y administración del impuesto, no está en condiciones de afrontarlo —lo que sería perfectamente comprensible—, creo que la lógica hubiera sido diferir el tratamiento de este proyecto de ley y, mientras tanto, sancionar una ley encarando el problema de la reorganización del organismo administrativo con vistas a la aplicación de este impuesto. Pero sancionar la ley ahora y fijar una tasa para el año 1975, no lo entiendo.

El cálculo que yo he formulado, en base al 14 por ciento del impuesto a las ventas, se ubica en la etapa industrial. Porque como todos los señores senadores saben, el impuesto a las

ventas se aplica nada más que en la etapa de transformación; no comprende la etapa de comercialización, a diferencia de lo que ocurre con el valor agregado, que incorpora dos etapas más, es decir que aumenta la base imponible.

En este caso partimos del supuesto de una industria con dos bocas de imposición. En la primera sobre 1.800 pesos, al 14 por ciento ya se ha pagado 152 pesos. Luego, en la segunda boca, hay que sumarle al costo de los insumos, incluido el impuesto pagado, el valor agregado, lo que da un determinado resultado sobre el cual se aplica el 14 por ciento, y restar lo pagado en la etapa anterior. Como conclusión, el producto, pasando por el mayorista y el minorista, llega a la venta al público a 5.034 pesos. El efecto piramidación llega a 239 pesos, porque se ha cargado impuesto sobre impuesto, y ganancia sobre impuesto. Dicho de otra manera, el precio que se traslada al público es mayor que lo que percibe el Estado. Evidentemente, el impuesto al valor agregado elimina este fenómeno.

Con el impuesto al valor agregado incorporando el impuesto a las otras dos etapas del comercio mayorista y minorista, el mismo ejemplo da un precio de venta al público de 5.299 pesos. Es decir que aun con una tasa nominalmente menor, el resultado es mayor. En resumen, significa un aumento del 6 por ciento, aproximadamente, y si le disminuimos el uno por ciento, ya que el impuesto a las actividades lucrativas en la Capital Federal tiene como tasa básica el once por mil, nos queda un 5 por ciento, que es un aumento importante. Esto es grave, porque el impuesto al valor agregado, que es un impuesto directo, totalmente transmisible al consumo, conspira decisivamente contra la buena política de estabilidad en que está empeñado el gobierno nacional. Además pone en peligro el logro del objetivo de redistribución progresiva del ingreso. De allí que aparte de las objeciones que he formulado con respecto a la ocasión en que se sanciona el impuesto, yo añado estas otras referencias que acabo de formular.

Además en este impuesto al valor agregado se han incorporado al gravamen servicios y actividades, y se aumenta la tasa para algunos servicios. Eso sin duda también conspira contra los sectores de menores ingresos. Hay que tener en cuenta que si bien algunos artículos de la canasta familiar están exentos, hay muchos otros de menaje y vestido, que de acuerdo con la planilla anexa al artículo correspondiente no están exentos del gravamen.

Por otra parte, a pesar de enunciarlo como propósito y razón de ser —entre otras— de este impuesto, no se disminuye el costo financiero, distribuyéndolo en las distintas etapas. Repito que una de las críticas que se formulaban al impuesto a las ventas era que el costo financiero caía fundamentalmente sobre la etapa industrial, que generalmente vende a plazos. Pero ocurre que acá el problema no se resuelve, por-

que la tasa que se fija es exactamente la misma para todas las etapas, de modo que no hay tal solución del problema.

No quisiera extenderme en este tema porque es árido y hace mucho rato que estoy en él. Pero quiero decir, y voy a ser sintético y hasta telegráfico, que de este sencillo pero concreto y realista análisis que he hecho surge como conclusión que hay indudablemente un aumento de la presión tributaria. Luego demostraré que, sin ser muy suspicaces, podemos llegar también a la conclusión de que la filosofía de toda la reforma parecería ser la de deprimir la inversión privada en beneficio de la inversión pública.

Ahora quiero hacer una muy breve referencia al problema que se plantea con respecto a los títulos valores. Es indudable que existe un trato discriminatorio con respecto a los títulos valores privados y a los títulos públicos. Los primeros son nominativos, lo que me parece muy bien, porque no era posible que siguieran evadiendo el impuesto contribuyentes con posibilidades financieras muy grandes. Pero tampoco dichos títulos son endosables, y además soportan el gravamen, del cual están exentos los títulos públicos. Estos además tienen una tasa fija y circulan como valores al portador, lo que significa que las inversiones que se realicen en títulos privados han de ser prácticamente nulas, con su consecuencia negativa sobre la capitalización de las empresas y su expansión.

Considero que lo que aquí hay que criticar no son las medidas tomadas con respecto a las acciones, sino el trato discriminatorio entre unos y otros títulos. Creo que hay que establecer condiciones de competencia leal en el mercado de valores entre el título o valor privado y el título público, porque creo que correremos el riesgo de que en esta materia desaparezca prácticamente el mercado de valores. He oído decir que la nominatividad de las acciones no ha perjudicado a la bolsa de Nueva York. Esto es cierto, pero hay que agregar que en los Estados Unidos los títulos son endosables y circulan con facilidad.

De manera que en esta materia habría sido muy importante que la comisión contemplara la posibilidad de encarar una situación igualitaria entre unos títulos y los otros.

Considero necesario señalar algo que entiendo muy importante con respecto a la ley de ganancias. Se refiere al problema de los inmuebles. Con una gran esperanza en la receptividad de la comisión, me voy a permitir proponer una reforma al artículo 57. Pero antes de hacerlo quiero fundamentar este pedido de reforma, que no es caprichoso. Pido que se me permita la lectura, aunque ésta sea un poco larga, de un texto donde se expresa la opinión y qué es lo que se enseña en la cátedra de impuestos sobre ganancias eventuales en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires.

«Existen algunos beneficios que no caben estrictamente en la definición de habitualidad que

damos de rédito. A estos beneficios se los conoce con el nombre de ganancias de capital. El rédito tiene las siguientes características: primero, es producto de una fuente permanente; segundo, es periódico; tercero, requiere la habilitación de la fuente. Si se gana un premio de lotería, si se obtiene una utilidad en la venta de un bien inmueble, no habiendo habitualidad, es evidente que se alcanza un mayor bienestar. En consecuencia, se genera una mayor capacidad contributiva, en la misma forma como se genera cuando se ganan honorarios o réditos. Sin embargo, a este tipo de beneficios les faltan alguno o algunos de los atributos que señalamos precedentemente. En primer lugar, dijimos que en su esencia el rédito es el fruto y la fuente es lo que lo genera, lo que permanece; en cambio, en este tipo de beneficios a que ahora nos referimos generalmente la fuente no permanece, porque, precisamente, su enajenación es lo que produce el beneficio. En segundo lugar, generalmente no son beneficios periódicos sino que se producen en forma esporádica, imprevista, accidental. En tercer lugar, aunque a veces la fuente no desaparece el beneficio no aparece en forma de fruto, independiente de la fuente, sino que está indisolublemente unido a ella. En cuarto lugar, se producen sin una actividad del contribuyente que habilite la fuente, sino por hechos externos ajenos a él.»

No necesito decir cuál es el hecho externo ajeno a él que juega en la República Argentina, o que jugaba hasta hace muy pocos meses.

«El no tomar en cuenta el beneficio acumulado por el mayor valor de los bienes a través del tiempo, y ceñirse al criterio de realización, es lo que hace inaplicable el impuesto a los réditos a este tipo de beneficios. Dejarían de ser ganancias de capital si se “realizaran” periódicamente; o sea, el conocido concepto de “habitualidad” o “profesión habitual”. El tipo de ganancia y, en consecuencia, el tipo de impuesto aplicable no dependen de los bienes que constituyen el objeto de las transacciones sino de la forma como se produce el beneficio. Por eso se encuentra, de pronto, con un tipo de beneficios de excepción, que no constituyen un flujo de renta, y se ve en la obligación de marginarlos del impuesto a los réditos; y se ve en la obligación de marginarlos principalmente por la inequidad que significaría aplicar a este tipo de beneficios las tasas progresivas. Al lado de ese argumento fundamental y relevante se afirma, además, que no es adecuado gravar con el impuesto a los réditos este tipo de utilidad en razón de que la capacidad contributiva que genera es menor por su propia accidentalidad y porque los fondos que se obtienen por esta vía no se destinan generalmente a la producción de réditos habituales sino a cierto tipo de inmobilizaciones. Otros autores consideran que este tipo de beneficios genera mayor capacidad contributiva que los réditos, porque generalmente los obtienen contribuyentes que están en una escala

superior de ingresos. De manera que en este punto cabe la discusión.

»Descartada la posibilidad, por parte de casi todas las legislaciones, de tratar impositivamente en igual forma a los réditos y a las ganancias de capital, por las dificultades que acabamos de señalar —entre las que resalta el peso de la tasa progresiva—, en doctrinas se conocen tres posiciones: 1) no debe aplicarse gravamen alguno a las ganancias de capital; 2) deben ser gravadas con un trato preferencial, al margen del impuesto a los réditos; 3) deben ser incluidas en el del régimen del impuesto a los réditos, pero con un cierto ajuste.

»El primer temperamento es rechazado por casi todas las legislaciones positivas. Se sostiene por cierto sector de la doctrina que la ganancia de capital no genera bienestar, no genera capacidad contributiva. Además, se dice que el impuesto tiende a inmovilizar las inversiones. Sin embargo, los países que no tienen una legislación especial para este tipo de beneficios van incorporando al régimen del impuesto a los réditos las ganancias de capital.

»La segunda posición es la de los países que consideran que la ganancia de capital comporta incremento de capacidad contributiva, pero que debe tratarse en forma diferencial de réditos, para obviar los inconvenientes que hemos señalado. Entre esos países se encuentra la República Argentina, que ha sancionado el impuesto a las ganancias eventuales, a partir de 1946. Sin embargo, como ya dijimos anteriormente —ver punto 5.17—, numerosos beneficios que constituyen ganancias de capital han sido incorporados al régimen de la ley del impuesto a los réditos.

»El tercer temperamento es el de los países que propician la incorporación de estos beneficios al régimen del impuesto a los réditos, pero con ciertos ajustes según el tiempo de tenencia transcurrido.»

Yo pido disculpas a la Cámara por esta larga lectura, pero quería señalar que solicito este reemplazo del artículo 57 no por capricho, sino sobre la base de una posición doctrinaria que tiene el aval de la cátedra de la materia en la Facultad de Ciencias Económicas.

Propongo el reemplazo del artículo 57 por el siguiente: «En los casos de inmuebles, sobre el costo computable determinado de acuerdo con las normas del artículo 55, se aplicará el índice de actualización referido a la fecha de adquisición o construcción, según la tabla elaborada por la Dirección General Impositiva para el último trimestre calendario vencido a la fecha de la enajenación».

En síntesis, creo que lo que se solicita está abonado suficientemente por la doctrina y por una posición ecuaníme; es decir, no se está en ninguna de las posiciones que podrían considerarse extremas.

Para no hacer muy extensa la exposición, voy a resumir —sobre la base de estos cuadros que he hecho conocer fragmentariamente a los señores senadores— las conclusiones. Reitero que la manera de tratar estos proyectos decidida por la mayoría me ha impedido ser exacto en algunas cifras de dichos cuadros, lo que en verdad no tiene mucha importancia, porque lo que cuenta es el argumento, que vale tanto para una cifra como para otra, como puede verse fácilmente.

Pienso que, en general, esta reforma tributaria va a ser contraproducente con respecto al desarrollo del país. En esta materia lamento profundamente disentir con los señores senadores preopinantes y digo con toda sencillez y sinceridad que deseo fervorosamente estar equivocado y que los hechos me demuestren que ellos tenían la absoluta razón. Descuento que los sentimientos que nos animan a todos son generosos y elevados; no necesito decir que ninguno de nosotros defiende privilegios ni quiere que se acumulen las injusticias; que todos estamos animados del mismo propósito de redistribución progresiva del ingreso; que no queremos que en la Argentina haya sectores marginados o sumergidos; que nos duele el sufrimiento del Norte argentino, que nos avergüenza el índice de mortalidad infantil en una provincia como la mía, de la que me siento orgulloso, que en algunas zonas llega al treinta y cinco por mil; que necesitamos un sistema hospitalario distinto y una educación que facilite el acceso a la cultura de todos los sectores.

Indudablemente, para realizar esa tarea el Estado debe contar con los fondos necesarios. Sería muy cómodo para mí hacer una severa crítica sobre esto y después exigirle al gobierno que cumpla con algunas medidas de bienestar social.

No es ése el espíritu. Estamos discutiendo cuestiones instrumentales, caminos para llegar a un resultado. Y en donde yo me permito modestamente —lleno de temores porque, repito, no soy un experto en la materia— disentir con los señores senadores del bloque de la mayoría y del radicalismo es con respecto a la instrumentación de esta política tributaria en relación con los objetivos generosos que todos, desde nuestras respectivas posiciones, perseguimos.

He hecho esta aclaración, que creo es innecesaria porque estimo que el trabajo fecundo, armonioso y constructivo que se realiza en esta Cámara es posible porque tenemos un grado de madurez política muy grande, porque hemos aprendido sobre el dolor, las frustraciones y los errores del pasado —que todos hemos cometido, en mayor o menor medida—, y también porque aquí, en esta Cámara, todos partimos del hecho de que no hay un solo senador que responda a otro interés que no sea el colectivo ni a otras convicciones que no sean las de su propia conciencia, imbuída de un profundo sentido nacional.

Creo y reitero que va a ser negativa esta reforma tributaria. Evidentemente, va a haber

una gran transferencia de fondos del sector privado al sector público, lo que va a posibilitar una tasa de inversión pública elevada, en detrimento de la inversión privada.

A mí me preocupa que se piense que la inversión pública puede substituir a la privada. Creo que en el corto plazo la inversión pública puede lograr objetivos como mantener el nivel de la actividad económica, aumentar la demanda global, evitar la desocupación; pero esto será en el corto plazo. En el largo plazo empezarán a sentirse notablemente los efectos recesivos de una economía cuyos mecanismos fundamentales no funcionan, entre ellos la iniciativa privada.

Creo que las declaraciones del señor secretario de Hacienda en esa materia no son tranquilizadoras.

En un reportaje publicado en el diario «La Razón» del 6 de diciembre de 1973 figura lo siguiente: «Concluyo la exposición diciendo que los estímulos a la inversión se otorgarán por leyes especiales que contemplen selectivamente las necesidades prioritarias, tanto en lo que respecta a sectores de la producción como a regiones del país . . . etcétera».

Esta es una confesión clara de que la inversión privada va a deprimirse con el régimen tributario. Esto resulta de aplicar una lógica muy elemental. Pero ocurre que yo considero que en un sistema de economía mixta, como es el nuestro, no es ése el papel que debe tener una reforma del sistema tributario, no es el papel que le corresponde al Estado.

Yo entiendo que el Estado, a través de un plan global, orienta la inversión, emplea algunos mecanismos financieros para canalizarla hacia un sector en detrimento de otro, pero deja siempre la posibilidad de que la inversión privada se oriente hacia aquellos sectores que considera más importantes. Y en esto juegan todos los mecanismos económicos que conocen sobradamente los señores senadores.

De allí que yo reitere que es preocupante que de esta manera se pretenda deprimir a la inversión privada. Ocurrirá en el campo industrial que no habrá expansión; no se instalarán nuevas empresas; no habrá una modernización o reemplazo de todo el utillaje industrial; habrá, evidentemente, un franco deterioro en los equipos de producción, y todo eso se traducirá en la ineficacia del funcionamiento de todo el aparato económico del país.

De esta manera va a resultar muy difícil lograr algunos de los objetivos que hemos mencionado. Indudablemente, cuando la tasa de utilidad sobre el capital, como hemos visto, es tan baja, ¿qué empresario va a invertir en una empresa, con todos los problemas que encierra una tarea de este tipo, para obtener un rendimiento del 7 o el 8 por ciento, en el mejor de los casos, si colocando el dinero en títulos públicos obtiene mucho más y en forma más segura? Entiendo que la última emisión de títulos públicos fue

cubierta totalmente y cuadruplicada. Y éste es un síntoma concreto de que está ocurriendo lo que yo señalo.

No voy a extenderme más sobre el tema, pero entiendo que con este sistema vamos a llegar a perjudicar notablemente a las empresas de capital nacional, y en el país van a subsistir solamente las de capital extranjero y las estatales. ¿Y por qué las de capital extranjero, señor presidente? Porque generalmente tienen un giro muy grande y una gran capacidad de financiación y, además, pueden trabajar mucho tiempo con una bajísima rentabilidad. Pero, ¿qué va a pasar con las empresas argentinas? Yo no creo realmente que la pequeña y mediana empresa se vean favorecidas, y entiendo que la gran empresa tampoco. Considero que en este proceso, como ha sido señalado claramente a través de distintas expresiones del gobierno, desde la más encumbrada para abajo, necesitamos el aporte de todas las empresas, ya sean pequeñas, medianas, grandes e inclusive de aquellas de capital extranjero. Le he oído decir con complacencia al señor presidente de la Nación, en el día de la fecha, que se han fijado reglas de juego muy claras para las inversiones extranjeras y que, lógicamente, el poder de decisión con respecto a las áreas en las que invertirán es del Estado.

Esto significa, señor presidente, que necesitamos el aporte de las empresas; que no podemos actuar con el prejuicio de que una empresa por el hecho de ser grande es mala, y menos aún con el prejuicio de que la ganancia también es mala, porque entonces estamos negando las bases mismas del sistema económico.

No creo que sea el propósito de este gobierno —y la conferencia del señor presidente me lo confirma— el ir substituyendo gradualmente a la actividad privada por parte del Estado en todos los sectores de la economía. ¿Pero qué va a ocurrir con esta reforma? El Estado, si bien hará obras de infraestructura y de energía, no va a poder suplir a la iniciativa privada en la producción de todos los otros bienes que hacen posible y justifican precisamente la inversión en infraestructura, en puentes, caminos, puertos, energía, etcétera.

Considero que esto evidentemente nos tiene que llevar un poco a la reflexión. Y para cumplir con mi palabra de que no seré más extenso, quiero referirme finalmente a un sector que es, en mi modesta opinión, el más perjudicado: el agropecuario.

Todos los señores senadores saben que el gobierno suscribió con las entidades agropecuarias un Acta de Compromiso por una política concertada, que en el punto 4, inciso d), referido a la política impositiva dice así: «La política impositiva, atendiendo a la justicia, se orientará con el fin de ser un estímulo de la producción. A ese efecto, el impuesto a los réditos sobre la base de la renta normal potencial de la tierra será el instrumento idóneo que permitirá trans-

ferir la presión impositiva actual sobre los productos al capital tierra, en función de su capacidad potencial de producción, y eliminar en la medida de lo posible los impuestos que pesan actualmente sobre la producción. El impuesto a la renta potencial comenzará a aplicarse cuanto antes, y no después del 1º de enero de 1975». Antes de continuar la lectura, voy a hacer una breve digresión. Creo que perjudica notablemente al sector agropecuario el hecho de que el impuesto a la ganancia se vaya a calcular sobre la renta neta potencial de la tierra. Esto me parece que es superponer impuestos, es decir, aumentar aún más la presión tributaria sobre el productor agrario. «El Poder Ejecutivo promoverá ante el Honorable Congreso de la Nación que hasta el 25 de mayo de 1977 no se establezcan otras modificaciones estructurales en el sistema impositivo aplicable a los productores rurales y toda nueva disposición que pudiera incidir en dicho régimen sea consultada y elaborada con la participación de la comisión permanente de política tributaria. Así mismo se procederá a analizar los sistemas vigentes a fin de evitar superposiciones tributarias y disparidades reglamentarias».

Como se desprende claramente, las actividades prioritarias serán promovidas impositivamente sobre la base de la reinversión de los beneficios de la explotación, pero la tasa de beneficios es bajísima para el sector industrial y lo es mucho más para el agropecuario —y aquí hay productores agropecuarios que podrán decir si es así o no—, en donde una tasa de utilidad del 7 por ciento es muy alta para capitales que muchas veces tienen que ser de gran magnitud.

De manera que aquí se dice: «reinversión de los beneficios de la explotación, apoyando la capitalización del sector a través de sistemas de diferimiento de obligaciones fiscales y en el marco de programas concertados de inversión que podrán incluir industrias transformadoras de los productos y proveedoras del agro».

Es notable el acierto de esa Acta de Compromiso. Pero lamentablemente creo que se desvirtúa en la instrumentación de las leyes impositivas. Acá evidentemente creo que esto ha quedado borrado en los hechos con la reforma tributaria que estamos considerando. Ocurrirá con el sector agropecuario que por la imposibilidad de alcanzar esos objetivos tan importantes se le va a impedir la reinversión, y esto, ¿qué va a significar? Que no va a haber tecnología moderna aplicada a la producción agraria.

Y entonces yo pregunto: ¿cómo se van a alcanzar las metas señaladas para exportación, que alcanzan, de acuerdo a lo que creo informó el señor presidente de la Nación, a más de 3.500 millones de dólares? Bien saben los señores senadores —ha sido dicho con gran claridad en la Cámara de Diputados— que en este momento no hay retención de vientres y tampoco la habrá

en el futuro. Por el contrario, va a haber liquidación de vaquillonas y vacas.

Además el área sembrada, tanto de maíz como de trigo, ha sufrido una disminución, con respecto al año anterior, de un 35 a un 40 por ciento. Este sistema tributario va a acentuar esta tendencia regresiva, que es un hecho público y notorio que no necesita de mayores pruebas para llevar al ánimo de todos el convencimiento de que es así.

Adviértase que hoy se dijo que había que terminar con los planes que eran simples juegos intelectuales, e ir a la solución concreta de los problemas, porque eso es lo que el pueblo nos está exigiendo. El país está harto de discursos, de dialéctica, de teorías y de exposiciones, y quiere soluciones concretas para los problemas concretos. Al pueblo, a los sectores de menores ingresos no los vamos a conformar nosotros con magníficos discursos; quieren un mejoramiento en el nivel de vida, y tienen todos los derechos para que así sea.

Voy a citar expresiones de un discurso del señor presidente de la Nación, porque me parece acertado el enfoque en relación con la filosofía que tiene que inspirar esta reforma tributaria respecto del agro. Y creo que esto no se cumple. Esto lo digo, es claro, como opositor —lo que aumenta la importancia—, pese a que en alguna oportunidad se incluyó en el «oficialismo» a todos los señores legisladores, lo que permitía pasar, en ese singular enfoque, de opositor a cuasi opositor, hasta llegar a cuasi oficialista y finalmente a oficialista. (Risas.)

**Sr. Fonrouge.** — Señor senador, está en una feliz carrera. (Risas.)

**Sr. Frugoli.** — No sé a cuál carrera se refiere. He aclarado que lo digo como opositor; por eso he hecho la digresión. Además, sería muy aburrido que no hubiera opositores.

**Sr. Fonrouge.** — Sabe el señor senador con qué sentido de cordialidad le he hecho esta reflexión.

**Sr. Frugoli.** — Por supuesto, señor senador.

Reitero que decía el señor presidente de la Nación, que «en este mundo de tres mil quinientos millones de habitantes, la mitad está hambrienta. En granos, Europa no cubre sino el 69 por ciento de sus necesidades. El mundo entero se está quedando sin proteínas, y sin proteínas el hombre no puede vivir, como no puede vivir sin oxígeno, sin agua o sin tierra».

Y continúa: «Solamente las grandes zonas de reserva del mundo tienen todavía en sus manos las posibilidades de sacarle a la tierra la alimentación necesaria para este mundo superpoblado y la materia prima para este mundo superindustrializado».

Yo lamento que no esté presente el señor senador Saadi, porque en alguna oportunidad tuvimos diferencias con respecto a esto y yo no tenía en ese momento en mis manos este discurso.



«Nosotros constituimos —sigue diciendo el señor presidente— una de esas grandes reservas. Ellos son los ricos del pasado» —yo aludí a esto—. «... Si sabemos proceder seriamente nosotros seremos los ricos del futuro, porque tenemos lo esencial en nuestras reservas, que ellos han consumido hasta agotarlas totalmente. Frente a este cuadro y desarrollados en lo necesario tecnológicamente, debemos dedicarnos a la gran producción de granos y de proteínas, que es de lo que está más hambriento el mundo actual. Debemos dedicarnos a la gran producción de granos...». Y decía en otra parte: «Como recién se dijo aquí, debemos alcanzar los márgenes de producción que la Argentina puede producir. El agro argentino está explotado en un bajo porcentaje, pero esos índices pueden aumentar setenta veces. Pongámonos en la empresa de realizarlo. Para eso necesitamos que se cumplan dos circunstancias: primero, desarrollar una tecnología suficiente para sacarle a la tierra todo el producto que la tierra puede dar, sin tener tierras desocupadas o cotos de caza, como todavía existen en la República Argentina».

Señores senadores: la tecnología se adquiere con inversiones, con capital, y si la presión tributaria es muy grande no hay ninguna posibilidad de concretar este objetivo.

Y decía finalmente el señor presidente: «Ese es un lujo que no se lo puede dar ya ningún país en el mundo. Segundo, utilicemos esa tierra para la producción ganadera. La República Argentina tiene 58 o 60 millones de vacas, cuando podría tener 200 millones, y ovejas en la misma proporción. Pongámonos a cumplir esos objetivos».

Yo desde mi condición de opositor apruebo las palabras que acabo de leer y digo que esta reforma tributaria ha tomado un camino absolutamente distinto al que marca este discurso.

Voy a terminar señalando muy cordialmente al señor senador de la Unión Cívica Radical que a mí, más que preocuparme que los que más tengan se aprieten mucho el cinturón, me preocupa que se lo aprieten hasta donde corresponda, y me preocupa mucho más que no haya en el país argentinos que por deficiencias en las funciones de gobierno, por egoísmo, por pequeñez, por mezquindad, por ceguera o por lo que fuera, tengan que apretarse el cinturón hasta más allá de lo que la dignidad humana permite.

**Sr. Culasso Mattei.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Allende).** — Tiene la palabra el señor senador por Santa Fe.

**Sr. Culasso Mattei.** — Señor presidente: muy someramente, y sobre todo por las brillantes exposiciones de los señores senadores preopinantes, trataré de fijar la posición de la democracia progresista en un conjunto tan importante de leyes que el Poder Ejecutivo ha enviado

a este Honorable Congreso. Para orientarse debidamente en la política económico-financiera y analizar un conjunto de leyes impositivas —cualquiera sea su filosofía tienden a proveer recursos al Estado— no alcanza solamente conocer los proyectos sobre leyes impositivas. Estas leyes sólo nos indican las tasas que se van a cobrar sobre distintas actividades o patrimonios. Pero en modo alguno nos dicen el monto de lo que se va a recaudar ni tampoco en qué se va a invertir aquello que se recauda.

Para poder pronunciarse acabadamente sobre la materia hubiera sido necesario y hubiera hecho falta conocer a fondo, en profundidad, debidamente estudiado, el Plan Trienal, y, juntamente, el proyecto de presupuesto para el año 1974, y quizá, al menos en forma tentativa, los de los años 1975 y 1976.

Si tuviéramos esos elementos, podríamos hablar con propiedad sobre los alcances de los proyectos de leyes impositivas, pues nos permitiría observar si el esfuerzo que se demanda a los habitantes de la Nación a través de la carga impositiva se vuelca en realidad en el auténtico desarrollo del país, en la real distribución de la riqueza, en los planes de expansión y liberación nacional. Yo sé que se me va a decir que sí, que así se hará, pero hubiera preferido tener los elementos indispensables para poder orientarnos debidamente.

El impuesto ha sido, a lo largo de los tiempos, el instrumento de política gubernativa más variable. Ha servido a veces para castigar a determinados sectores de una comunidad; se ha utilizado en otras para mantener regímenes de privilegio dentro del sistema económico, y muchas más ha sido simplemente un arma recaudadora sin ninguna connotación con la realidad económica y social del país.

Nosotros, los demócratas progresistas, siempre lo hemos considerado como un instrumento vital para la función de gobierno que, junto al crédito, permitiría, cuando lo inspira una filosofía progresista y transformadora, modificar la estructura económica y social obsoleta que ha sido causa fundamental en la parálisis del país.

Nosotros hemos señalado, a lo largo de muchos años de acción cívica, que la voracidad fiscal del Estado ha absorbido los recursos del interior argentino, sometiendo a las provincias a la condición de mendicantes del poder central para poder mantener su estructura administrativa y poder cumplir, medianamente, con los servicios asistenciales para la sociedad.

También hemos destacado que la política impositiva argentina, a lo largo de muchas décadas, ha sido la resultante de la improvisación financiera del Estado y de una incoherente planificación de la acción fiscal.

Nosotros afirmamos que la progresividad es uno de los principios fundamentales de toda política impositiva y, en cambio, hemos visto cómo, en los últimos tiempos, las leyes impositivas,

al abandonar ese principio, se transformaban en regresivas, acentuando la presión tributaria sobre los sectores de medianos y pequeños ingresos.

En nuestra opinión, puede apoyarse un aumento impositivo o la creación de nuevos impuestos si el destino que se va a dar a la recaudación es el incremento de la capacidad productiva, el desarrollo en todos sus aspectos y la mejora de los distintos estamentos sociales. Pero no podemos apoyar si ella tiende a cubrir un déficit fiscal improductivo. De ahí, señores senadores, que hubiéramos deseado contar con el proyecto de presupuesto y con el Plan Trienal, a fin de determinar con exactitud qué destino se va a dar a las recaudaciones.

Y aun dentro de ese Plan Trienal, opino que hay algunas premisas indispensables que deben tenerse en cuenta.

En primer lugar, saber si realmente va a actuar como elemento racionalizador y destinado a cumplir los objetivos que se han fijado.

No nos asustan, en modo alguno, los cambios; muy por el contrario, estamos con el cambio. Y no nos preocupa que aparentemente puedan tocarse algunos intereses que en nuestro país siempre fueron intocables.

Si queremos hacer una auténtica transformación, debemos realizarla sin miedo, sin temores, y ahí estaremos para apoyarla. Y bien: para llevarla a cabo es preciso que contemos con las herramientas necesarias.

El aspecto financiero es fundamental, pero también lo es saber qué se quiere. A grandes rasgos, hay que partir de la base de que debe lograrse una más justa distribución de la riqueza, liberando a quienes menos poseen y posibilitando un mejor nivel de vida.

En ese sentido, señor presidente, es preciso combatir radicalmente la desnutrición, el desempleo y la falta de una adecuada educación; debemos obtener mejoras en la salud, la vivienda, la seguridad social y aun en la recreación. Pero a la par de la elevación del nivel de vida de nuestros conciudadanos y de todos los hombres y mujeres que viven en esta tierra debemos asegurar la liberación nacional y una independencia económica que nos aleje de la dependencia de los grandes monopolios y empresas multinacionales, que han estado aprovechando nuestra desunión y desencuentro.

También hay que encarar con seriedad nuestro comercio exterior y no limitarnos a exportar materia prima. Es fundamental estimular —y como hombre del interior puedo afirmarlo— la creación de industrias transformadoras de materia prima, para lograr la exportación de productos que tengan incorporado el valor agregado. Así comenzaremos una etapa de real engrandecimiento nacional.

Esas, y otras medidas, harán que nuestra balanza de pagos alcance niveles óptimos que

permitan desarrollar otros esfuerzos en el orden interno.

En el orden agropecuario, por ejemplo, hay que estimular el esfuerzo productor, que estas leyes impositivas parecen desalentar. Ese apoyo debe estar destinado a incrementar nuestras áreas de siembra y los rendimientos, en modo alguno para oponerlo al esfuerzo industrial sino para complementarlo y asegurar el pleno empleo, la mayor producción y la total colocación de lo producido.

Pero nada se logrará en profundidad y extensión si no dedicamos también un gran esfuerzo al desarrollo de las industrias básicas necesarias para afirmar nuestra soberanía y nuestra proyección: el acero, el aluminio, la petroquímica, la celulosa, y otras, son metas fundamentales que deben ser encaradas con rapidez, y hasta diría que con audacia, para lograr significativos progresos a corto plazo.

Los planes de desarrollo energético, y particularmente los de desarrollo hidroeléctrico, no pueden postergarse más. Ya mismo, y con agilidad, es preciso que alcancemos niveles adecuados al más corto plazo.

Al mismo tiempo, debemos lograr también la liberación en materia tecnológica, desarrollando nuestra capacidad en ese sentido, que permitirá lograr altos niveles, sin despreciar, por supuesto, el conocimiento de la alta tecnología universal que puede ser apta para apoyar nuestros esfuerzos.

Pero el conjunto de los proyectos que estamos considerando no nos dice si están destinados en su recaudación a tales fines. Si se agrega que ya hay otras leyes, como la de la renta potencial de la tierra, la de la defensa del trabajo, la de promoción industrial, y otras que están vinculadas a lo que estamos tratando, resulta necesario —repito— saber el destino de lo que se va a recaudar.

Con respecto a la renta potencial de la tierra, mediante una ley que sancionó hace unos meses este Congreso, se creó una etapa intermedia en el impuesto a las tierras, que se dice tendrá vigencia solamente durante 1974, como antesala del impuesto a la renta normal potencial del suelo; pero ella no cumple en forma eficiente el propósito que guiaba a quienes propiciábamos este impuesto a la renta potencial. Este tiene sentido en la medida que esté destinado a ser la única y excluyente tributación que pague el productor agropecuario, de manera tal que al establecer las pautas tributarias de cada unidad agraria y gravar esa capacidad productiva con prescindencia de que el productor haya alcanzado o superado las pautas, probablemente consiga la ley castigar al productor ineficiente y alentar a aquel otro que logre superar los promedios mínimos de rentabilidad.

Pero insertada esa ley en el contexto global de la política impositiva, sin la eliminación del resto de los gravámenes que afectan a la explo-

tación agropecuaria, no se hace más que sumar otra gabela sobre las tantas que están pesando negativamente en la capacidad productora de nuestro campo.

Una prueba de lo que afirmo la da el proyecto de ley de impuesto a las ganancias, que reemplaza al tradicional impuesto a los réditos. La modificación incluye las rentas provenientes del suelo tomando como base la renta media potencial, y luego la incorpora a la declaración general de ganancias del contribuyente, con lo que la renta del suelo influye en la formación de la tasa que finalmente le será aplicada en concepto de este gravamen.

En esa forma el impuesto a la renta potencial deja de tener las características de autonomía que constituían una de sus bases fundamentales: la de asegurar al productor agropecuario una certeza sobre su contribución al Estado.

De cualquier manera, y a modo de adelanto sobre las observaciones que formularemos cuando se traten estas leyes en particular, debemos decir que nos alarman los altos índices que se incluyen en el impuesto al valor agregado, verdadera transformación del sistema impositivo.

Debemos alertar sobre la eliminación de todo tipo de desgravaciones en el impuesto a las ganancias, lo que desalentará principalmente al agro y a la pequeña y mediana industria. Hubiéramos deseado que esa eliminación de desgravaciones se fuera haciendo en forma paulatina, en un lapso de tres a cinco años, para que los que hasta ahora se beneficiaron pudieran adaptarse a las nuevas circunstancias.

Nos preocupa un auténtico estímulo a la inversión, pero del texto de las leyes proyectadas surge un desaliento a la reinversión, que es el arma principal para el auténtico y serio incremento de nuestra economía.

Si bien es cierto que se acentúa la carga por medio de impuestos directos, lo cual resulta satisfactorio, también lo es que se mantienen y aumentan los impuestos indirectos, como el del valor agregado, que no tienen nuestra aprobación.

Además, a través de ninguna de las disposiciones vemos que se haga efectiva una auténtica redistribución de la riqueza. Y si se produce un desaliento hacia la pequeña y mediana empresa, como todo parece indicarlo, tememos un acrecentamiento del índice de desocupación, lo que no sería en modo alguno favorable para nuestro futuro de gran nación.

Tengo que expresar muy especialmente que en casi todas estas leyes se acentúa el sentido centralista y antifederalista; la absorción por parte del Estado nacional de prácticamente todas las fuentes de recursos, restándoles a las provincias sus propios y auténticos derechos. Y no se me diga que por vía de la coparticipación las provincias obtendrán mayores ingresos, ya que lo que queremos es que a las provincias se les respete su derecho constitucional. Así afir-

maremos el sentido federalista y contribuiremos realmente al crecimiento armónico de la Nación.

Tampoco vemos en estas leyes disposición alguna que permita la actualización automática de los patrimonios en relación a los índices de inflación. La inflación, grande o pequeña, es un mal mundial que nosotros también padecemos en mayor o menor escala. En consecuencia, deben tomarse los recaudos para atenuar sus efectos y combatirla. La actualización automática de los patrimonios es una de esas herramientas.

Hemos de comentar, en el tratamiento en particular, la observación que nos merece el tratamiento de las sociedades de capital, a las que se puede llegar a perjudicar cuando no distribuyen dividendos, en especial tratándose de las medianas y pequeñas empresas.

Esta observación puede alcanzar también al proyecto referido al impuesto al patrimonio, donde observamos una doble imposición, que al considerarse en particular destacaremos.

De igual modo estimamos que las desgravaciones por mínimo no imponible no son equitativas para todas las categorías. No veo la razón para un tratamiento desigual.

Señor presidente: dejo así brevemente sentada nuestra opinión en general sobre las leyes impositivas en relación a una auténtica política nacional. Hemos de votarlas en general, pero me he de permitir hacer observaciones en su tratamiento en particular para expresar nuestro deseo de que sean mejoradas, a fin de servir a los altos fines de la Nación en que todos estamos empeñados: hacer de nuestra patria la gran nación dentro de los estados soberanos del mundo.

**Sr. Pugliese.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Allende).** — Tiene la palabra el señor senador por Buenos Aires.

**Sr. Pugliese.** — Señor presidente: confieso que antes de tomar la decisión de participar en este debate vacilé, pensando si ello era necesario, sobre todo después de la brillante y apasionada exposición que hizo el señor senador León, representante de nuestro sector en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Pero leía un párrafo de un trabajo del doctor Enrique García Vázquez, distinguido economista que honrara la función pública en el cargo de vicepresidente del Banco Central durante el gobierno del presidente Illia, y ello me decidió a participar para hacer algunas apreciaciones sobre la política económica y la incidencia que sobre ella tiene la reforma tributaria, inserta en el conjunto de leyes sometidas a la consideración del Congreso de la Nación.

Decía el doctor García Vázquez: «Generalmente, no se da al impuesto la importancia que tiene; no se observan en profundidad sus malos y buenos efectos para la economía globalmente considerada, sino que la atención se centra en

la desagradable acción que principalmente algunos gravámenes directos ejercen sobre el individuo o la empresa.

»Sin embargo, él cava profundamente en la tierra de la economía, daña raíces vitales, actúa como fértil abono otras veces y siempre su acción silenciosa, para bien o para mal, tiene efectos extraordinariamente importantes para el producto económico. En la reforma que esperamos, el impuesto debe rendir lo suficiente como para financiar genuinamente el gasto público, cuya orientación y no su monto debe ser profundamente revisada. No es posible que por falta de comprensión del problema o por desorganización se siga alentando la inflación mediante la emisión monetaria sin control. Esto conduce a la injusticia social, a la inversión improductiva y al estancamiento económico.»

De esta manera, sobre tales conceptos, la importancia de la política impositiva como un instrumento de la política económica global obliga a señalar, en primer término, que la dificultad de este debate radica en la ausencia de tres condiciones que debieron darse hoy en este recinto: primero, conocer el monto estimado de lo que el Poder Ejecutivo piensa recaudar mediante estas reformas impositivas; segundo, conocer el Plan Trienal; y tercero, conocer el presupuesto. Yo agregaría todavía un cuarto requisito más, que es la presencia de los señores ministros responsables en este recinto, porque de lo contrario, en este último caso, estamos en la misma situación que durante el gobierno militar del general Onganía, quien decía que realizaba conferencias de prensa porque éstas le brindaban el medio de comunicación directa con el pueblo debido a la ausencia del Parlamento. La conducción económica sigue manejándose a través de conferencias de prensa en lugar del diálogo ante los representantes del pueblo, que han dado más de una muestra de que están imbuidos del más alto espíritu de colaboración, a pesar de que muchas veces no encuentra reciprocidad en una conducción económica que se jacta de mandar estas leyes, en virtud de coincidencias realizadas con nosotros, pero, hasta llegar aquí, somos convidados de piedra.

Nuestra responsabilidad ante el país no está determinada por la conducta de un sector o de todos los sectores del Poder Ejecutivo. Nuestra responsabilidad ante el país parte de nuestra propia convicción acerca de cómo debe ser la conducta de las fuerzas políticas argentinas para salir de esta situación y conducir a la Nación por el camino de la institucionalización definitiva. Por ello, estos agravios no los computamos, porque no son ellos los que nos determinan sino que nos guía una concepción razonada y orientada a obtener logros definidos para el conjunto de la Nación.

Por esa razón también atenuamos nuestra crítica a algunas medidas de la política económica porque tenemos conciencia cabal de la pesada herencia recibida. No me refiero, como se dice

muy ligeramente, a los últimos dieciocho años, porque es necesario que se diga con las cifras, y no con los discursos fáciles, que en 1966 el aumento del costo de la vida había llegado en el primer semestre al 4,6 por ciento. En consecuencia, cuando se habla de la pesada herencia recibida, ello debe ser imputado a los períodos que fueron responsables de esta desorganización económica y financiera del Estado y del abultado déficit de tres billones que heredó este gobierno.

Esto nos lleva a decir también que en 1966 estaba en marcha un plan nacional de desarrollo que merecía el nombre de plan y era el primero que se hacía en el país, que contenía una diagnosis que fue elogiada por todos los sectores y que determinaba, en su capítulo especial, compatibilizando recursos con necesidades, lo que podía hacerse en un período determinado de tiempo. No era la mera creación de intelectuales, sino un trabajo razonado, sin antecedentes, que se hizo en muy poco tiempo. Todavía este plan trienal tiene que pasar por el examen de nuestra lectura para saber si el paraíso que se ofrece es el de un inventario de necesidades o si los recursos que se establecen están compatibilizados con las posibilidades del país y con las necesidades prioritarias que éste requiere.

De tal manera que vamos a dejar estos aspectos negativos del tratamiento a fuerzas políticas que cooperan con la consolidación del frente interno, como decía esta mañana el señor presidente de nuestro bloque, y vamos a dejar también esas ligerezas que se cometen porque atentan no sólo contra una fuerza política que puede exhibir orgulosamente su paso por el gobierno, sino contra el más elemental sentido de la veracidad de los hechos.

Pero nuestra condescendencia a considerar las dificultades de la conducción económica no llega a tanto como para impedirnos realizar algunas críticas.

Podemos señalar, y conviene que empecemos por los aciertos de la conducción económica para que los desaciertos que les imputamos puedan ser considerados en forma de balance comparativo y no con un afán exclusivamente crítico. Señalamos, en la conducción económica, aciertos vitales en cuanto a la decisión y el coraje con que enfrentó una inflación que se iba haciendo galopante en el país. Con una tasa del 80 por ciento no podía realizarse ni pensarse en ningún tipo de política económica. Es cierto que nos decidimos y somos los inventores del gradualismo y que algunas veces a tal sistema en los foros internacionales se lo llamó la teoría argentina. No estamos de acuerdo con el tratamiento de *shock* para resolver el problema de la inflación. Es cierto que se ha obtenido ese éxito, no por supuesto en la jactanciosa afirmación de que ahora la inflación es «cero», porque sabemos que no es así. Sabemos cuáles son los resquicios por los que se escapan algu-

nos precios oficiales, que no son los que en realidad se pagan. Advertimos en algunos productos cierto desabastecimiento y escasez. Pero, de cualquier manera, esto no sería suficiente para disminuir el reconocimiento que debemos hacer del éxito global en la lucha contra la inflación.

Sí creemos, en cambio, que han faltado políticas, especialmente en el sector agropecuario. Hemos dejado de exportar una cantidad importante de toneladas de carne, y si podemos exhibir un aumento en el monto total de la exportación es porque hemos aprovechado las condiciones excepcionales del mercado internacional; pero, en volumen, la disminución ha llegado al 45 por ciento.

Hemos señalado antes de ahora, cuando tratábamos las leyes que determinaban la organicidad de la Junta de Carnes y de la Junta de Granos, estos aspectos, y hemos reclamado estas políticas globales. En el área agraria hemos destacado la necesidad del seguro agrícola, que no es un asunto de poca importancia, como parece dársele. Porque el seguro agrícola lleva de suyo la posibilidad de una política crediticia que se asiente sobre el mismo para modificar la estructura comercializadora, que hasta aquí no fue ventajosa ni conveniente para los agricultores, sobre todo para los pequeños y medianos, que, como decimos reiteradamente, son los que queremos proteger.

Ya se ha señalado aquí que luego de nuestros reclamos se hizo rápidamente la llamada «Acta de compromiso con el agro», en la que se fijaron una serie de pautas establecidas en este recinto; ninguna de las cuales ha sido cumplida. Además, este tema está incluido en el período de sesiones extraordinarias del Congreso; y, sin embargo, los funcionarios del gobierno han dicho que la comisión que allí se menciona es simplemente asesora. Cuando llegue el momento de discutir este asunto tendremos que determinar cuál es la característica de dicha comisión, porque si es simplemente asesora nos negaremos a su consideración en el Congreso, ya que el Poder Ejecutivo tiene facultades para hacerse asesorar por tantas comisiones como crea conveniente y sobre todo si, como ésta, son honorarias.

De modo que no quiero extenderme en lo que han expresado otros señores senadores con respecto a estas fallas de la política.

Nosotros hemos tenido contacto durante mucho tiempo en el país con los hombres que tienen la responsabilidad de la conducción económica y hemos coincidido muchas veces, yo diría muchas más que las que hemos divergido, en la consideración de los problemas que afectan al país.

De modo que esta crítica que realizamos no es algo que nos complazca. La formulo, primero porque es un deber expresar con limpieza el pensamiento sobre una situación que nos afecta

a todos; y en segundo lugar, es un llamado de atención para que se ponga más el acento en las políticas de fondo, así como señalo el acierto de la conducción en la organización del Estado, que quiere convertirse en una empresa más eficiente. Y así hemos votado corporaciones de la pequeña y mediana empresa y de empresas nacionales, oportunidad en la que hemos indicado que todo ello constituye sólo la infraestructura de una política que debe realizarse en el país. Pero no hemos visto que podamos considerar políticas, en el sentido lato de la palabra, y pasado el período de la coyuntura, referidas al mediano y largo plazo.

Lo que expreso para el sector agropecuario va también referido para otros sectores tan importantes del país como el de la petroquímica, en el que luego de anunciarse en un diario que por el plan petroquímico quedaba la producción en manos del Estado, posteriormente leímos anuncios referidos a la posibilidad de la construcción de una gran planta petroquímica por parte de una empresa italiana, a lo que, por supuesto, no me opongo a priori. El problema es conocer exactamente cuáles son los planes del gobierno y determinar las políticas en esta materia.

Seguramente, si hubiéramos tenido el plan trienal, siguiendo el orden lógico en la consideración de estos asuntos, podríamos haber determinado este aspecto. A mí no me preocupa lo que se ha dicho de que las leyes impositivas tienden a desalentar la inversión privada para favorecer la pública, siempre que en el plan esté reflejado el monto de las inversiones tanto públicas como privadas determinando las reglas de juego de cada sector.

De ese modo la crítica resulta subjetiva porque la respuesta tiene que estar dada por parámetros objetivos de realización gubernativa, que son los que no conocemos nosotros en este momento.

El Poder Ejecutivo envió una reforma tributaria a la que luego me voy a referir en sus principios generales, descontando, al enviar el proyecto de presupuesto al Congreso, que esta reforma sería aprobada en primer término; cosa que teóricamente no puede pensar el Poder Ejecutivo sino una vez que tenga la ley.

En segundo término determina, sin que nosotros lo sepamos, cuánto es lo que producirá la serie de impuestos fijados en esta reforma y luego anuncia un plan trienal que será de conocimiento del Congreso. Todos estos elementos hubieran sido vitales y necesarios para que este debate mereciera el nombre de tal y pudiéramos nosotros hacer el análisis de esta reforma y responder, si es posible, cuál es la parte del sector público, cuál es la parte del sector privado y si estas leyes no desalientan tanto al sector privado que le impida cumplir la cuota parte que el plan trienal le ha determinado para los próximos años.



De manera que este criterio de la falta de políticas concretas y de conocimientos que no tenemos con respecto a la utilización y al monto que cada uno de estos impuestos va a producir, es lo que nos obliga a realizar una advertencia y una especie de requerimiento para que se abandone cierto elitismo excluyente de la conducción económica a pesar de que para defenderse se apoya en las coincidencias programáticas suscritas por los partidos políticos.

Por otra parte, en cuanto a la reforma en sí y como lo ha dicho ya de una manera muy clara el señor senador León, nos cuesta poco trabajo apoyarla como filosofía, porque esos principios son, precisamente, los que hemos sustentado en este mismo recinto del Senado cuando tuvimos el honor de desempeñar el cargo de ministro de Economía de la Nación hace 8 ó 9 años. Lo mismo que en la Cámara de Diputados cuando considerábamos y discutíamos un presupuesto durante tres largos meses en comisión —porque el presupuesto lo habíamos presentado el 31 de agosto, como manda la ley.

Allí se discutían también las leyes impositivas y no voy a recordar todo lo que se dijo en aquel debate que tal vez sea objeto y motivo de ilustración para señalar las contradicciones con palabras que se dijeron entonces y que no se repiten hoy. Lo digo para destacar una política coherente en esta materia que nadie nos puede negar porque está asentada, felizmente, en los Diarios de Sesiones de este Honorable Congreso.

O sea, que la reforma impositiva era de todo punto de vista absolutamente necesaria. Nosotros hemos dicho antes que el sistema impositivo argentino estaba desquiciado; que era necesario establecer el principio de la progresividad porque había llegado a un grado tal de regresividad en que los impuestos indirectos superaban a los directos y la recaudación de estos últimos disminuía año a año.

El fenómeno de la evasión impositiva que aquí se ha referido obedece tal vez a algunas causas que se han señalado, como la inequidad del sistema impositivo por la falta de una política, por ejemplo; los gastos generales del Estado, en los que hay una conciencia en que al no ser útiles no se paga el impuesto, etcétera. Esto puede ser cierto. Pero tampoco hay que olvidarse que la evasión se ha producido sobre la base de establecer dentro de las leyes una serie anárquica de desgravaciones y exenciones sin ningún sentido ni orientación, que prácticamente desquiciaron todo el sistema impositivo.

La frecuente costumbre de dar blanqueos o regularizaciones impositivas, o como quiera llamárselos, desalienta a los pocos contribuyentes leales que quedan, que cumplen con su obligación con el fisco.

La negativa a que el fisco tenga medidas fuertes y coactivas para poder actuar, también es otra causa, como el caso del secreto bancario, que aquí ha sido defendido a muerte, mientras

que no es defendido dicho secreto cuando se trata de relaciones de banco a banco, porque éstos, que defienden el secreto bancario por una cuestión ética de la libertad del individuo que deposita allí en su banco, se olvidan de la ética de ese cliente que dicen defender cuando piden sus informes a otra institución para no sufrir un quebranto económico. Es decir que al fisco, que en definitiva es la Nación, le negamos lo que le acordamos a los bancos entre sí, como si estas instituciones fueran una entidad mayor que la Nación, lo que demuestra hasta qué punto estaba desquiciada la concepción del poder y de los grupos de poder que se consideraban dueños del mismo.

Por eso, cuando el Poder Ejecutivo —en parte recogido por el señor miembro informante a lo largo de toda su exposición— se refiere al «grupo de intereses», a los «intereses que van a reaccionar», parecería que hubiese una especie de fantasmas, que no los hay pero que existen. Yo diría que tendríamos que ir más allá y señalar concretamente quiénes son estos fantasmas. También lo hemos dicho aquí, hace diez años, casi preanunciando que estos fantasmas se iban a corporizar para desalojarnos del gobierno, y sabíamos que estaban radicados en las veinte manzanas del puerto de Buenos Aires, que todos los señores senadores señalan cada vez que sus provincias sufren por esta centralización porteña.

Pero si nosotros lo que hacemos con estas veinte manzanas es atacarlas en las personas, creo que nos equivocamos. Considero que hay que atacar al sistema, con gran respeto por las personas, porque en esas veinte manzanas puede haber, y yo lo reconozco, quienes pensando distinto consideren que de esa manera obtendrán los mismos objetivos que nosotros queremos.

Pero lo que importa es que nosotros —y ahí sí estamos en las coincidencias programáticas—, como objetivo fundamental, deseamos conseguir un cambio revolucionario en paz. No nos olvidemos que este cambio lo tenemos que hacer, porque si no no tendremos autoridad moral para rechazar la violencia como medio. Entonces, lo que hace falta es que este grupo de intereses no se nos meta por los resquicios, por ninguna parte, ni maneje ningún sector o aparato del gobierno donde pueden hacer imposible lo que se pretende con una reforma que teóricamente es correcta. Es decir, que tenemos que señalar no al enemigo, porque yo también creo que todos somos argentinos, sino al adversario de una concepción mayoritaria que el país ha votado y que debe imponerla con la fuerza que es el respaldo popular.

Se ha hecho un mundo en algunos sectores con respecto a las leyes impositivas enviadas por el Poder Ejecutivo. Ustedes me perdonarán —o me agradecerán— que no entre en extenso al análisis de esas normas, pero no lo hago sólo en beneficio del tiempo de mis colegas, sino

porque realmente no soy un técnico en la materia. Pero he visto y leído las cuatro o cinco objeciones fundamentales que se le hacen a la reforma tributaria, con la que he dicho que nosotros estamos de acuerdo, porque es prácticamente lo que se ha sostenido en todos los congresos de derecho fiscal, lo que han dicho los partidos políticos y casi todos los sectores, en cuanto a nominatividad de acciones, la estructura de la escala del impuesto a las ganancias y el valor agregado, que ha sido muy duramente censurado, y por nosotros en cuanto a la tasa, no en cuanto al sistema.

Quiero referirme por ahora al problema de la nominatividad, a pesar de ser algo que ya no puede defenderse excesivamente. Se habla de que la nominatividad en otros países ha prosperado porque es endosable, mientras que en el nuestro no. Yo no sé si la nominatividad debe ser o no endosable o si es suficiente la caja de valores; lo que se, en cuanto al espíritu que nosotros buscamos o buscaríamos de ser autores de la reforma, es pretender cambiar una situación por otra, en la que todos queden individualizados. La falta de individualización es la que ha provocado la falta de progresividad, porque al no tenerse la posibilidad de conocer los ingresos totales de todas las personas, es imposible realizar escalas progresivas del impuesto.

Como no existía esa posibilidad y el Fisco no tenía recursos que necesitaba cada vez más, además de recurrir a la emisión monetaria, aumentaba la tasa con lo cual crecía la progresividad porque ésta se distribuye entre los pocos que pagan. En consecuencia, yo creo que la nominatividad no puede ser la causante única de que en la bolsa no se activen las acciones, porque el régimen de nominatividad que todavía no hemos establecido, no ha estado vigente y, por lo tanto, no es el responsable de una situación que hace mucho tiempo se mantiene y que obedece a otras causas que deberían tratar de corregir estos sectores, porque en sus manos está hacerlo. Cuando un país no se desarrolla en forma general nadie puede pretender que se desarrolle en forma sectorial. De manera tal que esto no tiene absolutamente nada que ver.

Yo quería señalar este punto, porque he leído, como todos los señores senadores, una presentación hecha al Honorable Senado por la Cámara de Sociedades Anónimas que es la que, en forma más ilustrada y detallada, diríamos, hace la crítica del sistema de nominatividad expresando los perjuicios que ocurrirían en el caso de que este Senado le prestara aprobación. Señala en la nota —a pesar de haber manejado números nunca he sido muy fiel a ellos— que existen alrededor de trescientas sociedades que cotizan en bolsa, mientras que en el país hay cuarenta mil que no cotizan.

En el memorial se señala —y de paso se quejan de no haber recibido respuesta— que esto

puede ser sostenido únicamente por quienes nos llevan insensiblemente al marxismo, es decir, que para esta manera de pensar, existen dos formas de conducir la economía de un país: el marxismo o el sistema que ellos proponen. O sea, no existe más, ni en la teoría ni en la acción política, que recurrir al marxismo —al cual confunden con estatización marxista—, o establecer las ventajas que tiene la moderna sociedad anónima en cuanto es una sociedad ágil para captar dineros del pueblo haciéndolo participar en las decisiones y en la capitalización del país.

Y yo pregunto: ¿cuarenta mil sociedades anónimas en la República Argentina? No conozco que existan 40 mil pedidos de subscripción de dinero público para realizar obras importantes que un empresario particular no puede hacer.

Me decía un distinguido comercialista que en nuestro país existen más sociedades anónimas que en Francia, Alemania e Italia juntos.

Entonces queda la duda de que la mayoría de estas 40 mil sociedades anónimas —y esto no implica un agravio total— pueden haberse constituido con el propósito de valor o defraudar, porque esto ha ocurrido en el país.

Lo que manifiesto puede aparecer como una imputación gratuita, pero no la hago a una determinada persona sino que en última instancia respondería al agravio gratuito que se le ha hecho a todos los que defienden la reforma tributaria, computándoles ser marxistas.

Lo que me preocupa es que busquemos ordenar definitivamente al país. No basta con que algunos sectores acepten el veredicto y se ubiquen dentro del mismo porque no queda otro camino. Es preciso promover el cambio mental para que se comprenda que el país necesita el apoyo de estos hombres de empresa, pero ubicados dentro de una mayor comprensión del pensamiento mayoritario y dispuestos al esfuerzo sacrificado que ya realiza la clase obrera.

De modo que cuando formulo la crítica a la conducción económica, también hago la correspondiente defensa de principios. Nosotros estamos de acuerdo con esta reforma, con su fundamentación filosófica, y consideramos que es importante, con las lógicas reservas formuladas por nuestros representantes en la Honorable Cámara de Diputados, y las que ha hecho en este recinto el señor senador León, particularmente señalando que nuestra diferencia fundamental está referida al impuesto al valor agregado. Y en tal sentido quiero agregar que comparto otra crítica que se ha formulado precedentemente, al manifestarse que resultaba innecesario establecer en este momento la tasa, ya que el impuesto tendrá vigencia en 1975. Así mismo, en cuanto al sistema de aplicación de dicha tasa, consideramos que debiera ser de reducción de las alícuotas en las distintas etapas.

De ese modo, si se quisiera desalentar un determinado tipo de consumo, en la última etapa

se aumentaría dicha tasa para lograr el propósito perseguido. De esa manera se atenuaría el efecto piramidal, al que se ha hecho referencia.

Supongo que este asunto lo vamos a conversar en el transcurso del año próximo, porque si el impuesto va a aplicarse a partir del 1º de enero de 1975, tendremos oportunidad de conocer los efectos prácticos de la aplicación de este sistema y volver sobre la cuestión.

Con respecto a la inversión privada en beneficio de la pública, la crítica está dirigida en este momento al hecho de saber cuál será la política monetaria y la participación de uno u otro sector. Pero en líneas generales voy a aceptar la crítica de que no deberían estar exceptuados los valores públicos. Incluso los que adquieren valores públicos, cuyas rentas están exceptuadas, son individuos iguales a los que adquieren valores privados. Por lo tanto, con respecto a ellos tampoco podemos aplicar la progresividad. Inclusive se podría hablar de esto con respecto a todos los patrimonios de propiedad del Estado, porque es necesario que sepamos cuál es el costo. Con respecto a estas excepciones, yo creo que toda empresa tiene que pagar un impuesto y si no le alcanza para hacerlo, el Estado debe dárselo, pero el costo tiene que ser conocido si es que realmente queremos ordenar la economía.

Con respecto a la práctica, yo debo formular una crítica que no apunta a la reforma tributaria sino a la política económica. Me refiero a la falta de una política agropecuaria que tienda a la modificación de la estructura agraria, ya que puede ser que esta reforma no dé los resultados apetecidos, en la medida en que una reforma tributaria no se hace solamente con sentido fiscalista, sino para obtener un objetivo político. Pero el mantenimiento de la actual estructura puede hacer que ella se fortalezca, si no realizamos fundamentalmente una política que tienda al aumento de la producción.

Esto último no lo digo solamente por lo que afirmaba el señor senador Frugoli con respecto a las palabras del presidente de la Nación, en cuanto al futuro que espera a nuestros países como reservas de alimentos frente a otros países hambrientos. Yo creo que esto no es nuevo y ha sido dicho muchas veces. Fero ocurre que este país, que alguna vez fue llamado el granero del mundo y que tenía ventajas relativas para obtener una importante producción agropecuaria, se encontraba muchas veces con que el hambre se localizaba en naciones que no tenían con qué pagarnos. Nosotros no manejábamos el comercio porque queríamos, sino porque nos lo imponían dentro de un área determinada que en un momento dado se empezó a autoabastecer, creando la crisis de nuestro sector externo. Esta crisis fue señalada en el diagnóstico de nuestro importante Plan Nacional de Desarrollo como la causa responsable de las crisis periódicas argentinas.

Lo que es nuevo y debe decirse, es que ha habido en el mundo un proceso de liberación que ha incorporado millones de personas que antes no comían y ahora tienen economías desarrolladas que les permiten comerciar y pagar.

Entonces es importante que desarrollemos una política, ya que tenemos asegurados los mercados. No hace muchos años, creo que en 1960, una misión comercial de China Continental nos visitó y se fue con las manos vacías por no haber podido conseguir siquiera las visas para manejarse dentro del país. De aquí se trasladó a Canadá, donde compró 400 mil toneladas de trigo y otra cantidad de productos que hubiese podido comprar en la Argentina, sobre todo en la Patagonia, a la que no pudo viajar por dificultades que tuvo en sus visas.

Pero los sectores que impiden que se den visas a las misiones comerciales extranjeras señalan a Canadá como un ejemplo demostrativo del crecimiento que no ha alcanzado la Argentina. Ahora estamos conociendo el concepto de empresa multinacional, y seguramente los intereses de esas empresas que manejan las economías imponían entonces su sistema a nuestro país alegando que se trataba de materiales críticos que no podíamos vender al presunto enemigo. Pero sus propios aliados podían hacerlo y mantener relaciones que les eran fructíferas y provechosas.

Si no tenemos la conciencia de la independencia y si creemos que la liberación es una mera palabra que nos basta pronunciarla para sentirnos satisfechos, no vamos a encontrar solución a los problemas. Es cierto que es necesario mejorar la eficiencia de los organismos del Estado, pero también que, simultáneamente, debe haber una política que tienda a este aumento de la producción, no manteniendo el status quo de la actual tendencia sino multiplicando la posibilidad productiva de los pequeños y medianos productores para convertirnos realmente en un país, como quiere el Presidente, que tenga cantidades suficientes de productos para un mundo cada vez más hambriento. Pero cuando esta posibilidad existe, tengamos la valentía de decirle al país, con confianza en el pueblo, que al no existir suficiente carne roja o vacuna para exportación y consumo, en un momento de emergencia es necesario obtener divisas de nuestra propia producción para fundar en ello un proceso de liberación y de independencia.

Si se explica claramente, con la confianza con que se apoyan otras medidas, estoy seguro de que nuestro pueblo respondería inmediatamente, y se evitaría todo este mercadeo con el cual no se resuelve el problema del consumo popular, no se soluciona el problema de la producción ni se pueden obtener las divisas necesarias para fundar en ellas un plan de desarrollo independiente.

Esto es lo que estamos reclamando y no vemos políticas que podamos discutir. Estamos votando medios, y hasta aquí vamos bien. Es el primer año, es la infraestructura. Se asientan los principios de la reforma tributaria, pero aquí hacen falta políticas que no se ven y tienen que ser dadas con bastante tiempo porque el país está esperando y el mundo está esperando a la Argentina.

Todo esto que se dice es cierto teóricamente, pero en la medida en que el país asuma la responsabilidad de hacer lo que estas buenas perspectivas le están ofreciendo.

Si realizamos una política de este tipo, si nos sinceramos frente al país y nos dejamos de hablar simplemente de liberación, hallaremos el camino. Si hablamos de liberación porque en lugar de 62 kilos de carne per cápita estamos consumiendo 85, y no hacemos el cálculo de estos 23 kilos per cápita, que son 466 mil toneladas de carne que representan 600 millones de dólares para nuestras reservas de divisas, no estamos haciendo liberación, la estamos retardando con un populismo que tiene características similares al de la dictadura militar, que no tuvo política económica y a través de ese populismo provocó el desastre que heredó este gobierno.

Debemos tener cuidado y ser suficientemente responsables y valientes como para afrontar esta situación. No es popular el que le dice al pueblo que come mucho más que antes porque paga más barato, sino el que estableciendo una política de mediano y largo plazo crea la posibilidad de que éste sea realmente un país independiente y liberado y que todo el poder de decisión esté en manos argentinas. Ese día nos reiremos de las leyes de inversiones extranjeras, nos reiremos de los discursos, y tal vez nos tengamos que reír de la pretensión que tenemos de reprimir la violencia mediante leyes penales.

Estas sí son coincidencias programáticas, señor presidente, y con respecto a éstas, nos gustaría que algún día se nos llegue a decir cómo las podremos implementar y qué precio estamos dispuestos a pagar.

El precio de estas coincidencias no puede estar solamente en manos de la oposición, que yo no llamaría constructiva sino realista. No es oposición realista o constructiva porque haya participado de todo lo que el gobierno hace o la mayoría dispone; hacemos oposición realista porque tenemos un compromiso fundamental con el país, al que hemos visto de arriba y de abajo. Por eso hemos podido señalar en nuestra plataforma y en nuestro programa los principios que nos costó muy poco tiempo inscribir en las coincidencias programáticas.

De manera tal que mi intervención, señor presidente, que se ha alejado un poco del análisis de las leyes impositivas, está destinada a formular esta advertencia y a señalar estos puntos, para que se determine cuál es la línea

de nuestro pensamiento. No va contra nadie, no persigue fantasmas ni busca adversarios, pero tiene la firmeza suficiente de querer barrer todo obstáculo que impida un proceso auténtico de liberación, no declamado pero sí realizado en el más breve lapso posible.

**Sr. Perette.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Allende).** — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

**Sr. Perette.** — Señor presidente: los señores senadores doctores León y Pugliese se han referido tanto al aspecto impositivo como al económico en alternativas que son fundamentales para el país.

Coincido en un todo con el magnífico discurso del señor senador doctor León, cuando sintetizó su pensamiento al sostener que la reforma impositiva, en el buen camino, es una palanca transformadora substancial para el país. También valoro las expresiones del señor miembro informante senador Romero, en cuanto dio a la Cámara los antecedentes que se relacionan con las distintas leyes impositivas que deben tratarse. Así mismo, se acepten o se discrepe con ellos, valoro los conceptos enunciados medularmente por el doctor Frugoli, así como también por el señor senador demócrata progresista Culasso Mattei y por el señor senador doctor Pugliese.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º del Honorable Senado, doctor Américo Alberto García.

**Sr. Perette.** — Entiendo, señor presidente, que estas leyes ponen a prueba los verdaderos sentimientos de pacificación nacional. Considero que no podemos negar lo que el gobierno necesita para realizar su obra. Lo digo con toda claridad y responsabilidad. No queremos negar lo que no pudimos disponer nosotros como gobierno.

Cumplimos nuestra función opositora señalando críticas, aciertos y discrepancias. Queremos ayudar a construir, y de ninguna manera —sé-pase bien— queremos servir a la obstrucción, camino que solamente lleva a la frustración del país.

Quiero advertir, señor presidente —para evitar equívocos—, que el país ha tenido planes de gobierno e ideas claras y nacionales de gobierno.

Nosotros, durante la gestión del período 1963-1966 dimos bases completas a un plan de desarrollo previsto entre los años 1965 y 1969. Sus objetivos eran: primero, asegurar la plena ocupación de la población creciente; segundo, mejorar el salario real y, consecuentemente, el nivel de vida de los habitantes; tercero, lograr un crecimiento más equilibrado de las distintas zonas del país, y cuarto, contribuir a frenar la inflación por el aumento de la producción de bienes y servicios, por la mejora de la situación

financiera pública y privada derivada de la mejor situación económica y con una eficiente administración.

Además, señor presidente, repetimos que no se puede hablar indiscriminadamente de los «dieciocho años anteriores».

En el sector administrativo público afrontamos un reordenamiento total que abarcó inclusive el aspecto financiero, habiéndose establecido por primera vez el presupuesto por programas a fin de controlar la eficiencia del gasto público.

Por otra parte, en materia impositiva se ejecutó el reordenamiento financiero que permitió un crecimiento espectacular de las recaudaciones del gobierno, de manera que el emisionismo tradicional para cubrir el déficit oficial jugó un papel de menor categoría en el proceso.

Además, se siguió al respecto una política coherente tendiente a no otorgar moratorias, blanqueos y otras medidas que enervan la moral impositiva, así como se limitó al máximo el número de franquicias impositivas.

Señalo estos hechos, señor presidente, para afirmar muy concretamente que en esta materia nosotros, desde el gobierno, hemos ejercitado los mismos postulados que ahora venimos a defender y a cuyo efecto vamos a dotar al Poder Ejecutivo de los instrumentos legales para que logre el aporte indispensable de la recaudación impositiva, con las críticas que señalamos en cada caso.

Además, nuestro plan de desarrollo tuvo una profunda base nacional, y negarla es desconocer la vida misma del país.

Quiero señalar que en este caso se trata de un programa integral en materia de política tributaria. No se puede pretender que esto sea una panacea y una solución perfecta de los problemas impositivos. Pero, personalmente, creo que puede iniciar una etapa promisorio en la vida del país. Es un esfuerzo de bien público. El país necesita avanzar y crecer, fundamentalmente con el esfuerzo y la obra de todos los sectores nacionales.

En materia impositiva —y quiero hacer estas consideraciones para evitar después un debate en particular— el radicalismo tiene una posición ideológica muy clara: promover la reestructuración del sistema fiscal de manera que el mismo sirva como principal instrumento para la justa redistribución de los ingresos, asegurando los recursos necesarios para el desarrollo nacional y la equidad cierta en la distribución de la carga impositiva. A estos efectos deberá aliviarse la situación de los contribuyentes por trabajo personal, gravarse el patrimonio neto individual, simplificar las declaraciones, afirmar el impuesto sucesorio en reemplazo del substitutivo, e incorporar las rentas accionarias a la declaración individual y reducir las tasas de los

impuestos que gravan los consumos, como también la eliminación de impuestos al bien de familia.

Esta es nuestra definición programática, que tiene también el apoyo de la coincidencia con otras fuerzas políticas argentinas. Evidentemente, este sistema tributario se inscribe en los lineamientos generales de esas coincidencias.

El Poder Ejecutivo elimina con la reforma doce impuestos vigentes: a los réditos; a las ganancias eventuales; sobre la venta de valores mobiliarios; a las ventas; al parque automotor; al patrimonio neto; de emergencia al patrimonio neto; substitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes; de emergencia sobre el substitutivo a la transmisión gratuita de bienes; para la educación técnica; el 5 por ciento sobre la producción alimenticia y todos los impuestos provinciales y municipales a las actividades lucrativas.

Substituye esos gravámenes por cinco impuestos: a las ganancias; sobre premios de juego y apuestas; al valor agregado, sobre capitales y patrimonio, y de enriquecimiento a título gratuito, a saber: herencias y donaciones.

Es evidente, y en esto creo que hay coincidencia en todos los sectores, que es necesario introducir claridad en el orden tributario y reducir la multiplicidad de impuestos, y de este modo concentrar la recaudación sobre unos pocos. De esta manera el costo de la recaudación guardará relación adecuada con lo que se este recaudar.

Debo advertir, señor presidente, que los economistas y financistas han coincidido en las llamadas «cuatro reglas de oro de las finanzas», muy bien puntualizadas por Adam Smith: primero: el principio de la certeza, o sea, la que el contribuyente debe tener sobre su obligación tributaria en cuanto a monto, forma y lugar de pago. El principio de la certeza exige que el contribuyente sepa con precisión cuándo, cuánto y cómo debe pagar. En segundo lugar: el principio de la comodidad; el impuesto debe recaudarse en el tiempo y modo que cause menor perturbación al contribuyente. En tercer lugar: el principio de la justicia; el impuesto será justo si se observa y respeta la capacidad económica de los sujetos llamados a tributar. La justicia tributaria comprende la necesidad de asegurar la observancia de dos condiciones, a saber: la «igualdad» y la «generalidad». Y el cuarto principio es el de la economía de recaudación, o sea que la percepción del impuesto debe hacerse al menor costo posible.

Es evidente que esta reforma del sistema tributario tiende a lograr esas cuatro finalidades, y yo debo reconocerlo con toda claridad y con toda lealtad.

Debo preguntarme si se cumple la reforma tributaria con un concepto integral. Dada la estructura actual de la administración fiscal,

creemos que aún se estará lejos del propósito de lograr ese ideal de una reforma integral tributaria.

Cabe advertir que seguirán en vigencia otros impuestos, a saber: internos unificados; de sellos; a la renta potencial de la tierra; el 5 por ciento del impuesto nacional de autopistas; combustibles; operaciones con divisas; derechos de exportación; derechos de importación y derechos aduaneros. Salvo el impuesto a la renta potencial de la tierra, es evidente que el resto de ellos son pasibles de traslación e incidencia hacia el consumidor, al integrar el costo de los servicios y productos. Es decir que aún subsistirá una ancha franja de impuestos llamados «indirectos», que, en última instancia, serán tributados por la mayor parte de la población.

En esta materia tributaria y proyectos en consideración, señalamos nuestras reservas y discrepancias, tal como fueron formuladas por la representación radical en la Honorable Cámara de Diputados y en este debate.

Por lo tanto, la ansiada «redistribución de los ingresos» quedará enervada, porque se mantendrá en la recaudación el predominio de los «impuestos indirectos», ya que el gravamen a las ventas y a las actividades lucrativas se substituye por el valor agregado, los que recaen directamente sobre el consumo e integran el costo de los servicios y productos.

Por eso estimamos que este sistema tributario, más que una reforma integral, se circunscribe a un reordenamiento jurídico, sin que por ello se logre aliviar a la población de las presiones consecuentes y de la amputación que sufre el salario al pagar la cuota de los sucesivos impuestos que se suman al precio de los productos. Son estas conclusiones e impugnaciones irrebatibles.

La política tributaria, señor presidente y señores senadores, puede asumir múltiples objetivos, según la dirección que las autoridades pretendan darle. Primero, como simple instrumento de recaudación fiscal; segundo, como instrumento para el desarrollo económico; y tercero, como elemento para la redistribución de la riqueza.

Resulta evidente entonces que el primer objetivo, puramente rentístico para la cobertura del gasto público, ha quedado superado totalmente. En la actualidad, muy pocos autores —solamente la ortodoxia financiera en la materia— pretenden adscribirse a este esquema. Puede señalarse que a partir de la década del 30, a través de la irrupción del pensamiento de Keynes, «la política fiscal» comenzó a ser objeto de un sistemático estudio, tendiente a que la actividad del Estado conforme una importante contribución a la formación del producto bruto nacional, tanto en lo que se refiere al estímulo de la demanda global, a través del gasto, como a la inversión pública, que conforma el marco estructural y las economías externas necesarias para el desarrollo del área privada de la econo-

mía. En consecuencia, recaudar impuestos especiales con destino a la capitalización de ciertos sectores económicos, como el establecimiento del elenco de desgravaciones, se inscribe en el referido propósito del desarrollo.

Finalmente, el tercer objetivo, como elemento para la redistribución de los ingresos de la riqueza, se orienta a gravar a quienes exhiben mayor capacidad contributiva, tanto en lo que concierne a la cuantía de las rentas personales como a las expresiones de la riqueza individual, gravando tanto el patrimonio como el enriquecimiento gratuito proveniente de las herencias y donaciones.

Es evidente, señor presidente, que nuestro sistema tributario ha tenido una deliberación cierta y una confusión permanente para lograr su debida organicidad.

Por eso nosotros queremos reiterar que la política fiscal, como lo enseña la doctrina, es un arma importante contra el paro de ese desarrollo fundamental y para la redistribución de los ingresos.

Entendemos, señor presidente, que esas enseñanzas de Keynes tienen todavía plena vigencia y actualidad.

Cabe preguntarse hasta qué punto el sistema tributario puede afectar los ingresos de la población. Al respecto, y dadas las opiniones formuladas por los señores senadores preopinantes, debemos establecer cómo se manejan países como el Reino Unido y los Estados Unidos. La recaudación impositiva afecta casi el 30 por ciento del ingreso nacional. En cambio, en otros países incipientes en desarrollo económico, como la India o Nigeria, el porcentaje oscila entre el 5 y el 8 por ciento. Es decir que las grandes naciones industrializadas establecen un grado de recaudación impositiva que es trascendente y que debemos valorar.

¿Qué ocurre en nuestro país? La presión tributaria, es decir el porcentaje de impuestos sobre el producto bruto nacional, alcanza oscilaciones notables. En 1966 era del 10,85 por ciento, ascendiendo en 1967 al 12,28 por ciento, para descender en los años posteriores hasta alcanzar el 8,53 por ciento en 1972. Esto tiene su debida explicación, pues se vincula con el retardamiento del aparato tributario en adecuarse al proceso inflacionario vivido.

Las discrepancias en los porcentajes de la presión tributaria autorizan a aquellos que opinan que el país puede idealmente alcanzar a tributar un 15 por ciento del ingreso nacional sin resentir el aparato productivo, pero en tanto y en cuanto la estructura impositiva determine que un 65 por ciento de las recaudaciones provengan de impuestos «indirectos», que gravan el consumo. Esta ampliación de la presión tributaria sólo se podrá resolver con una conclusión irrefutable: incidirá en una mayor disminución del «salario real» por la vía del aumento de los precios, incrementados por los impuestos respectivos.



Digo esto, señor presidente, porque nuestro apoyo, en términos generales, a estas decisiones tributarias tiene un contenido, una finalidad y también sus esperanzas por las reformas integrales del futuro. Nosotros opinamos —y lo ha dicho muy bien el doctor Pugliese— que la financiación del presupuesto debe hacerse con recursos genuino provenientes de la imposición, recaudados en forma racional y simplificada, que permitan participar a las provincias en la proporción en que contribuyen en la formación de la riqueza nacional. En tal situación, la disminución de los gravámenes al consumo ocupa un lugar preponderante. Lamentablemente, ello no sucede aquí si se atiende a las altas tasas que se aplicarán por el impuesto al «valor agregado», que viene a substituir al tradicional de ventas y a los locales por actividades lucrativas.

Nosotros, señor presidente, debemos también señalar que estas reformas tributarias tienen dignos antecedentes que no he escuchado que se hayan invocado en este debate, y me refiero que se ajustan al modelo presentado en la III Conferencia Interamericana de Tributación, que se realizó en México del 3 al 8 de septiembre de 1972, organizada por el Programa de Tributación de la Organización de los Estados Americanos, y que son el corolario de estudios profundos para establecer como modelo para Latinoamérica.

Lo señalo como adversario en la aspiración que este modelo que se ha elegido pueda servir para las confrontaciones y desafíos económicos y estructurales que reclama el país.

Nosotros hemos adelantado nuestra opinión general a favor de esta reforma, pero también hemos señalado nuestras discrepancias sobre el alto peso que tiene el impuesto al valor agregado que, por incidir sobre los consumos, causará notable impacto sobre la estructura de precios, por su fácil traslación hacia el consumidor final.

Algunos funcionarios pretenden, y lo han dicho, que la incidencia será poco significativa, y que serán los consumos de los grupos de alto poder económico los que serán mayormente gravados. Sin embargo, nosotros sostenemos que la lesión impositiva sobre estos grupos, como lo demuestra la teoría de la traslación e incidencia, será mínima, si se compara el sacrificio de tributar con la cuantía de sus ingresos personales o familiares.

Yo recuerdo en este momento los estudios realizados por el doctor Enrique García Vázquez y el doctor Antonio López Aguado, destacados estudiosos de la materia impositiva, como también los de un joven economista, el doctor Alberto J. Chueke, que ha escrito sobre este tema.

Un especialista argentino, Juan P. Castro, en el año 1973 señaló que el impuesto al valor agregado debe reunir los siguientes requisitos: que se trate de un impuesto capaz de producir

un elevado monto de ingreso; *ad valorem*; con base de imposición amplia; sin exenciones; con tasa única y moderadamente baja; neutro ante el proceso de producción y comercialización; con aptitud para determinar la carga impositiva en forma objetiva y con una aceptable capacidad de administración.

El modelo impositivo presentado al Congreso carece de varias de esas condiciones, especialmente en lo relativo a la «tasa única» y «moderada» y en cuanto a la administración, es evidente que falta, y que gravitará no sólo sobre los grandes contribuyentes, sino también sobre el simple trabajador, como así mismo incidirá sobre el salario real.

De tal modo, los grupos de asalariados y de contribuyentes de ingresos fijos verán imposibilitada su capacidad de ahorro y la estructura regresiva de la recaudación se acentuará aún más.

La verdad, señor presidente, es que nosotros sostenemos que debe recogerse la experiencia de otros países. El sistema impositivo norteamericano se basa, fundamentalmente, en los ingresos directos, a tal punto que éstos representan un 68 por ciento, y los impuestos indirectos sólo un 32 por ciento.

Como se ve, este tipo de estructura tributaria permite una mejor redistribución del ingreso, lo cual estimula el consumo de las clases que cuentan con menores entradas y obra como un fuerte estímulo de la demanda global.

Yo creo, señor presidente, que es necesario considerar las experiencias que John Strachey refiere en su obra *El capitalismo contemporáneo*, cuando señala que la acumulación es hoy en día sin disputa la de un excedente socialmente producido.

Esto nos hace recordar lo que ha ocurrido en el país con el sistema impositivo argentino de los últimos años con sus desgravaciones irritantes, los revalúos impositivos, las rebajas por inversión, las deducciones especiales, el tratamiento desigual de las ganancias de capital, los «blanqueos» periódicos, las prórrogas, etcétera, todo lo cual, al determinar una desigual distribución de capital, se reflejó también en una desigual distribución de la renta, que llevó a la participación de la minoría poseedora del capital a quedarse con el 60 por ciento de la renta y dejando sólo el 40 por ciento a los asalariados, a todo lo cual se agregó una política especialmente favorable a las radicaciones extranjeras que terminaron por monopolizar los sectores claves de la industria argentina, como lo hemos demostrado en otras intervenciones y debates.

Yo quiero analizar, señor presidente, muy sintéticamente, las distintas iniciativas en esta oportunidad para evitar así una revisión en particular.

Con respecto a la reforma de la coparticipación impositiva, el radicalismo postula y reclama una coparticipación automática de las provincias so-

bre la base de que un porcentaje de la recaudación se distribuya en relación inversa al grado de desarrollo. Si bien el proyecto no satisface totalmente los postulados de nuestra plataforma, quedó establecido en el debate en Diputados que esa participación será creciente y se adoptó la aspiración y el principio de la distribución inversa al grado de desarrollo, es decir, que a menos desarrollo más coparticipación.

Nosotros entendemos que, según el régimen, podrá llegarse a una coparticipación cercana al 50 por ciento de la recaudación para las provincias.

Esto hace aconsejable el apoyo a la iniciativa a condición de que evolucione aún más en el futuro.

Con respecto a la reforma de la ley de sellos y al establecimiento de los derechos de patente, entendemos en principio que los convenios con las provincias evitarían la doble imposición en ese impuesto.

En segundo lugar, el resurgimiento del derecho de patente es objetable por su anacronismo y también por su injusticia.

En tercer lugar, en cuanto al impuesto al enriquecimiento patrimonial a título gratuito, el programa del radicalismo afirma el impuesto sucesorio en reemplazo del substitutivo a la transmisión gratuita de bienes.

En cuanto al impuesto al valor agregado, nosotros sostenemos que es necesario reducir las tasas que gravan los consumos. Si bien el proyecto extiende la masa de contribuyentes, la crítica más grave contra el mismo es la alta tasa a abonarse en cada etapa.

También el impuesto a los premios de determinados juegos y concursos merece nuestro apoyo; pero también nos preocupa que esto pueda determinar el crecimiento de los juegos clandestinos.

En cuanto al impuesto a las ganancias, en general se apoya en cuanto se integran las ganancias periódicas con las de capital en un solo impuesto, eliminando un complicado régimen de desgravación que alivia a los contribuyentes por trabajo personal e incorpora las rentas accionarias a la declaración individual. Lógicamente, será necesario revisar el sistema de tasas y evitar complicaciones en la percepción del impuesto.

Con respecto a la reforma a la ley de procedimientos para impuestos, sostenemos que esto sí debe ser analizado en forma profunda y analítica. A nuestro juicio, en varios aspectos, desprotege al contribuyente frente al fisco contrariamente a una doctrina que se había venido asentando en los últimos años, especialmente la de creación del Tribunal Fiscal, de otorgarle al contribuyente su debido derecho a la defensa.

En el impuesto sobre capital y patrimonio, la Unión Cívica Radical sostiene que debe gravarse el patrimonio neto individual. Este impuesto cumple la formulación programática. Es, lógicamente, complementario del impuesto a las ganancias en cuanto se grava al patrimonio como expresión de riqueza.

La desgravación impositiva para la compra de títulos privados: este proyecto es una repetición de la ley 19.061 del régimen militar, que a nuestro juicio es muy discutible, en cuanto importa una cesión de fondos que pertenecen al Estado que debió recaudar los impuestos a favor de sociedades anónimas privadas y que conforman un grupo muy reducidísimo por las notables exigencias de la ley para gozar de los beneficios de la misma.

Durante el régimen de la ley 19.061 tan sólo cuarenta grandes sociedades anónimas que cotizan en bolsa se beneficiaron. Esto importa, además, una «capitalización forzosa» a favor de un grupo privilegiado por parte del contribuyente. Es decir que la única «inversión de capital» que va a ser desgravada en el futuro será ésta. Las sociedades pequeñas no van a tener esta suerte. Este es un proyecto que estimula la concentración de grandes capitales.

Con respecto a la nominatividad de títulos privados, estamos de acuerdo para terminar con los «capitales negros» y poder gravar todas las expresiones de riqueza; pero también estimamos que el sistema se complicará burocráticamente en cuanto establece la «caja de valores», que funcionará como un registro de la propiedad accionaria y restringirá la movilidad necesaria de capital. En relación al régimen para la emisión de documentos que instrumenten créditos, resulta inexplicable. Es equivocado creer que porque no se pague el impuesto carecerán de fuerza ejecutiva. La omisión impositiva no puede relevar al obligado del cumplimiento de una obligación que haya firmado.

Es decir, señor presidente, que en este análisis general y particular —sintéticamente hecho— de las distintas iniciativas, dejo fijada también nuestra opinión sobre cada uno de los capítulos que hacen a estas reformas tributarias.

Nos preocupa la industria nacional. Nos inquieta la pequeña y mediana industria; la situación de la industria electromecánica argentina frente al futuro plan energético que se ha anunciado. También nos preocupa esencialmente el sector agropecuario, que no debe ser víctima de una doble incidencia; y hay un acta de compromiso —como aquí bien se ha señalado— que obliga al poder público a computar el esfuerzo vigoroso que representa la riqueza agropecuaria del país.

La hora exige que el gobierno realice su obra. Hay que facilitarle para ello los recursos necesarios en un marco de justicia. Nadie pretende que esto pueda hacerse en un día, pero es una marcha indispensable.

Es una responsabilidad de todos: de los que ejecutan en el gobierno y de nosotros, como fuerza de oposición, que debemos contribuir a esa ejecución. Esa será la adecuada respuesta al desafío de nuestros tiempos.

Lo importante es avanzar decididamente. En verdad, la arteriosclerosis ideológica es más peligrosa que la arteriosclerosis física.

Nosotros queremos que el país avance y para ello hemos de contribuir con nuestra misión opositora pero puesta, fundamentalmente, al servicio de la grandeza de la Nación. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º del Honorable Senado, doctor José Antonio Allende.

**Sr. Elías.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Allende).** — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

**Sr. Elías.** — Señor presidente: bien se ha dicho que hubiese sido mejor estudiar estas reformas tributarias juntamente con el plan trienal y con el presupuesto de la Nación para 1974. Pero debo agregar, aun cuando comparto totalmente esa inquietud, que no hubiésemos avanzado gran cosa, porque el problema fundamental que tenemos para encarar este asunto con exacto conocimiento de las recaudaciones que se pueden obtener mediante estas reformas tributarias, es que carecemos de estadísticas y datos ciertos para hacer las evaluaciones correspondientes.

Por eso es que estimo debidamente el desafío que el gobierno nacional hace para arreglar el desorden tributario en que vive nuestro país.

Sin ánimo de extenderme excesivamente en mi exposición, al referirme a proyecto por proyecto voy a tratar de hacer algunas aclaraciones sobre determinadas críticas que se han formulado al conjunto de reformas tributarias.

Con respecto al impuesto sobre capitales y patrimonios, se lo ha criticado diciendo que no se actualiza el valor de los patrimonios debido al decrecimiento de la inflación.

Sobre el particular deseo señalar que en el artículo 12 del proyecto, al definir lo que se entenderá por patrimonio neto, se establece la forma de actualización de los valores en cada uno de los casos, con el mismo criterio y con los mismos índices con que se deben actualizar los mínimos no imposables.

Entendemos que debe remarcarse el carácter de gravamen de emergencia de este impuesto sobre capitales y patrimonios, y que su mayor justificación reside en la necesidad de cubrir la brecha de recaudación que producirá la eliminación del impuesto substitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes.

**Sr. Pugliese.** — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

**Sr. Elías.** — Sí, señor senador.

**Sr. Pugliese.** — Es para salir de una duda, en virtud de la celeridad con que tratamos estos proyectos.

Usted acaba de decir que el artículo 12 establece exactamente cómo se debe hacer la actualización de los valores del patrimonio. ¿Es-

tablece también cómo debe hacerse la evaluación, por ejemplo, de los *stocks* de mercaderías en existencia?

**Sr. Elías.** — La actualización de los *stocks* indudablemente requiere un tratamiento. Debe ser en la misma forma en que se evalúa la imposición a las ganancias. Volviendo al tema, decía que este impuesto tiene un carácter de emergencia, y se justifica por la brecha que se produce en la recaudación del impuesto substitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes y de su respectivo tributo de emergencia del 30 por ciento. Por esta razón se propone reducir su vigencia a dos años y así mismo disminuir la tasa proporcional del 1,3 % al 1 %. Para compensar esta rebaja, se proyecta eliminar el carácter de gasto deducible en el impuesto a las ganancias, lográndose de este modo mejorar la equidad general del sistema de imposición, toda vez que la admisión de su deducción sólo implicaría un beneficio para los contribuyentes que tengan rentas y otro mayor aún para los de mayores ingresos. Por otra parte corresponde recordar que este gravamen sobre el capital de las empresas es computable como pago a cuenta del impuesto al patrimonio neto individual, el cual tampoco es deducible como gasto en el impuesto a las ganancias.

Con respecto al mínimo no imponible, se proyecta aumentarlo de 500.000 a 2.000.000 de pesos por contribuyente, con el objeto de no gravar a empresas relativamente pequeñas, cuyos dueños en muchos casos —cabe admitir— no tendrían oportunidad de aprovechar el carácter de pago a cuenta del impuesto al patrimonio neto individual.

Finalmente en este gravamen, además de varias correcciones de carácter técnico, se introduce un régimen por el cual se faculta al Poder Ejecutivo a aumentar el valor de los bienes suntuarios o superfluos hasta en un 100 % y a reducirlo en el caso de actividades que por su naturaleza requieran un capital intensivo en forma permanente para lograr resultados normalmente inferiores a los obtenidos en la generalidad de actividades. En este sentido se basa la incorporación de una norma por la cual en el caso de explotaciones agropecuarias, corresponderá una reducción del 50 % para el cómputo del valor inmueble rural.

A este respecto, al tratarse el proyecto en particular vamos a proponer una alteración con respecto a la modificación ya propuesta para el artículo 20, por haberse deslizado un error de redacción.

En lo relacionado específicamente con el impuesto al patrimonio neto individual, merece destacarse la propuesta de modificación en el cómputo del impuesto al capital como pago a cuenta, en cuanto éste se limita a la parte gravada del capital atribuible.

En el impuesto a las ganancias deseo hacer previamente una aclaración con respecto a un

ejemplo mencionado aquí para la liquidación del impuesto y la determinación del porcentaje de desgravación. En el ejemplo que se dio se trataba de una persona con un capital de dos millones y una utilidad bruta del 10 por ciento, o sea de doscientos mil pesos. Seguramente se refiere —cabe puntualizar— a pesos ley. Si se tratara en ese ejemplo que se menciona de un empresario que trabaje en su propia empresa, su situación por la sanción de Diputados y la propuesta de esta comisión, en el impuesto a las ganancias será la siguiente. Supongamos una utilidad bruta de \$ 200.000. Las deducciones son las siguientes: a) mínimo no imponible \$ 20.400; b) adicional de empresario \$ 18.000; c) cargas de familia \$ 14.000; d) gastos médicos para tres personas \$ 1.800. Total, \$ 54.200. La renta sujeta a impuesto es de \$ 145.800; el impuesto básico, \$ 28.450; el adicional, \$ 248. El impuesto a las ganancias total es de \$ 28.698.

El impuesto al capital, para un total de \$ 2.000.000, es no imponible en su totalidad, es decir, es cero.

El impuesto al patrimonio, que se supone de \$ 2.000.000, es por escala, de \$ 4.250; el descuento por esposa y dos hijos, \$ 300; el impuesto a pagar, \$ 3.950. El total de impuestos a pagar es el siguiente: ganancias, \$ 28.698; capital, cero; patrimonio, \$ 3.950; total, \$ 32.648.

Para una utilidad de \$ 200.000, el porcentaje sobre la utilidad es 16,324 %. Y en el ejemplo que se nos menciona, se dijo que era 23,1 %. El porcentaje sobre el capital resulta del 1,632 %. La utilidad bruta es del 10 % y la utilidad neta es 8,368 %.

Se señaló también la situación de los inmuebles por venta que no fuera habitual y su incorporación en el artículo 57. Esta situación está considerada en el artículo 81 de la ley de ganancias, que se remite al artículo 57.

Con respecto a la doble imposición o a la doble incidencia de los impuestos para la actividad agropecuaria, no alcanzamos a entender perfectamente la crítica. No sé si entendí mal la observación, pero pienso que se ha tomado la renta normal potencial como impuesto nuevo; sin embargo, debo aclarar que en este caso es una forma de liquidar el impuesto a las ganancias.

Con respecto a las modificaciones que se proponen al proyecto con media sanción de la Honorable Cámara de Diputados, merecen destacarse los siguientes aspectos.

Se incorpora como inciso x) del artículo 20 una exención en favor de los intereses originados por créditos obtenidos en el exterior para financiar importaciones destinadas al equipamiento de actividades o beneficiada por regímenes especiales de promoción. Esta exención en los hechos implicará un menor costo financiero para el importador del país, toda vez que en la generalidad de los casos se hace cargo del

impuesto que pueda corresponder sobre los intereses pertinentes.

Con la modificación que se aconseja al inciso f) del artículo 45 se instrumenta un régimen por el cual sólo se computarán gravados los dividendos en la medida que respondan a utilidades impositivas de la entidad. Es decir, que las exenciones, desgravaciones, etcétera, de que pudiera gozar la sociedad serán mantenidas en cabeza de los accionistas en oportunidad de percibir los dividendos respectivos. De esta manera se afianzan los principios de neutralidad y subjetividad que caracterizan a este impuesto a las ganancias.

A los fines de determinar los beneficios impositivos no distribuidos —y consecuentemente gravados al 29,50 %—, se incorpora la deducción del gravamen establecido en el título I de la ley de impuestos sobre capitales y patrimonio, como así mismo la de reservas no deducibles en el impuesto a las ganancias, pero cuya constitución sea dispuesta con carácter obligatorio por organismos oficiales tales como el Banco Central de la República o la Superintendencia de Seguros de la Nación. Con esta modificación se contempla una situación de justicia, toda vez que no podría exigirse a las sociedades que distribuyen dividendos con resultados que no poseen o que les está vedado disponer.

Se proyecta una nueva escala progresiva para la determinación del gravamen que recae sobre las personas de existencia física y sucesiones indivisas, por la cual se adecuan los tramos y las alícuotas pertinentes elevándose la tasa marginal máxima del 45 % al 46 %. Esta tasa máxima sólo será aplicable para las ganancias gravadas que superen el límite de \$ 360.000 en lugar del límite de \$ 170.000 que indica el proyecto recibido de la Honorable Cámara de Diputados. De esta manera se logrará beneficiar a los sectores de bajos y medianos ingresos y se acentuará en cambio la imposición para beneficios gravados que superen los \$ 2.000.000, mejorando —aunque a costa de un mayor sacrificio fiscal— la equidad general de sistema que pensamos habrá de redundar en favor de una mayor capacidad de ahorro y de inversión a la vez que en un mejor grado de cumplimiento voluntario por parte de los contribuyentes.

Se propone agregar al segundo párrafo del artículo 105 una disposición por la cual se admiten las desgravaciones o exenciones que tengan origen en hechos o actos realizados hasta el 31 de diciembre de 1973, aun para los contribuyentes que cierren sus ejercicios durante el año 1974 y lo hubieran iniciado en 1973. De este modo se aceptan principios básicos de seguridad y respeto que deben brindarse a los contribuyentes.

Finalmente se substituye el artículo 109, referente a desgravaciones por construcción de

unidades de vivienda, ampliando la vigencia del régimen actual con modificaciones que permitan tipificar más expresamente el carácter popular de su destino. Por otra parte se introducen normas que tienden a evitar desviaciones a las que podrá conducir el sistema vigente.

En general, con respecto al artículo 109, la desgravación para construcción de vivienda económica aprobada por la Subsecretaría de Estado de Vivienda de la Nación recibe el doble de beneficios en aquellos casos en que las empresas concurren con capitales propios con respecto a aquellos en que la construcción se realiza mediante la utilización de créditos oficiales.

Es importante destacar la sensible mejora que tiene la escala de imposición en el impuesto a las ganancias con respecto al impuesto a los réditos vigente, tanto en lo que se refiere al proyecto original del Poder Ejecutivo como al proyecto venido en revisión de la Cámara de Diputados. La presión tributaria que tenía la parte ascendente en los sectores de medianos y pequeños recursos en forma acelerada tiene ahora un desarrollo en su expresión gráfica que conforma ampliamente los principios que deben regir toda imposición tributaria justa.

Con respecto a la ley de enriquecimiento gratuito, la comisión ha compartido en términos generales el proyecto sancionado por la Honorable Cámara de Diputados. No obstante ha considerado necesario introducirle ciertas reformas, que no alteran la estructura del proyecto, con el fin de brindarle mayor equidad y de corregir algún defecto técnico.

Los ajustes por razones de equidad son fundamentalmente los siguientes: 1) La sanción de la Honorable Cámara de Diputados prevé la deducción de los gastos por sepelio hasta un máximo, que esta comisión comparte, pero que variaría según la condición económica y social del causante. Esta comisión cree que la posibilidad de un trato discriminatorio, en función no ya de la realidad sino de una diferencia de *status* como el indicado, no resulta justificable y por ello propone su supresión. 2) En los casos de muerte o de ausencia declarada, la Honorable Cámara de Diputados propicia un régimen de pago del impuesto que consiste en una espera de dieciocho meses sin interés, luego un año con un 1 % de interés mensual y recién la posibilidad de exigencia compulsiva del impuesto, salvo la obtención de una prórroga de las disponibles con carácter general para los restantes impuestos.

Esta comisión ha considerado conveniente mejorar las facilidades de pago del impuesto para que en lo posible no venga a perjudicar la actividad de las pequeñas empresas el fallecimiento de un dueño. Por tal causa propone mejorar el sistema indicado otorgando dos años sin intereses y luego otros dos años más, con el interés del 1 %, para recién luego de esos cuatro años asimilar la situación a la de otro

tributo vencido. 3) La Honorable Cámara de Diputados propone que mientras se mantenga la indivisión entre los coherederos cada uno de ellos responda solidariamente con los demás por la imposición que corresponda al total del activo indiviso. Dicha solución es correcta en cuanto se funda en el estado de inhibición, pero no lo es en cuanto pretenda que dicha solidaridad resulte ilimitada para cada deudor del impuesto, principio que por otra parte es el rector en materia de beneficios hereditarios. Por ello proponemos que dicha solidaridad tenga por límite el beneficio que corresponda a cada heredero en el activo indiviso. Es decir que cada uno responderá por el total de la deuda de impuestos que corresponde a todos los herederos sumados pero sólo hasta el límite de su herencia.

Los ajustes técnicos que se han efectuado son los siguientes: los forzosamente derivados de la modificación del régimen de pagos indicados anteriormente, por lo que en consecuencia, salvo prórroga acordada, la Dirección General Impositiva sólo podrá iniciar el juicio luego de transcurridos 4 años de producido el deceso, si es que no se le ha abonado el impuesto.

El plazo de un año que esta comisión propone elevar a dos años, durante el cual la deuda del impuesto sólo genera un 1 % de interés, estaba previsto, probablemente por omisión, sólo para el supuesto de transmisiones por causa de muerte, sin advertir que la situación era análoga en la declaración de ausencia con presunción de fallecimiento. Tanto era así que el plazo de espera sin intereses era común a ambos casos. Se propone que el plazo de espera con el 1 % de interés sea común a ambos casos.

La sanción de la Honorable Cámara de Diputados pretendió que el beneficio obtenido por causa de muerte tuviera un margen de no imposición mayor cuando se produjera entre sucesores forzosos que en los restantes casos en los que el mínimo no exento y no imponible específicamente previsto era de \$ 10.000. Para los sucesores forzosos se propuso un importe de \$ 30.000. Esta comisión comparte tanto la intención como los importes asignados, pero dicha medida se implementó defectuosamente desde el punto de vista técnico. Así como los mínimos no imponibles generales que alcanzan por igual a las herencias, anticipos, donaciones, etcétera, están en la parte de la ley que se refiere a exenciones, y están implícitamente en las escalas de progresividad de la ley, también lo estaban la exención general para el seguro en caso de muerte de \$ 10.000, lo cual era correcto. En cambio el incremento de la exención del seguro a \$ 30.000 para los sucesores forzosos, se introdujo en la norma de sujeción del impuesto donde se indican los hechos que originan la deuda impositiva, como tales, sin señalar en qué cuantía o en qué medida. Esa ubicación es técnicamente defectuosa, pues no se trata de una situación de no sujeción (y por ello las herencias

y otros casos figuran sin indicación de monto alguno) sino de exención, y eventualmente de mínimos no imponibles. Por tal causa se excluye la elevación a \$ 30.000, mencionada de la norma que indica la sujeción del impuesto y se la incluye en el artículo del proyecto de ley que prevé la exención general de \$ 10.000 para los restantes seguros, así como también en las disposiciones de la ley que regulan la aplicación de la escala progresiva. Además se introducen otras pequeñas para compatibilizar, en materia de remisiones, el ajuste explicado.

En cuanto al impuesto a los premios, la comisión ha compartido, en términos generales, el proyecto sancionado por la Honorable Cámara de Diputados; no obstante ha considerado necesario introducirle ciertas reformas, que no alteran la estructura del impuesto, a fin de brindarle mayor equidad y de corregir también aquí algunos defectos de carácter técnico.

En la sanción que tenemos a consideración se estimó que cuando los premios no excedieran los \$ 10.000 y se tratase de rifas o concursos organizados por entidades de beneficencia o para allegar fondos destinados a viajes de finalización de cursos, no debía computarse el impuesto en adición al premio si éste no era descontado al pagarlo. Dada la naturaleza de las situaciones analizadas, que se explican por sí solas, se ha considerado conveniente ampliar substancialmente dicho importe máximo llevándolo a \$ 50.000.

Así mismo, la sanción de la Honorable Cámara de Diputados previó una exención del impuesto para los premios cuyo importe no excediera de \$ 3.000, considerando esta comisión que en la actualidad dicha cifra resulta exigua y proponiendo su incremento a \$ 5.000.

A este respecto considero oportuno destacar que en los casos en que las provincias han legalizado juegos clandestinos, éstos han estado siempre sujetos a la imposición de las ganancias eventuales. No obstante ello, se ha logrado erradicar definitivamente esos juegos clandestinos, por lo que consideramos necesario mantener ahora las disposiciones que se están observando para este tipo de juegos y no creemos que van a originar ningún problema.

La última corrección es de índole puramente técnica y destinada a evitar problemas de interpretación. Por ello se substituye en el párrafo final del artículo 6º la palabra «producido» por «perfeccionado», dado que los derechos, que es a lo que se refiere el verbo, sólo son susceptibles de perfeccionarse pero no de producirse, calificativo propio de los hechos.

A la ley de coparticipación la comisión le ha introducido una sola modificación.

Tal es el espíritu equitativo, propuesto en la Cámara de Diputados que fue modificado en el recinto, simplificando su texto pero con un resultado totalmente distinto y que carece de fun-

damentación aceptable, al olvidar la realidad del equilibrio de las finanzas y de las técnicas recaudatorias.

En 1974, por impuesto a las ventas, la Nación y las provincias percibirán fondos que parcialmente correspondan a dicho ejercicio (en 1975 vencerán los anticipos y el saldo final de ventas 1974) y el saldo correspondiente a ejercicios anteriores por arrastre, incluidos anticipos finales y saldo de ventas 1973. Algo parecido ocurrirá en cada jurisdicción local con relación a su impuesto a las actividades lucrativas.

La aparición del impuesto al valor agregado en 1975 no cambiará este aspecto recaudatorio, o sea que en dicho año sólo se recaudará una parte del impuesto del mismo (los anticipos y vencimientos finales recién ingresarán en 1976), pero se recaudarán los últimos anticipos y vencimiento de ventas 1974 y arrastres de ejercicios anteriores, y las jurisdicciones locales recaudarán arrastres de 1974 y años anteriores de actividades lucrativas. Esta situación no varía por que se aplique el impuesto al valor agregado o continúen los que pretenden reemplazarlo. De modo que la garantía de equilibrio financiero sólo puede pretender una igualación en base a situaciones iguales, y es absolutamente imposible que la recaudación de valor agregado de 1975 (substancialmente inferior en principio a la que corresponda a dicho impuesto por el año 1975) por sí sola pueda cubrir lo recaudado en impuesto a las ventas y a las actividades lucrativas en 1974, con más el incremento que pudiera producirse en los precios.

Lo que se pretende, es que la recaudación por valor agregado en 1975, con más lo que se recaude en 1975 por impuesto a las ventas de 1974, y arrastres de ejercicios anteriores y con más lo que se recaude en 1975 por impuesto de lucrativas de 1974 y años anteriores, no sea inferior para las jurisdicciones locales a lo que se recaudó en 1974 en concepto de ventas y lucrativas, incrementado con el aumento de precios que pudiera producirse, lo que equivale al efecto de que se hubieren mantenido, sin aumentar sus alícuotas, y no se derogaran por la aparición de valor agregado. Por tal causa, esta comisión propone modificar en este punto la sanción de la Honorable Cámara de Diputados, propiciando en su reemplazo la que propuso oportunamente en su dictamen la Comisión de Presupuesto y Hacienda de dicha Honorable Cámara, que era correcta.

El principio puro del impuesto al valor agregado es que cuando establecemos el gravamen del 13 %, el valor íntegro del bien está alcanzado con prescindencia del tratamiento de los integrantes del producto; esto, atento a que al establecerse una exención se la hace para el producto terminado o final, el que al incorporarse como materia de otro, pierde la calidad que la justificara.



Por ejemplo: se exime la harina por ser producto de consumo popular, pero no las masas, las que no revisten tal carácter y por ello no justifican su desgravación o reducción de la tasa del 13 %, y el pan, que también se elabora con harina, está igualmente exento.

Se dijo que el impuesto al valor agregado no es simple. Sin embargo, su forma de liquidación es similar a la del actual impuesto a las ventas. No sólo reemplaza al impuesto a las ventas, sino también al impuesto a las actividades lucrativas. Por lo tanto se evitan aquí los enormes problemas que han devenido de la aplicación del convenio multilateral, por el cual, como se ha dicho en el informe general del señor senador Romero, con una misma operación se debe responder ante distintos fiscos que tienen distintas legislaciones (por ejemplo, ventas en Capital Federal, en Salta o en Corrientes), corriendo el riesgo muy probable de ingresar a más a un fisco con el difícil recúpero del impuesto.

Respecto al impuesto al valor agregado, también fue objetado en cuanto puede significar mayores costos de administración. Debemos destacar que la administración de este impuesto va a substituir a dos administraciones que se realizan ahora: la que corresponde al impuesto a las ventas y a las actividades lucrativas.

Entendemos, además, que va a dar mucho mejor resultado y que simplificará a los contribuyentes su régimen de liquidación.

En cuanto a la tasa del 13 %, en forma muy breve debo decir que la tasa real que debió establecerse para este impuesto para substituir a los referentes a las ventas y actividades lucrativas de la actualidad y que lleguen al 19 %, tendría que haber sido del 14,5 %, en tanto que ahora se propone una del 13 %, con lo cual la presión tributaria va a disminuir también en este rubro.

En general, con esta reforma tributaria la presión es mucho menor para todas las personas físicas o jurídicas de pequeños y medianos recursos y se va a incrementar, como es lógico, para aquellas de grandes recursos, con lo cual se va a lograr la progresividad del impuesto.

Finalmente, con este régimen tributario podremos saber cuál es el patrimonio real que tienen los ciudadanos argentinos y poder determinar después con más acierto y seguridad las variaciones que el sistema pueda requerir.

**Sr. Presidente (Allende).** — Se votarán por su orden los distintos proyectos de la reforma tributaria que se han informado en conjunto.

## I

### Impuesto a las ganancias

**Sr. Presidente (Allende).** — Si no se hace uso de la palabra se va a votar en general el dic-

tamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda sobre impuesto a las ganancias.

—Se vota y resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Allende).** — En consideración en particular.

**Sr. León.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Allende).** — Tiene la palabra el señor senador por Chaco.

**Sr. León.** — En nombre del bloque de la Unión Cívica Radical voy a decir que no vamos a participar en la discusión en particular, por cuanto con las argumentaciones que hemos expuesto en el tratamiento en general consideramos suficientemente debatido el tema.

Igual temperamento adoptaremos con el resto de los dictámenes que se van a votar.

**Sr. Culasso Mattei.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Allende).** — Tiene la palabra el señor senador por Santa Fe.

**Sr. Culasso Mattei.** — Pensaba hacer consideraciones en particular sobre los proyectos que se están tratando. Pero en mérito a la brevedad voy a solicitar, si es que esto es reglamentario, que se inserte en el Diario de Sesiones lo que iba a expresar para fijar mi posición en relación a cada uno de los asuntos.

—Asentimiento (1).

**Sr. Presidente (Allende).** — Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar en particular.

—Se vota y resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Allende).** — Queda aprobado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

## II

### Impuesto al valor agregado

**Sr. Presidente (Allende).** — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda sobre el impuesto al valor agregado.

—Se vota y resulta afirmativa.

—En particular, sin observación, es igualmente aprobado.

**Sr. Presidente (Allende).** — Queda aprobado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

(1) Véase el Apéndice.

## III

**Impuesto a los premios de juegos y sorteos**

**Sr. Presidente (Allende).** — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda sobre impuesto a los premios de juegos, de sorteos y concursos o apuestas deportivas.

—Se vota y resulta afirmativa.

—En particular, sin observación, es igualmente aprobado.

**Sr. Presidente (Allende).** — Queda aprobado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

## IV

**Impuesto sobre capitales y patrimonios**

**Sr. Presidente (Allende).** — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda referido a impuesto sobre capitales y patrimonio.

—Se vota y resulta afirmativa.

—En particular, sin observación, es igualmente aprobado.

**Sr. Presidente (Allende).** — Queda aprobado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

## V

**Impuesto al enriquecimiento patrimonial a título gratuito**

**Sr. Presidente (Allende).** — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda sobre impuesto al enriquecimiento patrimonial a título gratuito.

—Se vota y resulta afirmativa.

—En particular, sin observación, es igualmente aprobado.

**Sr. Presidente (Allende).** — Queda aprobado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

## VI

**Régimen de desgravación impositiva para la compra de títulos valores privados**

**Sr. Presidente (Allende).** — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el dic-

tamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda sobre el régimen de desgravación impositiva para la compra de títulos valores privados y su nominatividad.

—Se vota y resulta afirmativa.

—En particular, sin observación, es igualmente aprobado.

**Sr. Presidente (Allende).** — Queda aprobado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

## VII

**Régimen de coparticipación federal de impuestos nacionales**

**Sr. Presidente (Allende).** — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda sobre reformas al régimen de coparticipación federal de impuestos nacionales.

—Se vota y resulta afirmativa.

—En particular, sin observación, es igualmente aprobado.

**Sr. Presidente (Allende).** — Queda aprobado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

## VIII

**Normas complementarias de la reforma tributaria**

**Sr. Presidente (Allende).** — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda sobre normas complementarias de la reforma tributaria: orden del día 129, punto I.

—Se vota y resulta afirmativa.

—En particular, sin observación, es igualmente aprobado.

**Sr. Presidente (Allende).** — Queda aprobado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

## IX

**Emisión de documentos que instrumenten créditos**

**Sr. Presidente (Allende).** — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda sobre régimen para la emisión de documentos que instrumenten créditos: orden del día 129, punto II.

—Se vota y resulta afirmativa.

—En particular, sin observación, es igualmente aprobado.

**Sr. Presidente (Allende).** — Queda aprobado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

## X

**Reformas a la ley 11.683 sobre procedimientos en materia impositiva**

**Sr. Presidente (Allende).** — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda por el que se introducen reformas a la ley 11.683 de procedimientos para la aplicación, percepción y fiscalización de impuestos.

—Se vota y resulta afirmativa.

—En particular, sin observación, es igualmente aprobado.

**Sr. Presidente (Allende).** — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

—Es la hora 0 y 5 del día 22 de diciembre.

ADOLFO STRASBERG.  
Director del Cuerpo de Taquígrafos.

## 6

# **APENDICE**

## I

## **SANCIONES DEL HONORABLE SENADO**

## 1

### **Reformas al Código Penal**

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

Artículo 1º — Modificase el Código Penal (ley 11.179), en la forma siguiente:

1º Agrégase como inciso 4º del artículo 80 del Código Penal el siguiente:

Al que matare a otro con el concurso premeditado de dos o más personas.

2º Auméntase la escala penal correspondiente al artículo 141 del Código Penal fijándose la misma en prisión o reclusión de seis meses a tres años.

3º Auméntase la escala penal correspondiente al artículo 142 del Código Penal fijándose la misma en prisión o reclusión de dos a seis años.

4º Inclúyese como artículo 142 bis del Código Penal el siguiente:

Se impondrá prisión o reclusión de cinco a quince años al que sustraer, retuviere u ocultare a una persona con el fin de obligar a la víctima, o a un tercero, a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad.

La pena será de diez a veinticinco años de prisión o reclusión:

1. Si la víctima fuere mujer o menor de dieciocho años de edad.
2. En los casos previstos en el artículo 142, incisos 2º y 3º de este código.

Si resultare la muerte de la persona ofendida, la pena será de prisión o reclusión perpetua.

5º Suprímese del artículo 142, inciso 1º, del Código Penal, la frase «o con propósitos de lucro».

6º Inclúyese como artículo 149 bis del Código Penal, el siguiente:

Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas. En este caso la pena será de uno a tres años de prisión si se emplearen armas o si las amenazas fueren anónimas.

Será reprimido con prisión o reclusión de dos a cuatro años el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad.

7º Inclúyese como artículo 149 ter del Código Penal, el siguiente:

En el caso del último apartado del artículo anterior la pena será:

1. De tres a seis años de prisión o reclusión si se emplearen armas o si las amenazas fueren anónimas.
2. De cinco a diez años de prisión o reclusión en los siguientes casos:

a) Si las amenazas tuvieran como propósito la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos;

b) Si las amenazas tuvieran como propósito el de compeler a una persona a hacer abandono del país, de una provincia o de los lugares de su residencia habitual o de trabajo.